



**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO**  
**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA**  
**MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**

**UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCEDIMIENTO  
ADMINISTRATIVO Y EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  
EN EL MARCO DE LA LEY 1437 DE 2011, ANALISIS Y REFLEXIONES.**

**PRESENTADO POR:**  
**WILLIAM EDUARD HERNÁNDEZ VANEGAS**

**LÍNEA INVESTIGATIVA: REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO CÓDIGO DE  
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO: INFLUENCIAS, ESTUDIOS DE DERECHO COMPARADO,  
ANÁLISIS DE NUEVAS INSTITUCIONES Y DE RECONFIGURACIÓN DE LAS  
EXISTENTES.**

**DIRECTOR DE TESIS:**  
**ANDRÉS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Ph.D.**

**BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2015**

## Plano sumario

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>7</b>
<b>1. JUSTIFICACIÓN .....</b>	<b>13</b>
<b>3. OBJETIVOS .....</b>	<b>17</b>
<b>4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .....</b>	<b>18</b>
<b>5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....</b>	<b>18</b>
<b>6. HIPOTESIS. ....</b>	<b>21</b>
<b>7. ESTADO DEL ARTE .....</b>	<b>23</b>
<b>PARTE I ANALISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA Y EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO. ....</b>	<b>27</b>
CAPÍTULO 1. Conceptos, antecedentes y nociones legales de la utilización de medios electrónicos en la revisión normativa colombiana.....	29
1.1 Concepto, alcances, objetivos.....	30
1.2 Ámbito constitucional del uso de los medios electrónicos.....	31
1.3 Leyes, Decretos, Resoluciones, Acuerdos. ....	32
1.4 Una corta mirada del uso de los medios electrónicos en España. Marco normativo para de su utilización en la administración pública y de justicia. ....	42
Conclusiones de capítulo.....	42
CAPÍTULO 2 ANÁLISIS, PERSPECTIVAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO.....	44
2.1 De la globalización en materia de las tecnologías de la información en el derecho administrativo Colombiano.....	44
2.2 Del fenómeno del Mimetismo conforme a la utilización de los medios electrónicos en la Ley 1437 de 2011.....	48
2.3 Del acogimiento del uso de medios electrónicos en el Derecho Administrativo como puente para mejorar la relación Administración – Administrados. ....	53
2.4 Utilización de Medios electrónicos sujetos a los principios del procedimiento administrativo. ....	55
2.5 De las generalidades del concepto de la Administración electrónica como componente universal y determinante de la conformación de una sede electrónica.....	65

2.6 La sede electrónica como puerta de entrada a la administración pública y de justicia administrativa, conforme a la adaptación de las autoridades a las tecnologías de la información. ....	67
2.7 Derecho de los ciudadanos a la utilización de los medios electrónicos determinados en la Ley 1437 de 2011 en virtud del principio de igualdad. ....	76
Conclusiones de capítulo.....	84
PARTE II VISIÓN CRÍTICA DE LAS EXPECTATIVAS Y RETOS DE LA UTILIZACION DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL ELECTRÓNICO. ....	86
CAPITULO I. Componentes básicos para la implementación de los medios electrónicos en el marco de la Ley 1437 de 2011. ....	87
1.1 De la Seguridad de la información como característica definitiva en el salto tecnológico a los que se enfrenta la administración pública y de justicia frente a sus administrados o usuarios... ..	87
1.2 El manejo y protección de los datos a los que tenga acceso la administración pública y la administración de justicia contenciosa administrativa con la implementación de la sede electrónica y el expediente judicial electrónico.....	93
1.3 El rol del Estado y la academia en la formación de profesionales en la relación de la utilización de los medios electrónicos. ....	96
1.4 La confianza en los usuarios para el uso real de las nuevas tecnologías que proporciona el Estado a todas las autoridades. ....	98
1.5 Funcionarios Públicos al servicio de la Administración Pública y de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, capacitados tecnológicamente para los retos que exige la implementación de las TIC en la misma.....	99
1.6 El rol del usuario informático como parte fundamental para la consecución de los fines del Estado, en la utilización de los medios electrónicos contemplados en el CPACA. ....	102
1.7 Presupuesto de la rama judicial como factor determinante en la consecución de un procedimiento judicial electrónico. ....	103
1.8 El compromiso ecológico que se desprende de la real implantación y funcionamiento de los medios electrónicos fijados en la Ley 1437 de 2011.....	106
1.9 Garantías sujetas a la responsabilidad del Estado en la utilización de los medios electrónicos, o en el mal funcionamiento de los mismos. ....	114
Conclusiones de capítulo.....	116
CAPITULO II RETOS EN EL USO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN EL MARCO DE LA LEY 1437 DE 2011, CON MIRAS AL LITIGIO JUDICIAL EN LÍNEA: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. .	117
2.1 El expediente judicial electrónico planteado en la Ley 1437de 2011 como cimiento del litigio en línea en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ....	117

2.2 De la desmaterialización de expedientes conforme a la utilización de los medios electrónicos contenidos en la Ley 1437 de 2011.....	122
2.3 Del Derecho de toda persona al acceso a la administración de justicia por medio del procedimiento judicial electrónico, que se desprende de la segunda parte de la Ley 1437 de 2011.....	124
2.4 La descongestión judicial en el proceso judicial administrativo como uno de los objetivos en la implementación de los medios electrónicos en el CPACA. ....	127
Conclusiones de capítulo.....	131
<b>CONCLUSIONES</b> .....	132
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	135

Nota de aceptación

---

---

---

---

---

---

Presidente del Jurado

---

Jurado

---

Jurado

---

Jurado

Bogotá, D.C. diciembre de 2015.

## **AGRADECIMIENTOS**

A la Universidad del Rosario por su trascendental apoyo para la realización de este trabajo y al Doctor Andrés Rodríguez Gutiérrez por su disposición e invaluable aportes para la elaboración del presente escrito.

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objeto analizar, desde una revisión documental, la utilización de los medios electrónicos a la que se enfrenta el Estado colombiano, en el procedimiento administrativo y en los procesos contencioso administrativos, en el marco del Código de Procedimiento administrativo y de los contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011<sup>1</sup> en adelante, CPACA<sup>2</sup>. Con ese fin, daremos cuenta de las influencias, el análisis de conceptos y alcances. Para luego hacer unas reflexiones sobre el uso de estos medios, el cual trae unas implicaciones, que están sujetas a las expectativas, retos y perspectivas inherentes a todo cambio.

Visto así, una de las realidades a las que se enfrenta el derecho en Colombia, es la de trabajar de la mano con los diferentes aportes que las ciencias informáticas han venido desarrollando, útiles para esta disciplina. No obstante, para la ideal implementación de los medios electrónicos conforme a la Ley 1437 de 2011, existen una serie de implicaciones: como la utilización de los medios electrónicos conforme a los principios contenidos en la citada norma, del cual por ejemplo se desprende el derecho a la igualdad para que de todos los ciudadanos puedan utilizar los sistemas expertos mencionados; los deberes del Estado conforme a la seguridad, protección de datos; el presupuesto que se le asigne a la rama judicial para la puesta a punto el expediente judicial electrónico como cimiento del expediente judicial en línea; la desmaterialización de los expedientes físicos con políticas de cero papel conforme al compromiso ecológico asumido por el Estado para la protección del medio ambiente; el derecho de los ciudadanos al acceso a la administración de justicia a través del uso de medios electrónicos, y el avance de estas herramientas para solucionar problemas en la jurisdicción contencioso administrativa como la congestión judicial. deben examinarse para alcanzar tal fin, a cuál más, éstas, determinan de manera irrestricta, el éxito o fracaso de la norma que regula.

---

<sup>1</sup> Para el autor Gustavo Quintero Navas, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contiene, lo que podemos denominar, un *"completo esquema electrónico"*. Disponible en: QUINTERO NAVAS, Gustavo Arnulfo, Contencioso Administrativo y medios electrónicos: un gran paso hacia la modernización del ejercicio de la justicia administrativa. Revista de Derecho, comunicaciones y Nuevas Tecnologías N° 6, Universidad de los Andes, Bogotá, 2011, p. 13.

<sup>2</sup> Ley 1437 de 2011 la cual fue entrada en vigencia el 2 de julio de 2012.

De acuerdo a lo anterior, este escrito al estar dentro de la línea investigativa de reflexiones sobre el nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo: influencias, estudios de derecho comparado, análisis de nuevas instituciones y de reconfiguración de las existentes, es pertinente y toma relevancia, dado que el tema es novísimo<sup>3</sup> dentro de esta codificación los aportes aquí dados pueden dar una orientación crítica y valorativa de la ley de uso de medios electrónicos.

En este sentido, el CPACA, se convierte, en un instrumento moderno acorde a los fines del Estado y principios de la función administrativa planteados en la Constitución Política de 1991. Pues el anterior Código<sup>4</sup>, Decreto 01 de 1984<sup>5</sup> si bien es cierto tuvo algunas reformas, no estaba sincronizado armónicamente con los principios, derechos, garantías y obligaciones planteados en nuestra carta fundamental, por lo cual el desarrollo de la Administración Pública y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se manifestaba, a través de la jurisprudencia que se ha desarrollado en las Altas Cortes.

Es por ello, que la Ley 1437 de 2011<sup>6</sup>, incluye una reestructuración de las relaciones que surgen entre individuo y Estado y entre la administración con los administrados, por tal, estipula elementos de modernización del Estado, brindando herramientas para que la administración centre sus esfuerzos en mejorar la relación con las partes antes mencionadas, este tipo de instrumentos se adaptan también al mundo moderno y a las

---

<sup>3</sup>Para el profesor Jorge Pérez Villa los trámites administrativos por *medios electrónicos son una garantía legal la cual se enlaza con toda la revolución industrial-científica y tecnológica que cubre todas las naciones en el siglo XXI y muy particularmente a la administración pública*, ver en: PÉREZ VILLA, Jorge, Comentarios al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, Leyer, 2012, p. 91.

<sup>4</sup> Sin perjuicio que el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, deroga el Decreto 1 de 1984, ordena que el mismo, permanecerá vigente para aplicarse a los procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia por parte del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

<sup>5</sup> Conocido como el Código Contencioso Administrativo, contiene en su primera parte el *Código administrativo* que determina los procedimientos administrativos, y en la segunda parte se encuentra el *Código contencioso administrativo* el cual regula el control jurisdiccional de la actividad administrativa. Ver: YOUNES MORENO, Diego, Curso de derecho administrativo, 7° edición, Bogotá, Temis, 2004, p.6.

<sup>6</sup> Esta Ley, sancionada por el Gobierno Nacional con el número 1437, el 18 de enero de 2011, tiene como antecedente el proyecto de Ley 198 de 2009, publicado en la gaceta del congreso 1173 del 17 de noviembre del mismo año. Después del sometimiento a estudio de conciliación de las cámaras, el acuerdo se formaliza el 14 de diciembre de 2010.



necesidades del ciudadano, como es el caso del uso de las nuevas tecnologías dentro del procedimiento administrativo.

En cuanto al haber constitucional, los principios fundantes de ésta son universales, los cuales rigen el hacer del Estado y sus procedimientos. De igual forma, el CPACA, contiene unos principios generales que para el caso en estudio hacen referencia a la ley que fomenta, pero que no van en contradicción con los que la carta política asume como puntales, En este orden, estos cimientos de norma y ley se ponen en entre dicho, al examinar las realidades que asisten a la nación, con base en las variables arriba barruntadas.

En este orden de ideas, el Estado debe proponedor por blindar de seguridad la utilización de los medios electrónicos, con miras a proteger los datos de los usuarios, en pro de mejorar la confianza en la utilización de los mismos, disponer de un haber presupuestal suficiente, que facilite la implementación, variable compleja si se tiene en cuenta, el posconflicto, el resarcimiento económico a las víctimas del conflicto armado, la obligada interconectividad real en cada rincón del país, el acceso por parte de los ciudadanos a éstos, la capacitación de los funcionarios públicos, los procesos académicos de formación jurídica en las universidades, entre otras, ponen de manifiesto, que el asunto es serio.

Asimismo, en lo que refiere a la tecnología, más allá de estar intercomunicados, de tener una plataforma capaz de soportar el andamiaje jurídico, entre otras, es lograr una mejor educación en el manejo de medios electrónicos, por parte de los operadores públicos y de justicia. De igual forma, en la dinámica de servicio por parte del servidor público. Si bien es cierto se ha señalado, que en el ingente mundo de la toma de decisiones judiciales, tanto litigantes, como operadores, pertenecientes generacionalmente a una era no digital ni informática, son los que dan muestra de mayor resistencia a este salto tecnológico<sup>7</sup>. Desde nuestro punto de vista estaríamos haciendo una estigmatización, cuando la resistencia al salto tecnológico está en una gran masa de la población, pues nuestro País tiene un rezago en conocimientos en el manejo del uso de la informática. Lo cual deriva en que no se puede

---

<sup>7</sup> VALBUENA HERNANDEZ, Gabriel, *Seguridad jurídica, seguridad informática y proceso judicial electrónico*, en Derecho Procesal Administrativo modernización del Estado territorio, Estudios en Homenaje a Augusto Hernández Becerra, Bogotá, Ibáñez, 2014, p. 602.

endilgar a ciertos sectores discriminando por edades o en profesiones. Entonces, la diferencia, esta, desde nuestro punto de vista, cuando existe el interés que cualquier persona en los campos donde ejerce, para estar o considerarse de la era digital. Es decir, tener la disposición para aprender a manejar este tipo de sistemas expertos, donde la academia podría contar con un papel más destacado, para la consecución de esos fines.

Así, entonces, la generación de abogados de la llamada era digital, (la cual como señalamos anteriormente, no está determinada por la edad), tiene un importante interés en la inclusión de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Si bien es cierto no tenemos un gran conocimiento y educación en estas áreas, sabemos del potencial que tienen las mismas, tanto para el esencial desarrollo y mejoramiento de los principios de la administración pública, como para el cumplimiento de la Justicia en cabeza de la rama judicial.

Conforme a lo anterior, en el referente social, la tarea es titánica, al confrontar los usos tradicionales ya anquilosados en la sociedad frente a las novísimas propuestas que consigo trae el menú de servicios que nos ofrecen los sistemas expertos, que para el asunto en ciernes, refiere a los medios electrónicos como un instrumento válido en el procedimiento administrativo<sup>8</sup>. Igualmente, generar en sus usuarios la confianza necesaria no solo en su uso, también, en las garantías de derechos, tanto constitucionales como los que se fundamentan en los principios que emanan de la ley que los regula<sup>9</sup>.

Un punto especial en este aparte, es el expediente judicial electrónico como cimiento del litigio en línea del que habla el Código General del Proceso, con ello estaremos desmaterializando los expedientes con una política de cero papel, con miras a cumplir mejor los fines del Estado. Un ejemplo de ellos es el principio de neutralidad tecnológica, el cual exige ejes precisos que correspondan específicamente a las necesidades de la vida administrativa y no de ciertas particularidades, que en el tiempo pueden dar paso a otras. Tal como se observa en el artículo 57 del CPACA, en el cual inicialmente, se pretendía

---

<sup>8</sup> Ley 1437 de 2011, Capítulo IV.

<sup>9</sup> Ibídem, Artículo 54.

regular el acto administrativo electrónico, con especificidades tales, que hacia el futuro, si éstas cambiaban, dicho acto electrónico, no podría ser válido<sup>10</sup>.

La preocupación por los cambios en el medio ambiente que representan efectos adversos en nuestro planeta, es una labor que, se ha venido adelantando gracias a los avances científicos, los cuales, a través de estos últimos años, han demostrado el peligro presente y futuro que representan en nuestro planeta. Por esta problemática global, todos los Estados en pro de contrarrestar los efectos del cambio climático.

Desde la Constitución de 1991 y pronunciamientos jurisprudenciales posteriores, nuestro Estado ha comprendido las características especiales de gran biodiversidad que tiene el País, y los efectos adversos que tiene para el medio ambiente, llevar malas prácticas como la deforestación, utilización desmedida de recursos como el agua para actividades industriales, o el aumento de gases de efecto invernadero que estamos produciendo (ya no solo de manera industrial) De allí se desprende un cambio en las políticas estatales, las cuales encuentran en la utilización de medios electrónicos, herramientas útiles para la consecución de los fines del estado, como cambios significativos en pro de un compromiso ecológico que debemos asumir todos.

En el asunto de marras, el CPACA, que contiene una serie de disposiciones, hacia futuro, tal como lo dice la exposición de motivos del Proyecto de Ley número 198 de 2009<sup>11</sup>, en cuanto al uso de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo en Colombia<sup>12</sup>, éste se enfrenta a la implementación especial de lo que ha venido a llamarse sede electrónica, y el ya mencionado expediente judicial electrónico. Tema, que por estos lares resultaría ser nuevo, si tenemos en cuenta, las diferentes variables que arriba se han

---

<sup>10</sup> Memorias de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo Volumen III, La Ley y los debates de la comisión de la reforma parte A artículos 1 a 142, Min Justicia y Consejo de Estado, Sala de Consulta y servicio Civil, p. 255.

<sup>11</sup> Proyecto de ley número 198 de 2009 Senado, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

<sup>12</sup> Para Ciro Nolberto Güechá Medina, la regulación contemplada en el capítulo IV de la primera parte de la Ley 1437 de 2011, se ha considerado como uno de los avances más significativos en el CPACA, soportada en la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo. Visible en GÜECHÁ MEDINA, Ciro Nolberto, Derecho Procesal Administrativo, 3ra edición, Bogotá, Ibáñez, 2014, p. 420.

indicado, de manera especial. De este punto, se desprende la importancia que surge en la igualdad que debe brindar el Estado como derecho a acceder a la administración por medios electrónicos, o al derecho a obtener una tutela judicial efectiva por medios electrónicos conforme a la real implementación del expediente judicial electrónico.

De ahí, el acabado final del texto, tal vez justifique la acepción de su título: Utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativo, en el marco de la ley 1437 de 2011, análisis y reflexiones; concepto de amplio espectro extensional que conmina a entender la necesidad, importancia y pertinencia de la utilización de los medios electrónicos en el proceso administrativo electrónico y del judicial electrónico conforme a la Ley descrita. Hecho, que pone en vanguardia tecnológica e informática al Estado colombiano y a sus asociados, frente a otras sociedades y proyecciones de desarrollo científico al servicio de disciplinas como el derecho.

Este trabajo, no es en sentido cabal, un manual de pautas tecnológicas ni informáticas y, mucho menos, un texto de erudición jurídica que examina el haber normativo en estudio, por el contrario, es un heterodoxo documento, modesto, por cierto, que analiza las diferentes implicaciones que en el contexto de la utilización de los medios electrónicos en el marco de la Ley 1437 de 2011, el Estado colombiano ha de vérselas. El aprovechamiento del escrito, estriba en las reflexiones sobre los retos, expectativas y alcances que el asunto en comento genera y su impacto en la sociedad y demás actividades de la vida diaria.

El trabajo se ha estructurado en dos partes, las cuales se dividen en capítulos y secciones. En cuanto a la primera parte, trataremos la temática de los medios electrónicos, desde el análisis conceptual, constitucional, legal y académico, conforme a lo principios de los que habla el CPACA. En esta parte se examina más acentuadamente en el procedimiento administrativo.

En su segunda parte, parte, hablaremos desde un punto de vista crítico de las implicaciones (alcances, expectativas, perspectivas y retos) que tiene el Estado Colombiano en la utilización de los medios electrónicos contenidos en la Ley 1437 de 2011, dada la

importancia que representan, en la modernización de la Administración Pública y la de Justicia como retos del Estado Social de derecho, en el Derecho Administrativo contemporáneo, de igual forma se hará un estudio sobre el expediente judicial electrónico, como cimiento del litigio en línea.

Así las cosas, el cuerpo del texto toma forma, al sustentarse en fuentes documentales de variopinto espectro: tales como: libros, revistas y artículos, leyes, jurisprudencia y algunos datos y cifras que gracias al avance de la tecnología, ya no solo se encuentran en bibliotecas físicas para su consulta, sino que se hallan disponibles en la red, para lo cual se hizo necesario recurrir a buscadores académicos en la web, para dar mayor soporte y exactitud en las citas que se hicieron en el escrito.

Con esto, se pone de presente la importancia y necesidad de la temática en ciernes, entendida como una herramienta que pondera los principios de la dogmática jurídica en general y de la que es propia de lo administrativo y contencioso, y, a la vez, sirve de ejemplo para indicar que el diario amanecer de la tecnología: con los medios electrónicos, es inevitable.

## **1. JUSTIFICACIÓN**

La historia de las cosas en este país, ha conducido a un pesimismo creciente cuando de cambios se trata, máxime, cuando éstos son propuestos por el Estado, que para el caso, el uso de los medios electrónicos no son la excepción. Es por ello, que el trabajo en ciernes indaga en las reflexiones que rodean dicho hacer y sus alcances, esto es, las dudas que surgen al considerar implicaciones de variada índole: como la consecución de los fines del Estado conforme a los principios Constitucionales, legales y de orden global; el compromiso de todos los actores en las relaciones entre administración y administrados y de administración de justicia y usuarios de la misma; el de compromiso ambiental en pro de proteger el medio ambiente, o el mejoramiento del funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a través de procesos de desmaterialización de expedientes y, el que es propio al desarrollo: las tecnologías como las herramientas informáticas que facilitan

y hacen expedito el quehacer público como judicial, asimismo, el cambio de paradigma, institucional y mental<sup>13</sup>, por parte de establecimientos educativos, usuarios, operadores de justicia y profesionales en todos los campos además del de derecho.

Una de las variables que responde a lo que se analiza en este escrito surge de la manera tardía con que el Estado asume el desarrollo tecnológico. Suele ser ya costumbre, embarcarse en tareas de gran envergadura que terminan dando al traste, por la falta de planeación y proyección de lo pensado.

Así las cosas y para su buen entender, en cuanto al por qué y para qué, el trabajo se apuntala en las siguientes motivaciones:

No hay duda que la ciencia y la tecnología no son vanguardia en Colombia y mucho menos en el mundo del derecho. Es por ello, que un tema como el de los medios electrónicos sobre pasa la estricta formalidad de la normatividad jurídica y pone al Estado de frente a variables que debe examinar para su implementación. Esto, lo confronta con los principios constitucionales, procesales y los propios a la Ley 1437 de 2011.

Asimismo, al ser el uso los medios electrónicos una nueva institución dentro del nuevo ordenamiento que contiene el procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativo<sup>14</sup>, (pues a lo largo del texto nos encontraremos con una legislación previa en el uso de los medios electrónicos en el área judicial y administrativa), si bien anunciados en la ley en mientes, también, entran en pugna con el paradigma tradicional del quehacer de la administración pública y judicial, mayormente, con algunas decimonónicas formas de

---

<sup>13</sup> Para el Consejero de Estado Enrique José Arboleda Perdomo, ha sido frecuente el rechazo por parte de funcionarios y entidades a la utilización de las nuevas tecnologías, so pretexto de no existir norma expresa que los autorice a ello. Ver en: ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José, *Comentarios al nuevo Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo*, segunda edición, Bogotá, Legis, 2012, p. 98.

<sup>14</sup> Para el profesor Gabriel Valbuena Hernández: “es preciso reconocer tal como lo hizo la Comisión Redactora del Código, que el ordenamiento jurídico colombiano ya contaba con un conjunto de dispositivos legales que contemplaban de manera dispersa su utilización por parte de las autoridades”. Ver en: VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel, *Seguridad Jurídica informática y proceso judicial electrónico en el marco de la Ley 1437 de 2011* en Derecho Procesal Administrativo modernización del Estado y territorio, Estudios en homenaje a Augusto Hernández Becerra, Bogotá. Ibáñez, 2014.

pensamiento, que anquilosadas a una rupestre manera de asumir la realidad, se llega al siglo XXI generando resistencias a los usos de éstos.

Esta afirmación esta soportada en que nuestro Estado no ha sido un generador ni creador de tecnología<sup>15</sup>. Lo que ha repercutido en un leve interés en la educación para la producción de las mismas, derivando también en el poco provecho que se le pueden sacar a las tecnologías de la información, en el uso de estas herramientas cuando, estas no significan ocio o diversión.

De esta manera hemos venido acoplando modelos y uso de las tecnologías que, en otras latitudes ya han sido manejadas con éxito. Lo cual no representa que estas se van a adaptar a nuestros modelos con el mismo buen desempeño. Costumbre muy similar a la ya conocida práctica de nuestros legisladores de adoptar normas que han sido exitosas en otros Estados. Es aquí donde nace para nosotros la denominada resistencia al salto, con lo cual queda claro que no se está haciendo referencia a algún segmento en especial de la población determinado por la edad, ni por la profesión, sino a una gran masa desinteresada cuando la utilización de las tecnologías o los medios electrónicos no son para diversión, ocio o temas que requieren de su conocimiento obligatoriamente.

De igual forma, en el marco de las implicaciones surgidas, por la utilización de los medios electrónicos, se encuentra lo constitucional. Pues, una ley que pretende poner en vanguardia el quehacer de la administración pública como judicial, debe garantizar a los ciudadanos los derechos fundamentales<sup>16</sup> de igualdad, intimidad, el debido proceso, el habeas data, por señalar.

---

<sup>15</sup> Recordemos que las matemáticas son un eje primordial en este campo, y nuestro país según las pruebas PISA, las cuales examinan el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos, demostró que en el año 2012 Colombia ocupó el 4 peor lugar del listado.

<sup>16</sup> Analizados y examinados por el catedrático Manuel José Cepeda, establece: que aparte de los derechos fundamentales expresamente enunciados en la Constitución de 1991, existen más dentro de nuestro ordenamiento, puesto que son estos derechos inherentes a la persona humana. Ver en CEPEDA, Manuel José, Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, Bogotá, Temis, 1992, p. 1 y ss.

Un aspecto de capital importancia, es la confianza. Principio natural que debe generar el Estado en sus asociados, en relación al uso de los medios electrónicos. Pues, se deben garantizar no solo el acceso de todos a éstos, también, impactar en el mejoramiento de las acciones, que en el sistema tradicional se generó: corrupción, congestión, demoras en los procesos, pérdidas de documentos, etc.

Por lo anterior y en méritos a la labor ética y compromiso social, la relevancia del trabajo en comento, estriba en la necesidad de polemizar en la temática señalada, con el fin de orientar las acciones y fines a los que el Estado se debe, en el cumplimiento de los principios generales y particulares, que se esbozan en la Constitución como en el CPACA, a la hora de implementar los medios electrónicos, en la administración pública como judicial.

## **2. METODOLOGÍA**

En el marco de esta investigación y como viene dicho, el método que utilizaremos es el de revisión documental de donde nos remitiremos a Doctrina, Leyes, Jurisprudencia y cifras, desde un enfoque cualitativo<sup>17</sup>. En ese sentido, recurriremos a fuentes que desarrollan académicamente, el tema del uso de los medios electrónicos tanto en el derecho de manera general como en derecho administrativo de manera particular, esto es, en la Ley 1437 de 2011. Así como el acervo normativo y jurisprudencial, más el uso de algunas cifras en la segunda parte del texto para dar sustento a algunas reflexiones.

Por ser un concepto innovador relativamente, (pues más adelante analizaremos, que tan innovador es la utilización de los medios electrónicos, en nuestra normatividad), fue necesario asistarnos de fuentes extranjeras: España, Chile y Costa Rica, países que ya han hecho uso de éstos, con el fin de tener un mayor entendimiento y claridad en el tema a tratar. Es de anotar, que para mostrar el alcance y la utilidad de los medios electrónicos, una cantidad considerable de las fuentes citadas en este texto se encuentran en la red.

---

<sup>17</sup> HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar, Metodología de la Investigación, sexta edición, México, D.F., Mc Graw Hill, 2014, p. 10.



En torno al tema en estudio, no hay, en nuestro medio, una vasta información, más allá de lo normativo, comentarios doctrinales, por cierto, pocos, entre otros artículos y ensayos, situación que muestra dos aspectos. En cuanto a lo que se conoce y es de interés, en relación a los medios electrónicos y, lo que reviste gran importancia, su implementación. Es decir, aún nos falta mucho por hacer y entender, en cuanto a la nueva dinámica que nos aporta el concepto de marras.

En este contexto, se hace necesaria la realización del trabajo, con el objetivo de construir un documento, que al ser consultado nos invite a la reflexión y críticas de lo aquí planteado, buscando generar inquietudes en el lector, que motiven el análisis desde diferentes perspectivas en la utilización de los medios electrónicos en la administración pública y en el proceso judicial administrativo y las implicaciones que ello repercute.

### **3. OBJETIVOS**

En este aparte se dan a conocer, de acuerdo a los lineamientos metodológicos sugeridos: objetivo general y objetivos específicos. En cuanto al primero, se engloba la temática en estudio acerca del uso de los medios electrónicos y, por otro lado, los objetivos específicos propios al método utilizado y a la visión de quien discurre en estas líneas.

#### *a) OBJETIVO GENERAL*

Hacer un análisis y reflexiones sobre la utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, enmarcados en la ley 1437 de 2011.

## ***b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS***

1. Analizar: el contexto, influencias y antecedentes del uso de medios electrónicos tanto en el procedimiento administrativo, como en el contencioso administrativo.
2. Examinar a la luz de los principios de la Ley 1437 de 2011, la utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
3. Hacer algunas reflexiones sobre los alcances, retos y expectativas de la utilización de los medios electrónicos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la administración pública.
4. Aportar una visión crítica a partir de las implicaciones surgidas en la utilización de los medios electrónicos, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la administración pública.

## **4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN**

¿Cuál es el análisis y las reflexiones que surgen a partir de la utilización de los medios electrónicos, en el procedimiento administrativo y contencioso administrativo en el marco de la Ley 1437 de 2011-CPACA- ?

## **5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Con la estructuración del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011), nos encontramos con novedades respecto al Código anterior, Decreto 01 de 1984, que entre otras, manifiesta la necesidad de acomodarse y acoplar los instrumentos tecnológicos con el derecho administrativo: “*que el mundo moderno y globalizado pone al alcance de la sociedad colombiana*”<sup>18</sup>. Como lo indica el doctor Fajardo Gómez en la presentación del CPACA.

---

<sup>18</sup> FAJARDO GÓMEZ, Mauricio, Intervención como Presidente del Consejo de Estado, *Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011*, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p.16.

Una de las inquietudes que poco a poco fueron motivando este escrito, son esas variables, que en la introducción orientan el meollo de la investigación: la utilización de los medios electrónicos suscitan implicaciones de variada jaez, no solo del orden ya mencionado, también constitucionales, si tenemos en cuenta, por caso, el principio de responsabilidad que rige al gobierno electrónico de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico de 1 de noviembre de 2007<sup>19</sup>, suscrita por Colombia, entre otros, que sustentan el concepto de los medios electrónicos, en general.

En consonancia con lo dicho, para nosotros, si bien es cierto, la utilización de los medios electrónicos facilitan el quehacer jurídico, en el caso de la administración judicial, en aras de la celeridad, eficacia, etc., tal como lo ha previsto la corte Constitucional: las acciones que buscan mejorar la gestión de la administración pública en cumplimiento de los fines asignados por la Constitución resulta indispensable<sup>20</sup>, también, se suscitan desventajas, toda vez, que la relación Estado-particular siendo más rápida, pragmática, se puede incurrir en graves violaciones de derechos fundamentales.

Así las cosas, se hace necesario examinar, entonces, el contexto de la realidad nacional, en sus diferentes niveles. En torno a ello, se logra dimensionar las aristas constitucionales que circundan el tema. No es pues, solamente, empezar a servirse de una herramienta informática sin más, se requiere, por demás, analizar los alcances y límites de la situación en estudio, los retos, expectativas y el minucioso seguimiento que a éste debe hacerse, ya por parte del Estado como por quienes, desde una u otra orilla, están directa o indirectamente, relacionados con ello.

Grosso modo, al observar la problemática, se alude, por parte de quienes no se permiten el cambio o salto tecnológico, a la desnaturalización del proceso y procedimiento administrativo, empero, el hecho de servirse de un nuevo menú de herramientas electrónicas, venidas de los desarrollos informáticos y de la inteligencia artificial, no entra en contravía a la forma tradicional del hacer de la administración en general, pero de esta

---

<sup>19</sup> VEGA DE HERRERA, Mariela y SUÁREZ BOHÓRQUEZ, Julián. Derecho procesal Administrativo, cuarta edición, Bogotá, Leyer, 2014, p. 91-92.

<sup>20</sup> Corte Constitucional C-914/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

idea no puede derivarse una estigmatización a sectores como el de funcionarios públicos o de profesionales del derecho dedicados al litigio, pues la falta de conocimientos en la utilización de los mismos es una problemática generalizada en la que no se pueden discriminar profesiones, oficios o edades. Pues, lo que en últimas refiere, es que hay una nueva forma de vivir la relación Estado-asociado, ya en la administración pública como en la de justicia.

Visto lo señalado, cabe también, comentar acerca de las razones que motivaron la utilización de los medios electrónicos. Es decir, ¿existe la necesidad de éstos? habida cuenta que países como España, espejo del cual se ha tomado su reflejo para implementar los medios electrónicos en Colombia, se ha servido de ellos. Al respecto, la globalización o “*el mimetismo*” como concepto<sup>21</sup>: ese “*trasplante de órganos*”<sup>22</sup>, al que el nuevo cuerpo debe acoplarse y viceversa, pone de manifiesto, la necesidad de revisar y analizar, si en el escenario nacional, que demanda de una solución a la congestión generalizada de sus diferentes instituciones, la tramitología, la no diligencia de algunos funcionarios, entre otras, los medios electrónicos son la solución única a dicho problema o, por el contrario, ¿si bien son necesarios, existen alternativas intermedias como solución, que sean más adecuadas a la realidad de nuestra sociedad?.

Entre las diferentes particularidades que generaron este interés académico, es relevante señalar, en cuanto a la administración de justicia, el papel preponderante del expediente judicial electrónico, el cual, se convierte en el fundamento para la modernización de la administración de justicia del contencioso administrativo, cuyo objeto es el advenimiento del proceso judicial electrónico, ello, en armonía con lo planteado en el Código General del Proceso<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Andrés, El Consejo de Estado colombiano y el Consejo de Estado francés, aproximaciones y diferencias disponible en Instituciones Judiciales Y Democracia Reflexiones con ocasión del Bicentenario de la Independencia y del Centenario del Acto Legislativo 3 de 1910, Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, p. 270.

<sup>22</sup> RIVERO, Jean, Paginas de derecho administrativo *Libro homenaje*, Universidad del Rosario, Bogotá, Temis, 2002. p. 135.

<sup>23</sup> Ley 1564 de 2012 denominado Código General del Proceso, en su Artículo 103, determina el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, mencionando su uso en las actuaciones judiciales con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia.

El mayor énfasis, en el tema del uso de los medios electrónicos, se sitúa en la parte segunda del CPACA, el cual da cuenta de los medios electrónicos en la administración judicial. Al tenor de lo planteado, se suscita, por parte de quien discurre en estas líneas, la necesidad de indagar, revisar y analizar los diferentes matices, que el tema de marras conmina. Ya desde lo constitucional, ya desde los principios para la consecución de los fines del Estado, ya desde lo tecnológico, ya desde aristas como el orden presupuestal, el compromiso asumido por todos los actores en la relación entre estado, administrados y usuarios de la administración de justicia social, o el compromiso ecológico que se deriva en la protección del medio ambiente, etc.

## **6. HIPOTESIS.**

1. La utilización de los medios electrónicos en nuestro País en el marco de la Ley 1437 de 2011, solo obedecen a los principios: garantes constitucionales, los generales del derecho y los propios del procedimiento administrativo, sin tener en cuenta los consagrados en la carta Iberoamericana de gobierno electrónico<sup>24</sup>. Además no existe una revolución normativa en la materia<sup>25</sup> pues el Estado ha legislado normas suficientes para la utilización de los medios electrónicos tanto en el procedimiento administrativo electrónico, como en el proceso judicial electrónico en jurisdicción Contencioso Administrativa.
2. La utilización de los medios electrónicos dentro del procedimiento administrativo y el contencioso administrativo obedecen a la globalización, de la cual no hay una

---

<sup>24</sup> Carta Iberoamericana de gobierno electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Pucón, Chile, 31 de mayo y 1° de junio de 2007 y adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Santiago de Chile, 10 de noviembre de 2007.

<sup>25</sup> Para el autor David Suarez Tamayo no estamos frente a un nuevo derecho administrativo con la expedición de esta nueva ley, pues para el mismo, existe duda si nuestra administración de justicia será más eficaz y equitativa, o si tendremos una nueva administración pública, donde los ciudadanos tendrán mayor protección de derechos y garantías, Ver: SUAREZ TAMAYO, David. *Derecho Administrativo y los veinte años de la Constitución. Ley 1437 de 2011* en El Derecho Público y los veinte años de la Constitución de 1991/ Miguel Malagón Pinzón (coordinador), Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes, 2013, p. 6.

adopción al modelo necesario por nuestro Estado, además estamos ante el fenómeno del mimetismo donde aparte de no haber originalidad en la adopción de instituciones, hemos copiado un modelo seguido por otros estados sin adaptarlo a nuestra realidad, con lo cual no se establece un puente de acercamiento entre administración y administrados, y entre administración de justicia y usuarios de la misma.

3. Existe falta de educación y conocimiento en el manejo de los medios electrónicos, por parte de: administrados y administración; de la administración de justicia y de usuarios de la misma, sin que ello represente resistencia, además, los pocos manejos de los sistemas expertos no están determinados en ciertos sectores de la población. Pues señalar profesionales en ciencias en particular como el derecho o ciudadanos de ciertas edades sería discriminatorio, máxime cuando este País no produce tecnología y escasos contenidos digitales en relación con otros países, lo cual muestra la falta de educación en estos sistemas. Así las cosas, resulta necesario proveer la infraestructura para generar unas condiciones igualitarias para su utilización, más la capacitación de funcionarios públicos en el que la academia juega un papel fundamental en el proceso de cambio de mentalidad y de instrumentos novísimos. Cuando se tiene desconocimiento en los mismos.
4. La política de reducción del papel en pro de los procesos administrativos y de los procesos judiciales administrativos, contribuye de manera real a detener efectos adversos para el medio ambiente, como la deforestación, utilización desmedida de recursos naturales como el agua o la reducción en la generación de gases de efecto invernadero en pro de lineamientos centrados en contribuir a proteger el medio ambiente. Para ello es importante utilizar eficientemente los recursos económicos para que la utilización de los medios electrónicos sea una realidad que contribuya descongestionar la jurisdicción contencioso administrativa, pues la oralidad no es el único camino posible. Y no termine siendo un saludo a la bandera o en el peor de los casos derivando en una responsabilidad del Estado por la falla de los medios

electrónicos cuando se produzca un daño<sup>26</sup>. Ya sea por no haber blindado el sistema de los previsibles ataques cibernéticos o no haber protegido los datos suministrados en el mismo.

## 7. ESTADO DEL ARTE

El Consejero de Estado Enrique José arboleda Perdomo, en su texto: “*Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*” como uno de los textos ejes de este trabajo, destaca la utilización de los medios electrónicos tanto en los procedimientos administrativos electrónicos, como en los judiciales electrónicos, haciendo reflexión sobre cada uno de los artículos que describen el uso de estos medios y planteando problemáticas que personifican el vacío que pueden tener estas disposiciones normativas.

El profesor Gustavo Quintero Navas, ha escrito los artículos: “*Procedimiento administrativo electrónico: aportes de la ley 1437 de 2011.*” Del cual se derivan: el trámite administrativo electrónico, la producción, publicación y notificación del acto administrativo por medios electrónicos, y el ejercicio y trámite de los recursos por cualquier mecanismo tecnológico. Así mismo, se plantea la preocupación por la carencia de protección y garantías de derechos fundamentales en los procesos administrativos con las TIC. Ahora bien, el texto: “*Contencioso Administrativo y medios electrónicos: un gran paso hacia la modernización del ejercicio de la justicia administrativa*”, contiene esquemas de revisión muy completos sobre el uso de las nuevas tecnologías en el proceso judicial administrativo colombiano, De esta manera, se convierten actualmente en textos de indispensable consulta y citación, en la elaboración de textos basados en la utilización de medios electrónicos, tanto en el Procedimiento Administrativo, como en el Contencioso Administrativo.

---

<sup>26</sup>Para el académico Juan Carlos Henao Se podría producir un daño como elemento indispensable de la responsabilidad. Ver: HENAO, Juan Carlos, El daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. *Universidad Externado de Colombia*, 2007, p.38.

El profesional Erick Rincón Cárdenas contribuye brillantemente en la utilización de los medios electrónicos en la rama judicial y en los procesos administrativos en obras y artículos como: *“Tecnología y Administración de Justicia Colombia”*; *“Estampado cronológico archivo y conservación de mensajes de datos como medidas de seguridad jurídica preventiva”*; *“El acto administrativo electrónico y las nuevas tecnologías de la información”*. Se convierte en referente imprescindible en el análisis de normas, principios, doctrina y principios concernientes a las nuevas tecnologías de la información.

El maestro Gabriel Valbuena Hernández en su artículo denominado: *“Seguridad jurídica, seguridad informática y proceso judicial electrónico en el marco de la Ley 1437 de 2011”*. Hace mención a la seguridad que deben tomar las autoridades frente a los sistemas de gobierno digital y la justicia electrónica para crear seguridad jurídica derivando en la confianza de la ciudadanía en la adopción de estas medidas. Propone iniciativas como la necesidad de establecer una entidad de certificación al interior de la rama judicial, modernizar las tarjetas profesionales de los abogados, el establecimiento de secretarías judiciales electrónicas. Este mismo autor habla de la defraudación de la confianza legítima en otra obra.

El Consejero de Estado Jaime Orlando Santofimio en su libro: *“Procedimientos administrativos y tecnología”*, conceptúa las incidencias normativas de la sociedad de la información y el conocimiento en la administración pública, manejando la definición de la sociedad en red y los acaecimientos en fundamentos constitucionales que no puede perder de vista el Estado para hacer un uso útil y democrático de las mismas.

El académico Ciro Nolberto Güechá Medina en las obras: *“Derecho Procesal Administrativo”* y *“acciones o pretensiones contencioso administrativas acorde con la Ley 1437 de 2011”* de las que tomamos referencia, habla del origen del derecho administrativo Colombiano, los modelos que hemos traído de Francia, las instituciones enmarcadas dentro de la originalidad. De la misma manera, contempla la utilización de medios electrónicos dentro del procedimiento administrativo como uno de los avances más significativos para



dar agilidad al trámite y a los problemas que aqueja la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el marco de la Ley 1437 de 2011.

Los profesores Mariela Vega de Herrera y Julián Suárez Bohórquez, en la obra: “*Derecho Procesal Administrativo*”, mencionan que, en la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo, se preserve el derecho a la igualdad en el acceso de todas las personas para facilitar el acceso a utilizar los medios electrónicos y acudir a otros procedimientos. Además, señalan que la notificación por medios electrónicos tiene plena validez.

El maestro Juan Carlos Galindo Vácha, en su libro: “*Derecho Procesal Administrativo*”, hace un recuento del origen de la Ley 1437 de 2011, argumentando que entre los propósitos de esta ley, se contemplaron la Constitución de 1991 como eje central de los desarrollos legales y jurisprudenciales. Así mismo, la globalización durante estos últimos 30 años y el desarrollo de las nuevas tecnologías, la incidencia de las tecnologías de la información en el sistema procesal, además de la congestión judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El catedrático Juan Ángel Palacio Hincapié en su obra: “*Derecho Procesal Administrativo*” plantea el proceso en línea como solución a la congestión que se presenta dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el cual se pierda el miedo a las actuaciones por medios electrónicos, pues en su sentir la oralidad conforme a una infraestructura tan incipiente, no logrará la agilización de las actuaciones judiciales. Plantea también dentro del proceso ordinario la notificación electrónica como remplazo de la notificación personal en virtud del artículo 199 del CPACA.

El Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres, en sus obras: “*Humanismo y estructuras jurídicas y sociedad tecnológica*” y “*El acto administrativo. Teoría general*” destaca en las que ha hecho mención ha hecho mención a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con lo cual es necesario un cambio cultural que exigen la implementación de las mismas, del mismo modo define el concepto

de sociedad de la información, además ha aseverado sobre el uso de los procedimientos administrativos en el que se debe sustituir la obligatoriedad del uso del papel como soporte documental.

El Ex Consejero de Estado William Zambrano Cetina en su artículo: *“Fundamentos y objetivos de la reforma del libro primero del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*. Hace referencia, al procedimiento administrativo electrónico, como un referente en la modernización de las actuaciones administrativas, donde se deberán tener en cuenta factores económicos y técnicos por parte de las autoridades, más la utilización y asimilación de los medios electrónicos por parte de ciudadanos la cual no puede afectar sus derechos.

El profesor de la Universidad EAFIT de Medellín, David Suarez Tamayo, en su artículo: *“Derecho Administrativo y los veinte años de la Constitución. Ley 1437 de 2011”* a diferencia de autores que exaltan la importancia de tener un nuevo Código Administrativo, debate esta idea dudando que estemos ante un nuevo derecho administrativo en el que se les garantice a los ciudadanos una mejoría en la protección de sus derechos. Habida cuenta que en nuestro País reformar leyes, nos hace creer que cambiaremos la realidad.

Autores como Jean du Bois de Gadusson, Diego López Medina y Andrés Rodríguez Gutiérrez han hecho eco en el fenómeno del mimetismo, en instituciones de derecho comparado adaptados, al modelo Colombiano y Africano. También, Jean Rivero, jurisconsulto francés, experto en temas administrativos, quien no define o determina qué es el mimetismo, pero si da cuenta de éste como un fenómeno existente, sin más.

Estos son algunos de los autores principales que han sido consultados a lo largo de la construcción de este documento. Asimismo, otros doctrinantes que de manera directa e indirecta han sido de gran importancia en este hacer. De igual forma, los diferentes acervos normativos, de ley, entre otros de esa especie, acompañan este periplo bibliográfico y de revisión documental. En el cuerpo del escrito se verán los autores arriba mencionados y otros que hacen parte de las elucubraciones aquí expuestas.

## **PARTE I ANALISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA Y EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO.**

Con el advenimiento de la Constitución de 1991<sup>27</sup>, las dinámicas sociales, políticas y económicas, que la motivaron, por lo menos en teoría, pusieron en el centro al ser humano como sujeto de derechos, el cual ha de ser protegido por la nueva carta política y, con ello, los nuevos conceptos de justicia y de Estado social de derecho. En últimas, los fines del Estado se circunscriben al individuo, eje y razón del desarrollo integral de la nación.

Al tenor de lo mentado, desde el punto de vista legal, normas que eran regidas aún, en pleno siglo XXI, por la anterior Constitución, la de 1886, cedieron espacio a sus respectivas reformas, como lo acaecido con el Código Contencioso Administrativo en siglas CCA, sin embargo, para lograr una estandarización adecuada a los principios y finalidades de la nueva norma de normas, se crea el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, CPACA, el cual, deroga el anterior, salvo, aquellos procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del actual.

Lo anterior, toda vez, que se requería regular el hacer de la administración pública y lo referido a la de justicia, con base en el nuevo paradigma constitucional, en armonía con los diferentes aportes que han hecho las tecnologías de la información y los sistemas expertos. Es decir, la ley en cita, incluye el concepto de los medios electrónicos como un instrumento legal y formal, cuyo objeto es la organización y sistematización de la administración pública y de justicia, en general.

Resulta conveniente en este punto, tener en cuenta que como lo menciona el profesor Suarez Tamayo, “*el uso de medios electrónicos tanto en la administración como por parte de los jueces*”<sup>28</sup>, ya era un mandato legal desde el Decreto 2150 de 1995, la Ley 527 de

---

<sup>27</sup> CEPEDA, Manuel José, Los derechos fundamentales en la constitución de 1991, Temis, Bogotá, 1992, p.1.

<sup>28</sup> SUAREZ TAMAYO, David. *Derecho Administrativo y los veinte años de la Constitución. Ley 1437 de 2011* en El Derecho Público y los veinte años de la Constitución de 1991/ Miguel Malagón Pinzón (coordinador), Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes, 2013, p. 52.

1999 y la Ley 962 de 2005<sup>29</sup>. Argumento que sustenta su posición en no ver una novedad en la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo contenidos en los artículos 53-64 de la Ley 1437 de 2011, en la que desde su punto de vista: *“la nueva ley es casi una copia textual de las normas citadas”*<sup>30</sup>. Recordemos también, que como lo citamos en la justificación de este escrito, El profesor Valbuena Hernández reconoce que al igual que lo hizo la Comisión redactora del Código, nuestro ordenamiento jurídico ya disponía de: *“un conjunto de dispositivos legales que contemplaban de manera dispersa su utilización por parte de las autoridades”*<sup>31</sup>.

Sin embargo, del análisis de estas normas y su falta de aplicación, hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, nos encontramos como lo menciona el profesor Quintero Navas que se: *“evidencia el contrasentido del diseño de una serie de políticas públicas para la implementación efectiva de las TIC, sin aparejarlo al desarrollo de una legislación de la actividad administrativa, desde un lenguaje jurídico especializado en herramientas tecnológicas”*<sup>32</sup>. En ese hilo conductor, se justifica la inclusión organizada de la utilización de los medios electrónicos dentro del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como norma base de la actividad administrativa, que remplazó el Decreto 01 de 1984.

En cuanto al tema que discurre en estas líneas, y conforme a lo manifestado previamente, el abordaje del uso de los medios electrónicos no es exclusivo del CPACA, hay todo un acervo documental: normativo y doctrinal previo, que ponen en contexto la aplicación del nuevo código, en referencia al tema en estudio. Esto, como preámbulo a los antecedentes del asunto, mediante los cuales se hace posible dimensionar la inquietud que motiva esta investigación.

---

<sup>29</sup> SUAREZ TAMAYO, David. *Derecho Administrativo y los veinte años de la Constitución. Ley 1437 de 2011* en El Derecho Público y los veinte años de la Constitución de 1991/ Miguel Malagón Pinzón (coordinador), Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes, 2013, p. 25.

<sup>30</sup> *Ibídem*.

<sup>31</sup> VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel, *Seguridad Jurídica informática y proceso judicial electrónico en el marco de la Ley 1437 de 2011* en Derecho Procesal Administrativo modernización del Estado y territorio, Estudios en homenaje a Augusto Hernández Becerra, Bogotá. Ibáñez, 2014.

<sup>32</sup> QUINTERO NAVAS, Gustavo, Procedimiento administrativo electrónico: aportes de la Ley 1437 de 2011. Revista de Derecho, comunicaciones y Nuevas Tecnologías N° 5, Enero- Junio de 2011, Universidad de los Andes, p. 2-3.

## **CAPÍTULO 1. Conceptos, antecedentes y nociones legales de la utilización de medios electrónicos en la revisión normativa normatividad colombiana.**

De acuerdo a lo dicho por el Dr. Enrique José Arboleda Perdomo<sup>33</sup>, en sus comentarios al nuevo código, CPACA, ubica dos hitos normativos en torno al tema: el decreto Ley 2150 de 1995 y la Ley 527 de 1999. En cuanto al primero, se le da apertura al uso de medios de transmisión de datos para que los interesados envíen y reciban información de la administración, ello es solo de la administración pública. En lo que refiere al segundo, a la regulación de acceso y uso de los mensajes de datos, de igual forma exclusivo de la administración pública.

Por otro lado, el académico, Gabriel Valbuena Hernández<sup>34</sup>, coincide con Arboleda, pero señala también, la Ley 270 de 1996, que en su artículo 95, habla de la implementación de los medios electrónicos, en la administración de justicia, al tenor literal de la sentencia C-037/96. Con ello, se busca, en cumplimiento de la Constitución, una administración de justicia pronta, cumplida y eficaz<sup>35</sup>.

Siguiendo lo anterior, abordaremos el tema del uso de los medios electrónicos, teniendo en cuenta las diferentes enunciados normativos, comentarios doctrinales definiciones técnicas de éstos, entre otros, que engloban la creación del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estructurado en dos grandes partes, una referida al procedimiento administrativo electrónico y la otra la del proceso judicial electrónico.

Es de aclarar, que el nombre de: “*proceso judicial electrónico*”, no está dispuesto técnicamente dentro del CPACA, simplemente, en la lógica de llevar actuaciones judiciales por medios electrónicos, esta denominación ha sido acuñada por autores como el maestro

---

<sup>33</sup> ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José. *Comentarios al nuevo Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo*, segunda edición, Bogotá, Legis, 2012 p. 98.

<sup>34</sup> VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel. *Seguridad jurídica, seguridad informática y proceso judicial electrónico en el marco de la Ley 1437 de 2011* en Derecho Procesal Administrativo modernización del Estado y territorio estudios en homenaje a Augusto Hernández Becerra, Bogotá, Ibáñez, 2014, p.587.

<sup>35</sup> Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 228 y ss.

Gustavo Quintero Navas<sup>36</sup> y por el académico Gabriel Valbuena Hernández<sup>37</sup>, con los cuales nos identificamos.

### 1.1 Concepto, alcances, objetivos.

Para enfocar el tema de las nuevas tecnologías desde un contexto científico se debe tener en cuenta la forma en que éstos han sido definidos y ubicados como herramientas al servicio de las diferentes actividades de la cotidianidad humana<sup>38</sup> y, en el caso del ámbito del derecho como bien lo señala el profesor Quintero Navas: *“le imponen un proceso constante de revisión que le permita ajustarse a la totalidad de los cambios sociales”*. Estas tecnologías toman su relevancia como instrumentos de apoyo para el mejor hacer de la administración pública como de justicia.

En ese sentido, de las nuevas tecnologías se desprende la utilización de medios electrónicos, los cuales desde la ciencia son definidos como el resultado de los avances científicos y tecnológicos, que en concurso con las ingenierías, las matemáticas y el desarrollo de los sistemas expertos apuntalados en la inteligencia artificial, ponen a disposición de la sociedad humana el uso de la información electrónica a través de canales como el internet<sup>39</sup>.

Los medios electrónicos son los mecanismos o herramientas, producto de las nuevas tecnologías de la información, las cuales según el profesor Rincón Cárdenas, son una realidad, y vienen a dar respuesta a las demandas de la sociedad, se acude a ellas para

---

<sup>36</sup> QUINTERO NAVAS, Gustavo Arnulfo, Contencioso Administrativo y medios electrónicos: un gran paso hacia la modernización del ejercicio de la justicia administrativa, Revista de Derecho, comunicaciones y Nuevas Tecnologías N.º 6, Bogotá, Universidad de los Andes, 2011, p. 5.

<sup>37</sup> VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel. *Seguridad jurídica, seguridad informática y proceso judicial electrónico en el marco de la Ley 1437 de 2011* en Derecho Procesal Administrativo modernización del Estado y territorio estudios en homenaje a Augusto Hernández Becerra, Bogotá, Ibáñez, 2014, p.587.

<sup>38</sup> VALERO TORRIJOS, Julián, *Administración pública, ciudadanos y nuevas tecnologías*, En: El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI, Homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, Tomo III, Coordinador: Francisco Sosa Wagner, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, p. 2943.

<sup>39</sup> <http://espanol.thelawdictionary.org/medios-electronicos/>

rentabilizarlas en sustitución de viejos instrumentos<sup>40</sup>, los cuales se adaptan a las necesidades de la población convirtiéndose en ayuda, para el cumplimiento de tareas u objetivos trazados por las personas.

Se han introducido en diferentes campos, incluido los concernientes en apoyo a las tareas que demandan los Estados, su uso en la normatividad Colombiana, se ha venido introduciendo hace algunos años, para el cumplimiento de los fines estatales los cuales se originan, tanto Constitucional como legalmente.

## **1.2 Ámbito constitucional del uso de los medios electrónicos.**

Bajo la égida de la dogmática constitucional, las instituciones públicas como de justicia, en Colombia, están obligadas a dar cumplimiento a sus principios y comulgar con los fines del Estado social y de derecho<sup>41</sup>. Es por ello, que todo proceso de transformación o cambio en la legislación nacional, debe estar orientado por dichos fundamentos. Mandato que no exceptúa la implementación de los medios electrónicos en la nación, enmarcados en la Ley 1437 de 2011 o CPACA.

Es así como para el legislador, la finalidad de la primera parte del CPACA, es la sujeción que tienen las autoridades a nuestra Constitución<sup>42</sup>, las cuales deben interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos conforme a los principios consagrados en la Carta Magna<sup>43</sup>. De la misma manera, en la segunda parte de esta Ley, en torno a la organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se

---

<sup>40</sup> RINCÓN CÁRDENAS, Erick. *Manual de derecho de comercio electrónico y de Internet*. Universidad del Rosario, 2006, p. 19-20.

<sup>41</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier, *Manual de Hermenéutica Jurídica. Análisis constitucional, legal y jurisprudencial*, editorial DIKE, 2013, p. 148.

<sup>42</sup> El profesor Jaime Vidal Perdomo anota que: “*de este modo, todas las secciones del Derecho Administrativo arrancan del estudio de los principios y normas que la Constitución trae sobre el aparato administrativo y su marcha*”. Ver: VIDAL PERDOMO, Jaime, *Derecho administrativo*, décima tercera edición, Legis, 2008, p. 18.

<sup>43</sup> Ley 1437 de 2011, Artículos 1 y 3.

mencionan la aplicación de los principios constitucionales en la interpretación de las normas contenidas en esta parte del código<sup>44</sup>.

De acuerdo a lo señalado, el derecho a la información, el acceso a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley, y el habeas data, también, toman relevancia, al ser elevados a rango constitucional. Habida cuenta, la eficacia, economía y celeridad<sup>45</sup> como cimientos de la función pública, cuyo fin, es la de facilitar al asociado las herramientas necesarias para ello.

Es de anotar, que en la Constitución de 1991, no hay artículo alguno que de manera expresa hable de la utilización de los medios electrónicos ni de su implementación, sin embargo, la carta es visionaria al dejar abierta la posibilidad de cualesquiera que sean las actuaciones en la administración pública como en la judicial, se debe garantizar el acceso de los ciudadanos a éstas instituciones del Estado, máxime, en lo que el tema en estudio trae a referencia, los medios electrónicos y su implementación. Instrumentos que han de facilitar el acceso de los asociados a las ya mencionadas instituciones.

### **1.3 Leyes, Decretos, Resoluciones, Acuerdos.**

Para el soporte legal de las normas que tienen relación con el uso de medios electrónicos y su debida importancia, se han organizado, a través de una línea del tiempo, aspectos relevantes dentro del tema. Así mismo, veremos leyes, decretos, acuerdos y resoluciones, entre ellas queremos tener en cuenta las expuestas a continuación, que a nuestro parecer esbozan ampliamente los esfuerzos que han llevado a cabo, tanto el legislador como el gobierno, orientándolas en sus maneras de aplicación, en beneficio de los ciudadanos, la administración pública y la administración de justicia.

---

<sup>44</sup> Ley 1437 de 2011, artículo 103.

<sup>45</sup> El Artículo 209. La función administrativa está el servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley



La Ley, 270 de 1996, estatutaria de administración judicial, en su artículo 95, hace mención a la tecnología al servicio de la administración de justicia frente a la incorporación de tecnología de avanzada por parte del Consejo Superior de la Judicatura a la rama judicial, al mismo tiempo se habla de la eficacia, validez de los documentos electrónicos, incluyendo también la garantía de los procesos que se tramiten con soporte informático así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal<sup>46</sup>.

De lo precedentemente citado, se enmarca la estrecha relación de la norma con la Constitución. En igual sentido, resulta muy importante la pauta que tiene esta norma en el uso y manejo de tecnologías de la información por parte de la rama judicial, pues es una de los cimientos para la implementación del expediente judicial electrónico que se insertó en el CPACA y de el plan de justicia digital incorporado en el Código General del Proceso.

La Ley 527 de 1999, es un importante referente que se adopta conforme a la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La cual tiene como objetivo ayudar de manera relevante a todos los Estados en el robustecimiento de la normatividad que rige el uso de métodos de comunicación y almacenamiento de información sustitutivos de los que utilizan papel y a preparar tal legislación en los casos en que carezcan de ella<sup>47</sup>.

Debemos resaltar que esta ley, que empezó a regir desde el 18 de agosto de 1999, define y precisa los conceptos de: Mensaje de datos<sup>48</sup>, el comercio electrónico, la firma digital, una entidad de certificación, Intercambio Electrónico de Datos (EDI), y sistema de información. Conjuntamente, se le da el reconocimiento jurídico de la validez plena y del valor probatorio de los mensajes de datos.

---

<sup>46</sup> Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, artículo 95.

<sup>47</sup> Ley modelo sobre Comercio Electrónico, aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. *Nueva York, Publicación de las Naciones Unidas*, 1999.

<sup>48</sup> Según el Artículo 2º, literal b, el mensaje de datos se define como la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax".

Además, esta normatividad es aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos. Su interpretación está basada en su origen internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. Se le dan efectos jurídicos, validez y fuerza obligatoria del mensaje de datos, también, se habla de la integridad, criterio para valorar probatoriamente, la conservación, tiempo, lugar de envío y recepción del mensaje de datos. Esta norma, también hace referencia al denominado: "*equivalente funcional*", que es aplicable a la documentación consignada sobre papel. La Honorable Corte Constitucional Colombiana al declarar la exequibilidad de la ley 527 de 1999, menciona que se adoptó criterio flexible del equivalente funcional: "*que tuviera en cuenta los requisitos de forma fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la documentación consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza, no equivalen en estricto sentido a un documento consignado en papel. (...) En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley*"<sup>49</sup>.

Igualmente, el CPACA establece en su artículo 53<sup>50</sup>, que se aplicaran las disposiciones de la Ley 527 de 1999, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos. Verbigracia de lo anotado, el denominado equivalente funcional, contemplado en la ley en cita, cual se materializa con el acto administrativo electrónico<sup>51</sup>, solo se puede diferenciar del acto administrativo en sentido tradicional, en el cambio de soporte, pues simplemente están en medios electrónicos y no en soporte físico, cuestión que no deja de conservar su esencia.

---

<sup>49</sup> Corte Constitucional, Sentencia C - 662 de junio 8 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz.

<sup>50</sup> El segundo párrafo del artículo 53 del CPACA reza: "*En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen*".

<sup>51</sup> La Ley 1437 de 2011, en su artículo 57 sobre acto administrativo electrónico contempla: "*las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley*".

Por otra parte, y en la relación con el Decreto Reglamentario 1747 De 2000, se reglamentó parcialmente la ley en mención, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales. Cabe mencionar que este decreto es derogado por el decreto 333 de 2014.

Posteriormente, en el Documento Conpes 3248 de 20 de octubre de 2003, de renovación de la Administración Pública, se hace mención a la estrategia anti trámites de la cual se busca la simplificación, integración y racionalización de trámites en la administración pública, a nivel de operación interna como externa, las cuales se fijan en sus relaciones con el ciudadano dentro de un marco de política.

De esta manera, se faculta al Gobierno Nacional para adelantar las acciones para el diseño e implantación de proyectos sobre racionalización de trámites en las entidades de la administración pública con sujeción de la relación beneficio/costo de estos proyectos identificados. Así mismo, se busca que la administración diseñe un programa de gobierno en línea para la prestación de servicios y trámites a los ciudadanos<sup>52</sup>.

La Ley 962 de 2005, hace mención al fortalecimiento tecnológico de la Administración Pública, con el fin de la disminución de los tiempos y costos de realización de los trámites por parte de los administrados. Para ello se incentiva el uso de medios tecnológicos integrados, se designa al Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de las TIC), con la orientación del apoyo técnico requerido por las entidades y organismos de la Administración Pública<sup>53</sup>.

El acuerdo No. PSAA06-3334 de 2 de marzo de 2006 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la judicatura hace referencia a la equivalencia funcional, dándole el mismo valor probatorio de documentos escritos a los mensajes de datos, siempre y cuando el firmante utilice una firma electrónica avalada por una entidad de certificación autorizada

---

<sup>52</sup> Documento Conpes 3248 de 20 de octubre de 2003, Renovación de la Administración Pública, p. 42.

<sup>53</sup> Ley 962 de 2005, artículo 1.

y la información que contenga sea accesible para su posterior consulta. Esto tiene aplicación, tanto en el proceso civil, laboral como en el contencioso administrativo.

De manera muy especial, el 31 de mayo y 1° de junio de 2007 en la ciudad de Pucón, Chile, se aprueba por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico la cual es acogida por el Estado Colombiano donde se precisan: el concepto de gobierno electrónico, los principios de gobierno electrónico, el derecho a relacionarse electrónicamente, sitios electrónicos de las administraciones públicas, Se plantea el compromiso de reducción de la brecha digital para la inclusión de todas las personas en la Sociedad de la información y de Conocimiento. Fundamentado lo anterior en las desigualdades sociales marcadas que tiene América Latina. Con ese fin, se reconoce el derecho de acceso electrónico a las Administraciones Públicas como derecho que les facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con las Administraciones Públicas. Igualmente, promover la construcción de una sociedad de información y conocimiento centrada en las personas con una política de inclusión y desarrollo<sup>54</sup>.

Ley 1341 de 2009 define principios y conceptos sobre la sociedad de la información<sup>55</sup> y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), hace énfasis en la masificación del gobierno en línea; el despliegue y uso eficiente de la infraestructura por parte del Estado para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar. Asimismo se encuentra la definición de TIC<sup>56</sup>.

La Ley 1437 de 2011 como eje central del trabajo de marras, destaca el uso de los medios electrónicos como elementos novedosos dentro de la codificación de dichas normas, sin

---

<sup>54</sup> Carta Iberoamericana de gobierno electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Pucón, Chile, 31 de mayo y 1° de junio de 2007, p. 4 y ss.

<sup>55</sup> Para la doctora Maria Merce Darnaculleta, la sociedad de la información está caracterizada por una *ruptura definitiva de las barreras territoriales y temporales que condicionan la realidad estrena a la red*". Ver. DARNACULLETA I GARDELLA, Maria Merce, Autorregulación y Derecho público: La autorregulación regulada. *Marcial Pons, Madrid*, 2005, p. 251.

<sup>56</sup> Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes.

desconocer los avances legales emanados en este campo más los esfuerzos que ha hecho la administración con la cognición de originar un cambio fundamental, de carácter tanto cuantitativo y cualitativo, en la competencia Estatal en esta órbita<sup>57</sup>.

La parte primera de este Código, la cual se denomina: “*Procedimiento Administrativo*”, establece: el registro para el uso de medios electrónicos, el documento público en medio electrónico, la notificación electrónica, acto administrativo electrónico, el archivo electrónico de documentos, el expediente electrónico, la sede electrónica, la recepción y envío de documentos electrónicos por parte de las autoridades, las sesiones virtuales. Estos elementos están sujetos a los principios específicos de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

En su segunda parte del Código denominada: “*Organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de sus funciones jurisdiccionales y consultiva*”, contempla los principios Constitucionales y los del debido proceso, además de las actuaciones a través de medios electrónicos en las actuaciones judiciales. Se estableció, entonces, la dirección electrónica para efectos de notificación, la utilización de medios electrónicos para efectos probatorios, y el expediente judicial electrónico, entre otros.

La Ley 1450 de 2011, Denominado Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones 2011-2014, en el que se acuerda desarrollar infraestructura para el despliegue de redes públicas de TIC, de acuerdo con las necesidades de telecomunicaciones. Además de la accesibilidad a los servicios de las Tecnologías de la Información y comunicaciones como la modernización en general de la administración estatal y de justicia.

Por su lado, la Ley 1474 de 2011 menciona, que en la democratización de la administración pública, se pueden aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función

---

<sup>57</sup> ZAMBRANO CETINA, William, Fundamentos y objetivos de la reforma del libro primero del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, *Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 20011*, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p. 37-77, p.73.

administrativa. Un ejemplo de estos mecanismos es el uso de los medios electrónicos como las sedes electrónicas.

La Ley 1546 de 2012, conocida como el Código General del Proceso, en adelante C.G.P., que aparte de regular los asuntos concernientes a los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, tienen aplicación en asuntos en otras jurisdicciones, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes<sup>58</sup>. Así, de manera indirecta, está conociendo de los procesos contenciosos administrativos, además de trámites en la administración pública, como lo comenta el Doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo sobre el C.G.P., la norma tiene injerencia en trámites que se llevan a cabo ante la administración pública: “*por su condición de código residual o subsidiario.*”<sup>59</sup>.

Visto así, se convierte en esencial, el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, contenidas en las disposiciones varias de esta Ley. En ésta, se determina que las autoridades judiciales deberán contar con mecanismos que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de datos. Así mismo, se establece: “*el Plan de Justicia Digital*”, el cual permite formar y gestionar expedientes digitales y el litigio en línea<sup>60</sup>. Estas son innovaciones, que no estaban contempladas en el Código de Procedimiento Civil.

En el contexto que venimos señalando, si bien es cierto, en esta ley existen artículos específicos que ya se aplican por estar en vigencia, a la fecha de realización de este trabajo aun este código no es aplicable, mientras no se expida y ejecute el plan de implementación conveniente. Es decir, resulta de grata importancia las observaciones aquí expuestas, habida cuenta, el examen de las distintas variables y situaciones que podrían tenerse en cuenta para observar con detalle, lo que se ha denominado, la utilización de los medios electrónicos.

---

<sup>58</sup> Ley 1546 de 2012 (Código General del Proceso), Artículo 1, el cual regula el objeto de este código dentro de las disposiciones generales de dicha ley.

<sup>59</sup> Entrevista a Pablo Felipe Robledo del Castillo sobre el CGP, en *Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, Decreto 1736 de 2012, Paralelo con legislación anterior*, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, 2012, p. 33.

<sup>60</sup> Ley 1564 de 2012, Artículo 103 Código General del Proceso.

Paralelamente como vocera del Gobierno Nacional, en calidad de Ministra de Justicia y del Derecho, la doctora Ruth Stella Correa Palacio estima que: *“desde el Gobierno Nacional no ahorraremos esfuerzos para lograr la implementación de los nuevos instrumentos procesales que permitan consolidar el nuevo sistema de justicia”*<sup>61</sup>. Al tenor de lo mencionado, se hace necesario la intervención del Estado con seriedad.

Cabe indicar, que los países que hoy día se llaman desarrollados, han superado escollos históricos y enfocado sus esfuerzos en la ciencia como un espacio de consecución de conocimiento para el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. Es pues, necesario, seguir ejemplos positivos, en el marco de nuestras realidades. Lo sui generis de esta sociedad, está en su gente y no las cosas.

En este orden, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PSAA13-10073 de fecha 27 de diciembre de 2013, mediante el cual se reglamentaba la gradualidad para la implementación del Código General del Proceso. Dicho Acuerdo, estableció un cronograma de implementación en diferentes Distritos Judiciales desde el 3 de junio de 2014 y hasta el 1 de diciembre de 2015.

Ahora bien, el 28 de mayo de 2014 el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PSAA14-10155, por medio del cual suspendió el No. PSAA13-10073. Pues, según lo manifestado en el acuerdo, el Gobierno Nacional no ha apropiado los recursos necesarios para la implementación del C.G.P. La suspensión estará en pie hasta que no se realicen las adjudicaciones correspondientes.

El Decreto 2482 de 2012, establece el fortalecimiento de la Administración Pública con planes de desarrollo administrativo, plan de eficiencia administrativa y cero papel, plan de racionalización de trámites y plan de Gobierno en Línea. Ello, como políticas de desarrollo administrativo, aplicado a las entidades y organismos de la rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional<sup>62</sup>,

---

<sup>61</sup> *Palabras de Ruth Stella Correa Palacio*, en Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, Decreto 1736 de 2012, Paralelo con legislación anterior, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, 2012, p.31.

<sup>62</sup> Decreto 2482 de 2012, artículo 1.

El Decreto 2618 de 2012 crea el Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información, para dinamizar en el país las TIC, para ello, se determinan las funciones de formular, coordinar y hacer seguimiento a la implementación de políticas públicas para el uso, acceso y administración de la infraestructura tecnológica que soporta la información del Estado; así mismo, definir la arquitectura tecnológica de los sistemas de información del Estado, que incluyen estándares de interoperabilidad, de privacidad, de seguridad y de construcción o parametrización de aplicaciones; también se destaca liderar el diseño y la adopción de políticas, planes y proyectos para promover y masificar el Gobierno en Línea coordinando acciones con las instancias pertinentes; modificando así, la estructura del Ministerio TIC.

El Decreto 2573 de 2014 que derogó el Decreto 2693 de 2012, mantiene el objeto del anterior Decreto, para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la búsqueda de favorecer la edificación de un Estado con mayor grado de eficiencia, transparencia y participación.

Del Acuerdo No. PSAA14-10215 se extra la adecuación del sistema de información de gestión de procesos y manejo documental (Justicia XXI) en ambiente Web, en armonía con el Código General del Proceso para crear los expedientes electrónicos, la notificación electrónica y la consulta de procesos a través de internet.

En ese orden de ideas, el Plan Nacional de desarrollo 2014- 2018, establece los últimos lineamientos en materia de medios electrónicos, al momento de la realización de este documento que muestra los esfuerzos del Ministerio de las TIC en cumplimiento con la equidad, como uno de los pilares instaurados en esta Ley, para que en coordinación con las entidades estatales, dicho Ministerio, defina los: *“estándares, modelos, lineamientos y normas técnicas para la incorporación de las Tecnologías de la Información y las*



*Comunicaciones*”<sup>63</sup> para la contribución en el mejoramiento que brinda y ofrecerá el Estado a los ciudadanos por medio de trámites y servicios<sup>64</sup>.

Igualmente, se hace mención al Plan decenal del sistema de justicia<sup>65</sup>. Con el objeto de promover la coordinación, eficiencia y modernización en la administración de justicia y en las funciones de los organismos de control, este plan debe contener objetivos del sistema de justicia, el plan de acción interinstitucional para lograrlos, las metas institucionales e interinstitucionales, la definición de herramientas tecnológicas para la justicia, los compromisos específicos de cada prestador de servicios de justicia, las prioridades y criterios territoriales y la definición del mecanismo de seguimiento<sup>66</sup>.

Se traza el propósito de garantizar un mejor acceso a las tecnologías de la información, para responder a la necesidad de brindar para el ejercicio y goce efectivo de derechos constitucionales a la comunicación, acceso a la información y contribución en la masificación del gobierno en línea. Que es consecuente con la Ley 1341 de 2009. Para esta intención se convierte en: *“deber de la Nación asegurar la prestación continua oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones para lo cual velará por el*

---

<sup>63</sup> Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018, Art. 45.

<sup>64</sup> Entre los estándares, modelos, lineamientos y normas técnicas para la incorporación de las TIC que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios que el Estado ofrece al ciudadano están:

e) Integración de los sistemas de información de trámites y servicios de las entidades estatales con el Portal del Estado colombiano.

f) Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea.

g) Marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las tecnologías de información en el Estado.

h) Administración, gestión y modernización de la justicia y defensa, entre otras la posibilidad de recibir todo tipo de denuncias y querellas.

i) Sistema integrado de seguridad y emergencias (SIES) a nivel territorial y nacional.

j) Interoperabilidad de datos como base para la estructuración de la estrategia que sobre la captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y publicación de grandes volúmenes de datos (Big Data) formule el DNP.

<sup>65</sup> Concurrirán para la elaboración del Plan decenal del sistema de justicia el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo o quienes hagan sus veces, este plan deberá formularse dentro de los dos años siguientes a la publicación de la presente ley.

<sup>66</sup> Art. 104 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

*despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones en las entidades territoriales”<sup>67</sup>.*

#### **1.4 Una corta mirada del uso de los medios electrónicos en España. Marco normativo para de su utilización en la administración pública y de justicia.**

En España la Ley 11/2007 es de gran importancia, pues plantea los Derechos de los ciudadanos al relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. En términos de la modernidad, se dictamina por fuerza de ley el uso de los medios electrónicos y junto con ello, el proveer las condiciones necesarias para ello. De tal forma, que el Estado y sus instituciones deben estar en vanguardia no solo tecnológica y científica, también, garantes jurídicamente, del acceso de sus asociados a éstas, por intermedio de éstos.

La Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introdujo, por vez primera en el ordenamiento jurídico español, la posibilidad de utilizar medios técnicos, electrónicos e informáticos para el desarrollo de la actividad y el ejercicio de las funciones de juzgados y tribunales.

Ley 18 de 2011 del 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, responde al Plan de Acción E-Justicia desarrollado por la Unión Europea, que se funda en la proposición de medidas coordinadas a nivel Europeo, el cual busca la cooperación entre las autoridades judiciales y el acceso de los ciudadanos a la justicia como marco regulador de la utilización de las nuevas tecnologías en la Administración, mejorando así, la eficacia de los sistemas judiciales mediante la aplicación de las TIC en la gestión administrativa de los procesos judiciales.

#### **Conclusiones de capítulo.**

En este primer capítulo, se estructuran los antecedentes en materia del uso de medios electrónicos, como nuevas tecnologías de la información, aplicados a la estructura

---

<sup>67</sup> Art. 188 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

normativa, que nacen por la necesidad de aprovechar la tecnología, la cual ha estado al servicio de muchas áreas del conocimiento. Así las cosas, estas normas se erigen con la adaptación de los principios constitucionales, concernientes a la función pública. En ese sentido estas leyes se acomodan a la administración pública y la de justicia para el cumplimiento de sus funciones de una manera más eficiente.

Estas normas se han construido también con su vinculación de las necesidades globales, como es el caso de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la cual plantea la sustitución del uso del papel, por medios electrónicos, asimismo la carta Iberoamérica de Gobierno electrónico, en la cual se erigen normas en beneficio de reducir la brecha digital, en pro de permitir el acceso de los ciudadanos a relacionarse con la administración, que se sustenta en el concepto de gobierno electrónico.

El Código General del Proceso se convierte en un referente muy importante para el CPACA, en concordancia con el expediente judicial electrónico, pues el plan de justicia digital son el soporte para el procedimiento judicial electrónico, el cual está acorde con el litigio en línea, planteado en esta Ley procesal que remplace en Código de Procedimiento Civil.

La implementación del gobierno en línea, y la modernización de la justicia formulados en el plan Nacional de desarrollo, 2014-2018, son la estructura de las iniciativas y fortalecimiento a las entidades administrativas y a la administración de justicia para los próximos años, para el desarrollo de los instrumentos planteados en el CPACA conforme a la utilización de los medios electrónicos.

Las normas y experiencias de países como España, denotan la globalidad y la necesidad de adaptar los derechos de los ciudadanos a relacionarse con sus gobiernos. Este país por llevar algunos años de andamiaje en esta materia ha desarrollado, normativas que complementan el derecho a relacionarse con las administraciones públicas y de justicia.

## **CAPÍTULO 2 ANÁLISIS, PERSPECTIVAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO.**

La introducción del uso de los medios electrónicos por parte de las autoridades como ya lo hemos venido señalando no es nuevo, habida cuenta, en este capítulo, haremos un análisis desde el aspecto global que encierran, examinaremos la adaptación de modelos internacionales y su adaptación en el nuestro; estudiaremos las bases del gobierno electrónico soportadas por los principios rectores del procedimiento administrativo y por los principios contemplados en la Carta Iberoamericana de derecho electrónico, para finalmente analizar la figura de la sede electrónica, desde una perspectiva académica y soportada en principios exclusivos fijados por la Ley 1437 de 2011.

### **2.1 De la globalización en materia de las tecnologías de la información en el derecho administrativo Colombiano.**

Antes de hablar, específicamente del derecho administrativo, la globalización para el uso de los medios electrónicos empieza a tomar forma si nos remitimos a la Ley modelo, Sobre Comercio Electrónico. Aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1999. Como norma genérica destinada a regir de manera uniforme en los Estados, tendientes a la “*armonización del derecho*”, adoptándose en las normatividades internas en cada uno de los Estados<sup>68</sup>. Pues recordemos que como lo señalamos en el capítulo anterior, fue la base para la inserción de la Ley 527 de 1999. Lo que quiere decir que la sociedad se adapta por las necesidades de cada Estado. o es inducida a ser adaptada en el contexto de la modernidad.

Conforme a la normatividad que ya hemos señalado previamente. Podemos destacar la importancia que se añade a la globalización con el uso de estos medios en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto se busca que

---

<sup>68</sup> ALEGRIA, Héctor, *Globalización y derecho*, Revista Pensar en derecho, p. 267-284, p. 235 disponible en: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revista-0.php>

el derecho administrativo, se adapte a los cambios que se vienen presentando en la sociedad, para estar así, acorde con el mundo globalizado.

El derecho administrativo contemporáneo demanda una constante transición, pues el uso de las nuevas tecnologías son desafíos que obedecen a procesos de reforma institucional y de modernización de las administraciones, que como lo señala el académico Joan Prats: *“proceden fundamentalmente de los procesos en curso de globalización y transición a la sociedad del conocimiento. Estos procesos están generando una complejidad, diversidad y dinamismo sin precedentes. (...) Todo esto modula o altera decisivamente las tareas tradicionales de las administraciones, exige tareas nuevas y obliga a plantear todas ellas en condiciones nuevas”*<sup>69</sup>.

El papel que desempeñan las tecnologías de la información y de las comunicaciones hacen posible el fenómeno de globalización que estamos presenciando, como instrumentos de disminución de costos y tiempos<sup>70</sup>. Pues, las sociedades contemporáneas en palabras del profesor Jacques Chevallier: *“parecen haber ingresado en una nueva fase. Por una parte, asistimos a la conmoción del conjunto de equilibrios sociales: revoluciones tecnológicas avance de las tecnologías de la información y de la comunicación”*<sup>71</sup>.

En ese sentido, la globalización tecnológica se enfoca en las mejoras y crecimiento de las poblaciones que las adopten, pasando así a desempeñar una actuación destacada en estos días. Entonces, los Estados que no tengan en cuenta o rechacen el desarrollo que se desprende de los mismos, tienden a perder posibilidades de crecimiento, sin contar con la exclusión de la globalización a lo que se ven sometidos<sup>72</sup>, de esta manera, existe

---

<sup>69</sup> PRATS CATALÁ Joan. *Las transformaciones de las Administraciones Públicas de nuestro tiempo*, Sainz Moreno, Fernando y otros. *Estudios para la Reforma de la Administración Pública*, Madrid, INAP, 2004, p. 27-102.

<sup>70</sup> GARCÍA RUBIO, Fernando. Las nuevas tecnologías ante el Derecho y la organización administrativa: un estudio sobre las repercusiones en la Administración local. *Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública*, 2003, p.20.

<sup>71</sup> CHEVALLIER, Jacques. El Estado posmoderno. Editorial de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2011, p. 21.

<sup>72</sup> KAUFMAN Esther *Panorama Latinoamericano de Gobiernos Electrónicos Modelos Existentes* en Segundo Congreso Argentino de Administración Pública. Sociedad, Estado y Administración p. 3 disponible en

interdependencia bajo el contexto de globalidad, en la sociedad en red que plantean las tecnologías y de la información y las comunicaciones<sup>73</sup>.

Para un mejor entender, el uso de las TIC, se constituye en expresión concreta de la globalización en el derecho administrativo colombiano, pues otra expresión de la globalización surgida en nuestro derecho administrativo colombiano: surge en la anexión progresiva de las TIC en la función administrativa<sup>74</sup>.

Para la honorable Corte Constitucional, en la sentencia que declaró exequibles algunas normas de la Ley 527 de 1999, en la búsqueda de mejorar los regímenes jurídicos, que otorgan fundamento jurídico en el intercambio electrónico de datos a partir de los avances tecnológicos, se plantean desafíos del siguiente orden: *“actualización a los regímenes jurídicos nacionales e internacionales, de modo que puedan eficazmente responder a las exigencias planteadas por la creciente globalización de los asuntos pues, es indudable que los avances tecnológicos en materia de intercambio electrónico de datos ha propiciado el desarrollo de esta tendencia en todos los órdenes, lo cual, desde luego, implica hacer las adecuaciones en los regímenes que sean necesarias para que estén acordes con las transformaciones que han tenido lugar en la organización social, económica y empresarial, a nivel mundial, regional, local, nacional, social y aún personal.”*<sup>75</sup> No hay duda, que los medios electrónicos, entendidos de forma amplia, son útiles y necesarios para la vida en este planeta.

Los pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento contemplados el artículo 3 de la Ley 1341 de 2009, como el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la

---

<http://esterkaufman.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/panorama-latinoamericano-de-gobierno-electronico.pdf>

<sup>73</sup> SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Procedimientos administrativos y tecnología, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011, 153 – 154.

<sup>74</sup> CÁRDENAS POVEDA, Margarita. La globalización y el impacto de la integración económica en el derecho administrativo colombiano. *IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla AC*, 2014, vol. 8, no 33, p. 77-97.

<sup>75</sup> Corte Constitucional, Sentencia C - 662 de junio 8 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz.

formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal. Se convierten en los magnos asientos de la sociedad de la información y de conocimiento globalizada<sup>76</sup>.

Un aspecto válido a tratar, son las variopintas interconexiones que el tema de los medios electrónicos trae consigo, pues, el asunto también surca espacios éticos y filosóficos, como sociológicos y humanísticos en general. La búsqueda incesante del ser humano por el control de todo se ve reflejado en la simplificación de procesos tanto de la vida diaria como en actividades gubernamentales y de justicia, tal es el caso del uso de los medios electrónicos y la Ley 1437 de 2011, que los regula.

En este aparte, el profesor Barros cantillo, en su obra las Nuevas Herramientas de la Argumentación Jurídica, en el capítulo X, titulado Filosofías Borrosas y Derecho del Futuro, señala con ejemplar maestría, acerca de la importancia de posicionar la filosofía y los principios jurídicos, al compás de los desarrollos informáticos y de los sistemas expertos como de los conceptos determinantes de la inteligencia artificial (I.A.) No cabe duda, que las imbricaciones propias del tema traspone las fronteras de lo estrictamente jurídico y pone en alerta la necesidad de visiones múltiples e interdisciplinarias<sup>77</sup>.

De la misma manera, parafraseando al Consejero de Estado Luis Fernando Álvarez Jaramillo, se convertía en necesario para el Estado Colombiano, la expedición de un nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el que se volviera a diseñar el marco normativo con los desarrollos de la tecnología informática y los modernos modelos de globalización que se generan por los cambios en los esquemas de la gestión pública y en las relación sociales que experimenta la sociedad<sup>78</sup>.

Así las cosas, en esta normatividad se consolida tanto para las actuaciones administrativas, como en el procedimiento judicial: *“la implementación de las facilidades tecnológicas de*

---

<sup>76</sup> SANTOFIMIO GAMBIOA, Jaime Orlando, Procedimientos administrativos y tecnología. p. 155-156.

<sup>77</sup> BARROS CANTILLO, Nelson, Las nuevas herramientas de la argumentación jurídica. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2005, p. 225 y ss.

<sup>78</sup> ÁLVAREZ JARAMILLO, Luis Fernando, Presentación de la primera edición, Comentarios al nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Enrique José Arboleda Perdomo, segunda edición, Bogotá, Legis, 2012 p. xxvii.

*nuestro tiempo*”<sup>79</sup> como herramientas de práctico uso basadas en la globalización. En ese sentido, el proyecto de Ley 198 de 2009 se destaca la intención del desarrollo de las nuevas tecnologías y el fenómeno de globalización que se ha presentado durante los últimos 30 años<sup>80</sup>.

Resultaría conveniente decir que el uso de medios electrónicos dentro de los procedimientos administrativos<sup>81</sup> y judiciales en el derecho administrativo, responden a la necesidad de adaptar instrumentos para la consecución de los fines del estado, lo cual nos hace inclinarnos a que el fenómeno de globalización obedece a una necesidad de adaptación y no de inducción por seguir una tendencia global para armonizar el derecho.

## **2.2 Del fenómeno del Mimetismo conforme a la utilización de los medios electrónicos en la Ley 1437 de 2011.**

Si bien es cierto, en el anterior acápite examinamos el uso de los medios electrónicos desde una perspectiva de la globalización, ahora entramos a analizarlos para responder a si estamos ante un fenómeno de mimetismo. Dicho esto, Podemos empezar diciendo que son acertados los argumentos que desde una posición crítica, aseveran que a nivel latinoamericano, seguimos las creaciones jurídicas nacidas en el continente Europeo, referidas a una especie de trasmutaciones, por así decirlo, del que no escapamos en nuestra realidad local, ni tampoco en el campo del derecho administrativo. Con base en lo anterior, surge el interrogante si en la utilización de los medios electrónicos que se establecen en el CPACA estamos ante una copia por influencia de otros Estados, o si estamos creando una figura con “*originalidad*”.

---

<sup>79</sup> Memorias de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo Volumen III, La Ley y los debates de la comisión de la reforma parte A artículos 1 a 142, Min Justicia y Consejo de Estado, Sala de Consulta y servicio Civil, p. 243.

<sup>80</sup> GALINDO VÁCHA, Juan Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Temis, Pontificia Universidad Javeriana p.78.

<sup>81</sup> Según el Académico, Gustavo Quintero Navas, Esta implementación en el procedimiento administrativo, se presenta: *como respuesta a la creciente necesidad de contar un derecho administrativo informático; como una orientación particular a esta rama del derecho público surgida a partir de la simbiosis entre derecho informático, uso de medios tecnológicos y derecho administrativo*. Ver: QUINTERO NAVAS, Gustavo, Procedimiento administrativo electrónico: aportes de la Ley 1437 de 2011. Revista de Derecho, comunicaciones y Nuevas Tecnologías N° 5, Enero- Junio de 2011, Universidad de los Andes, p. 2.



Por su parte, en relación a la teoría del derecho, el profesor Diego López Medina en concordancia a la construcción de teorías, subraya sobre América Latina, una identificación con un sitio de recepción y no de construcción iustéorica, lo cual deriva en referenciarla con una: *“continuidad e influencia que los criollos exhiben respecto de los Europeos”*<sup>82</sup>. De esta manera, los autores Latinoamericanos se enmarcan en lo que él llama: *“una tradición iustéorica débil, en la que el mérito consiste precisamente, en el mimetismo y la alineación con el europeo”*<sup>83</sup>.

En el ámbito del derecho público local, frente al Derecho Administrativo y Procesal Administrativo, desde el punto de vista de autores como el profesor Libardo Rodríguez<sup>84</sup> o el maestro Fernando Hinestrosa<sup>85</sup> estamos nutridos por una fuerte propensión en imitar instituciones francesas. Sin embargo, se ha sabido mantener una autonomía que va más allá de la creación de origen.

Al respecto, para el doctor Fernando Hinestrosa, ciertamente los derechos latinoamericanos no son originales, en tanto América Latina se ha regido por un derecho continental europeo, enmarcado en la tradición romano-germánica, que constituye una apropiación de elementos básicos de la identidad nacional, como la lengua, la cultura y la religión que denotan la incorporación de principios, valores, método y estilo<sup>86</sup>. Fue

Desde la perspectiva del autor Francés, Jean Rivero, se presenta un fenómeno de fácil descripción, que no tiene una definición clara, pues en la dinámica de crear, transformar o copiar suele ser más habitual que algunos Estados, busquen en otros, las instituciones y las

---

<sup>82</sup> LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo, *Teoría impura del derecho La transformación de la cultura jurídica latinoamericana*, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Legis, Bogotá, 2009, p. 22 y ss.

<sup>83</sup> *Ibíd.*

<sup>84</sup> RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. *Derecho Administrativo general y colombiano*, Decimosexta edición, Temis, Bogotá, 2011, p. 3.

<sup>85</sup> HINESTROSA, Fernando, *Encrucijadas actuales del Derecho*, disponible en Instituciones Judiciales Y Democracia Reflexiones con ocasión del Bicentenario de la Independencia y del Centenario del Acto Legislativo 3 de 1910, p. 588.

<sup>86</sup> HINESTROSA, Fernando, *Encrucijadas actuales del Derecho*, disponible en Instituciones Judiciales Y Democracia Reflexiones con ocasión del Bicentenario de la Independencia y del Centenario del Acto Legislativo 3 de 1910, p. 587.

reglas, que en su modo de ver, responden a las condiciones de su propio problema<sup>87</sup>. En otras palabras, establecen por analogía o comparación, alternativas que podrían ser útiles, pero para el caso en cita, son más copias a remendar de modelos importados, que reflexiones propias a partir de éstos como solución.

Afirma el académico Andrés Rodríguez Gutiérrez, que: “*como consecuencia de las lógicas propias de fenómenos tales como el de la globalización y el mimetismo, actualmente nos encontramos frente a una mutación de la estructura formal del Derecho*”<sup>88</sup>. Conforme a lo precedentemente citado, Rodríguez plantea, entonces que de esta manera se conforman fenómenos de imitación basados de modelos extranjeros<sup>89</sup>. En esa misma línea, este fenómeno de imitación se denomina mimetismo<sup>90</sup>. Para Jean du Bois de Gaudusson, profesor de la Universidad Montesquieu-Bordeaux IV, un patrón de ello, se surte de manera generalizada en el mundo acerca del mimetismo, surge en las aproximaciones normativas o dogmáticas que privilegian dicha figura. Pues, tal como ha sucedido con el continente africano, se da en cierta manera una indefinición de su realidad constitucional, en contraposición a su realidad social e institucional<sup>91</sup>.

A nivel local, en el interrogante de la originalidad o modelo copiado de nuestro contencioso administrativo, se plantea si hemos adoptado instituciones que se adapten a nuestros casos particulares para intentar suplir el bajo contenido de producción jurídica o si hemos creado instituciones que dan respuesta a nuestros propios conflictos<sup>92</sup>. Para responder a este cuestionamiento, el académico Ciro Nolberto Güechá Medina pone de ejemplo dentro del marco del Derecho Procesal Administrativo Colombiano, que, las acciones o pretensiones

---

<sup>87</sup> RIVERO, Jean, Paginas de derecho administrativo *Libro homenaje*, Universidad del Rosario, Temis, Bogotá, 2002. p. 135 y ss.

<sup>88</sup> RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Andrés, en la Reseña del libro: “*El Estado posmoderno*” de Jacques Chevallier Obra traducida del francés al español por Oswaldo Pérez Orozco, p. 238.

<sup>89</sup> RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Andrés, El Consejo de Estado colombiano y el Consejo de Estado francés, aproximaciones y diferencias disponible en Instituciones Judiciales Y Democracia Reflexiones con ocasión del Bicentenario de la Independencia y del Centenario del Acto Legislativo 3 de 1910, Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, p. 293.

<sup>90</sup> *Ibíd*em, p. 270.

<sup>91</sup> Du BOIS de GAUDUSSON, Jean, *Defensa e ilustración del constitucionalismo en áfrica después de quince años de práctica del poder* Traducido por Laura Ospina Mejía disponible en: <http://www.lavozdelderecho.com/files/TRADUCCI%D3N%20FRANCES.pdf>

<sup>92</sup> GÜECHÁ MEDICA, Ciro Nolberto, Derecho procesal administrativo 3ra edición, Ibáñez, Bogotá, 2014, p. 26.

contencioso administrativas tienen fundamentos de originalidad conforme al sistema francés de donde provienen, de esta manera, para el citado autor, no han sido copiadas, sino que expresa y precisa como una adaptación, por tanto se caracterizan por contener particularidades propias que le dan esa categoría de originalidad y diferencias<sup>93</sup>.

Al adentrarnos en la revisión de la Ley 1437 del 2011, en relación a sus apartes que dan cuenta de la utilización de medios electrónicos, encontramos una fuerte influencia del derecho español. Es decir, no podemos afirmar tajantemente, que su articulado está compuesto por creaciones “*originales*”, como lo afirma Güechá Medina, verbo y gracia de ello, el concepto de “*sede electrónica*”. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, se torna necesario el uso de los medios electrónicos tanto por parte de las autoridades, como en la administración de justicia en el contencioso administrativo.

En ese sentido no podemos desconocer que subyacen problemáticas como la necesidad de mejorar la relación administración-administrado, sustentada en la concepción antropocéntrica de la Constitución de 1991, la congestión judicial, la eliminación de trámites innecesarios, y la adaptación de las tecnologías de la información que se desarrollan exitosamente en el avance de otras ciencias.

Corolario de lo anterior, la problemática se centra no en el fenómeno del mimetismo, sino en si las adaptaciones que se hagan van a ser aceptadas en el Estado donde se acomodan, o si, por el contrario van a generar rechazo dentro del mismo<sup>94</sup>, quiera decir, que no se trata solo de la imitación o copia de un concepto y su desarrollo, pues de ejemplos la realidad está invadida. Se trata, más bien, de ser asertivos en su adaptación, que éste responda con criterios propios a las diferentes realidades de variada índole que asisten la cotidianidad nacional.

---

<sup>93</sup> GÜECHÁ MEDICA, Ciro Nolberto, Acciones o pretensiones contencioso administrativas, Ibáñez, 2013, p. 15.

<sup>94</sup> Para Jean Rivero surge el problema de la aceptación, si hay incorporación o un fenómeno de rechazo, ver en: Paginas de derecho administrativo. Ver: RIVERO, Jean, *Libro homenaje*, Universidad del Rosario, Temis, Bogotá, 2002. p. 135.

De la lectura de la Carta Iberoamérica de gobierno electrónico aprobada en Pucón, Chile, en 2007 que nuestro país suscribió, se desprende que el mundo contemporáneo está definido por las avanzadas cambios que surgen del desarrollo y difusión de las TIC en la colectividad. En ese hilo conductor, la finalidad de esta carta apunta a que los Gobiernos y sus respectivas Administraciones faciliten la comunicación y relación con los ciudadanos por medios electrónicos<sup>95</sup>.

Como viene dicho, se pone de manifiesto, que la inclusión del uso de los medios electrónicos en el derecho administrativo contemporáneo en Colombia, se hace necesaria, no como simples copias de modelos extranjeros, sino como acomodaciones a unos instrumentos imprescindibles para cualquier actividad, máxime, en pleno siglo XXI, cuando, el ejercicio de servir, por parte de los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, así como en las administración de justicia, ha de ser con eficacia y eficiencia.

En este contexto, la Honorable Corte Constitucional, señala: *“Es bien sabido que los progresos e innovaciones tecnológicas logrados principalmente durante las dos últimas décadas del siglo XX, en el campo de la tecnología de los ordenadores, telecomunicaciones y de los programas informáticos, revolucionaron las comunicaciones gracias al surgimiento de redes de comunicaciones informáticas, las cuales han puesto a disposición de la humanidad, nuevos medios de intercambio y de comunicación de información como el correo electrónico”*<sup>96</sup>.

Así las cosas, lo que se presenta es una armonía de modelos que responden a las tendencias de transformación global, a las cuales, el Estado no puede ser ajeno. Pues, los avances tecnológicos y las normas que subyacen para su implementación y uso, más allá del mimetismo, exigen estar a la vanguardia del mundo globalizado. Valga decir, no ha de ser satanizado esto de los medios electrónicos en la administración pública y de justicia, por el

---

<sup>95</sup> Carta Iberoamericana de gobierno electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Pucón, Chile, 31 de mayo y 1º de junio de 2007, p.3 y ss.

<sup>96</sup> Corte Constitucional Sentencia C-662 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.

contrario, su papel es preponderante y conllevan al mejoramiento de los servicios que las instituciones del Estado, en general, deben a sus asociados.

### **2.3 Del acogimiento del uso de medios electrónicos en el Derecho Administrativo como puente para mejorar la relación Administración – Administrados.**

Las administraciones públicas tienen la labor de convertir o acomodar tanto sus funciones, organización, las formas de actuación y de relacionarse tanto externa como internamente a las exigencias del contexto en el que vivimos, por medio de tecnificación y modernización las cuales, permiten el ajuste a las invenciones tecnológicas<sup>97</sup>. De la misma manera la académica Gladys Rodríguez, considera: *“el gobierno como elemento existencial del Estado es dinámico y está influenciado por los acontecimientos surgidos en el devenir de los tiempos y de las circunstancias; y una importante revolución es la que han producido el desarrollo de las TICs, especialmente la Internet.”*<sup>98</sup>.

Desde esta perspectiva, debemos recordar que La Ley 270 de 1996, como referente en la incorporación de tecnología de avanzada en la rama judicial, es un paso importante en el valor de los documentos electrónicos. Así mismo, en la revisión Constitucional de esta Ley se hizo mención a que: *“esta disposición busca que la administración de justicia cuente con la infraestructura técnica y la logística informática necesaria para el recto cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que la Constitución le asigna”*<sup>99</sup>.

El arribo del uso de los medios electrónicos a la administración de justicia ya es un hecho desde hace algunos años en algunos países. En Colombia, la Ley 527 de 1999 es el precedente en cuanto a utilización de medios electrónicos refiere. Téngase en cuenta, que el desarrollo que se venía dando en países industrializados, daba cuenta de las exigencias de la

---

<sup>97</sup> JINESTA, Ernesto. Administraciones Públicas electrónicas: Retos y desafíos para su regulación en Iberoamérica. *Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo*. Venezuela, Universidad Andrés Bello. Recuperado el, 2009, vol. 12, p. 2.

<sup>98</sup> RODRÍGUEZ, Gladys Stella. Gobierno Electrónico: Hacia la modernización y transferencia de la gestión pública. 2011. Revista De Derecho. Universidad Del Norte, 2004. P. 1-23, p.5.

<sup>99</sup> SENTENCIA No. C-037/96 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, *“Estatutaria de la Administración de Justicia”*.

implementación de los medios electrónicos, en procura de mejorar la prestación de servicios para lo cual era necesario fortalecer los canales eficaces en derecho mercantil para la regulación normativa del tema,<sup>100</sup> fundamentando así las transacciones comerciales que se sustentan en medios electrónicos, además de otorgarle fuerza probatorio a los mensajes de datos<sup>101</sup>.

Con respecto a su uso en la administración como lo señala el Doctor Ariel Sánchez: “, *la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como en la vida cotidiana de las personas, ha motivado un cambio considerado por muchos como revolucionario y ha dado lugar a la denominada “sociedad de la información”, en la que la información juega un papel estratégico como elemento de poder cada vez más importante*”<sup>102</sup>. Hecho que es relevante, si al observar el mundo de hoy, estas herramientas acortan los procesos y ponen en relieve, la proclive necesidad de sus usos. No hacerlo, es romper el equilibrio de la ventaja frente a otros.

Es bueno aclarar, que esta ley no es propiamente de comercio electrónico, pues su ámbito de aplicación contempla todo tipo de información en forma de mensajes de datos como lo afirma el profesor Rincón Cárdenas: “*sus normas son aplicables no solamente en el ámbito estrictamente comercial, sino, también, para el envío de información a las autoridades administrativas*”<sup>103</sup>.

En virtud del cumplimiento de los fines estatales, propuestos en los principios del CPACA, se trazó la ruta para el funcionamiento eficiente y democrático de las autoridades, con observancia de los deberes del Estado. En la misma medida, esta Ley señala que las

---

<sup>100</sup> Exposición de motivos del proyecto de Ley para la expedición de la Ley 529 de 1999 en la Gaceta del Congreso No. 44 del viernes 24 de abril de 1998.

<sup>101</sup> CARDENAS BORRERO, Tiberio; PÉREZ COLMENARES, Ramiro; MORALES RESTREPO, Didier, Código de Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo comentado, Vigésima cuarta edición, Leyer, p. 9.

<sup>102</sup> SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. El acto administrativo. *Teoría general*, 2004, vol. 2, Bogotá, Legis, 2004, p. 277.

<sup>103</sup> RINCÓN CÁRDENAS, Erick. *Manual de derecho de comercio electrónico y de Internet*. Universidad del Rosario, 2006. p. 29.

actuaciones administrativas se desarrollarán conforme a principios de: igualdad, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Es necesario entonces comprender, que la implementación, uso y manejo de las tecnologías de la información establecidas en este Código, deben estar sujetos a dichos principios, con el fin de lograr una verdadera armonía entre lo que busca la norma, la Constitución y la realidad nacional, la cual es determinante. No, en una negativa forma de sociedad de consumo, por el contrario, todo un manifiesto de adaptación a los nuevos desafíos que trae el siglo XXI.

#### **2.4 Utilización de Medios electrónicos sujetos a los principios del procedimiento administrativo.**

Los principios que deben tener las actuaciones administrativas frente al uso de los medios electrónicos, son pautas que se complementan para conseguir que la totalidad de la actividad administrativa, sea consecuente con los mandatos constitucionales<sup>104</sup>. Pues la utilización de estos medios permiten el cumplimiento de los fines estatales de conformidad con los principios establecidos en el artículo 3 del CPACA, En particular, la eficiencia, celeridad economía y transparencia de la administración<sup>105</sup>, en ese hilo conductor, definiremos cada uno de ellos desde una visión trazada en el uso de medios electrónicos en el procedimiento administrativo, haciendo algunas reflexiones en algunos de ellos:

**Igualdad.** Se considera como el mismo trato y protección de por parte de la administración a administrados. En secciones posteriores de este escrito haremos un análisis más profundo de las implicaciones de este principio en la utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo electrónico.

---

<sup>104</sup> VEGA DE HERRERA, Mariela; SUÁREZ BOHÓRQUEZ, Julián, Derecho Procesal Administrativo, Edición: 4ª, Bogotá, Leyer, 2014, p. 14.

<sup>105</sup> BENAVIDES, José Luis (Editor), Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) Comentado y concordado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 153-154.

**Responsabilidad.** Este que no se encontraba en el Decreto 01 de 1984, da cuenta del acatamiento de las normas constitucionales y legales por parte de la función estatal. *“Pueden ser de diversas clases y conllevan a diferentes consecuencias”*<sup>106</sup>. Casos concretos que se podrían presentar desde nuestro punto de vista, en relación a la utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo electrónico, son los eventos cuando se produzca falla en el servicio de los medios electrónicos del que ponga a disposición una autoridad, que se implementaron en la nueva reforma de Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. En tanto el Código en su artículo 60, habla que toda autoridad garantizara: “condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad”.

Acá, ya podemos observar algunas tareas que le asigna el legislador a las autoridades, para cuando manejan los medios electrónicos como herramientas de funcionamiento. Pero también nos hacen pensar que cuando este tipo de autoridades tengan problemas de calidad con el servicio, serán las mismas quienes deban responder por daños y perjuicios que se puedan generar a los usuarios.

Debido a que el legislador visualizó esta problemática, insertó una forma de solución, en caso que se presenten este tipo de fallas, como es el caso del artículo 62 en su segundo inciso que dice: *“Cuando fallen los medios electrónicos de la autoridad, que impidan a las personas enviar sus escritos, peticiones o documentos, el remitente podrá insistir en su envío dentro de los tres (3) días siguientes, o remitir el documento por otro medio dentro del mismo término, siempre y cuando exista constancia de los hechos constitutivos de la falla en el servicio”*<sup>107</sup>, esta norma pareciera que a simple vista, tiene un mecanismo de solución ante cualquier caso que se presentare de falla de esta clase de medios electrónicos. Sin embargo, antes de empezar a analizar la norma en toda su esencia, ya podemos

---

<sup>106</sup> VEGA DE HERRERA, Mariela; SUÁREZ BOHÓRQUEZ, Julián, Derecho Procesal Administrativo, Edición: 4ª, Bogotá, Leyer, 2014, p. 14.

<sup>107</sup> Dice el mencionado artículo: “Para efectos de demostrar el envío y la recepción de comunicaciones, se aplicarán las siguientes reglas: 1. El mensaje de datos emitido por la autoridad para acusar recibo de una comunicación, será prueba tanto del envío hecho por el interesado como de su recepción por la autoridad. 2. Cuando fallen los medios electrónicos de la autoridad, que impidan a las personas enviar sus escritos, peticiones o documentos, el remitente podrá insistir en su envío dentro de los tres (3) días siguientes, o remitir el documento por otro medio dentro del mismo término, siempre y cuando exista constancia de los hechos constitutivos de la falla en el servicio.



dilucidar en el final de la misma, cuando hace alusión: “*siempre y cuando exista constancia de los hechos constitutivos de la falla en el servicio*”<sup>108</sup>.

Es decir que no habrá manera de enviar ningún tipo de documento en el plazo extendido, cuando no exista constancia de los hechos constitutivos de la falla en el servicio. En este punto hay que preguntarse, si para el particular hay imposibilidad de enviar algún tipo de documento electrónico, referente a que los medios electrónicos no le reciben cierto documento, lo cual en principio lo podemos vislumbrar como una falla en el servicio, pero si para la entidad no existe ninguna falla en el servicio, aduciendo que sus sistemas se encontraban en condiciones de recibir documentos, y además de esto desestima la constancia de los hechos constitutivos del no envío, apoyándose en su tesis principal del perfecto funcionamiento de los medios electrónicos.

Entonces vemos acá un problema jurídico, porque el particular se va a ver afectado y en consecuencia la no presentación de dicho documento dentro de los términos legales, le puede acarrear un perjuicio mayor. Por lo anterior podemos inferir, que puede haber situaciones que no contempla dicha normatividad, que pueden causar daños o perjuicios a los particulares, sin que la solución antes descrita, sea suficiente para suplir dicha falla.

Es decir, si como juristas proyectamos un caso en que los medios electrónicos fallen, y como ciudadanos, depositamos toda nuestra confianza en un escrito, petición o documento, que pretenda hacer valer nuestro derecho de defensa, y no lo podemos hacer. Podríamos estar en una violación de la confianza legítima<sup>109</sup> depositada en la administración en tanto se configuran daños y perjuicios, en los que si no se declara responsabilidad, estaríamos en una situación en que, como lo dice el doctor Diego Younes: “si quien ocasionara los daños no fuera obligado a resarcirlos. Sería este el estímulo a las conductas nocivas, negligentes o riesgosas”<sup>110</sup>. Desde nuestra perspectiva se hace necesario conforma al artículo 64 del

---

<sup>108</sup> Ibídem.

<sup>109</sup> Sobre el particular, en sentencia de la sección segunda del de Consejo de Estado, se configuró una violación al principio de confianza legítima, cuando el Sistema de gestión judicial siglo XXI no registró información, lo cual repercutió en una violación al debido proceso. Ver: CONSEJO DE ESTADO, Sección segunda, 24 de abril de 2014 M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 25000-23-41-000-2014-00044-01(AC).

<sup>110</sup> YOUNES MORENO, Diego, Curso de derecho administrativo, 7 edición, Bogotá, ed. Temis, 2004, p. 254.

CPACA, definir en los estándares y protocolos que deberán cumplir las autoridades para incorporar la aplicación de medios electrónicos en los procedimientos administrativos.

**Transparencia.** Este principio contempla el conocimiento que puede tener toda persona de conocer las actuaciones de la administración por ser de dominio público, salvo reserva legal<sup>111</sup>. La utilización de los medios electrónicos son herramientas para la consecución del conocimiento de las actuaciones administrativas por parte de los administrados.

**Publicidad.** Este principio se cumple mediante comunicaciones, notificaciones y publicaciones según la naturaleza del acto. Además se contempla el uso de tecnologías para divulgar de forma masiva tal información<sup>112</sup>. Es oportuno señalar que aparte de lo dicho, resulta muy importante publicar las instrucciones para el manejo de los medios electrónicos, cuando la autoridad los ponga a disposición de los usuarios, pues resultaría paradójico que las personas se tengan que acercar de manera presencial a la autoridad, para conocer la manera de comunicarse a la misma de forma virtual<sup>113</sup>. En ese sentido, según la Estrategia de Gobierno en Línea: “*la información mencionada estará dispuesta de forma tal que sea fácil de ubicar y utilizar*”<sup>114</sup> y una importante finalidad de la implementación de las TIC es que los ciudadanos se pueden beneficiar siempre y cuando conozcan y se instruyan en el manejo de las mismas.

**Coordinación.** En virtud de lograr mejores resultados en las decisiones por parte de los diferentes estamentos estatales<sup>115</sup>. Este principio está relacionado con la interoperabilidad de las plataformas que deben utilizar las autoridades que suministran a los administrados para relacionarse con ellas a través de medios electrónicos.

---

<sup>111</sup> YOUNES MORENO, Diego, Curso de derecho administrativo, 9 edición, Bogotá, ed. Temis, 2014, p. 9.

<sup>112</sup> VEGA DE HERRERA, Mariela; SUÁREZ BOHÓRQUEZ, Julián, Derecho Procesal Administrativo, Edición: 4ª, Bogotá, Leyer, 2014, p. 19.

<sup>113</sup> VALERO TORRIJOS, Julián, *Administración pública, ciudadanos y nuevas tecnologías*, En: El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI, Homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, Tomo III, Coordinador: Francisco Sosa Wagner, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, p.2959.

<sup>114</sup> Estrategia Gobierno en Línea 2012 - 2015. Ver: <http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa/files/e5203d1f18ecfc98d25cb0816b455615/minticmanual3.0.pdf>, p. 21.

<sup>115</sup> VEGA DE HERRERA, Mariela; SUÁREZ BOHÓRQUEZ, Julián, Derecho Procesal Administrativo, Edición: 4ª, Bogotá, Leyer, 2014, p. 19.

**Eficacia.** Relativa al cumplimiento de las determinaciones de la administración permite la verificación objetiva de la distribución y producción de bienes y servicios del Estado destinados a la consecución de los fines sociales propuestos por el Estado Social de Derecho. El Documento Conpes 3248 de 20 de octubre de 2003, se direccionó en la definición de una política más una unión de instrumentos que se tornen adecuados en el manejo que se tiene de la información en el sector público, para así, garantizar la transparencia de la gestión. Así mismo, *“esta política confiere sentido a la incorporación y al uso de la tecnología informática en el desarrollo de las operaciones de las entidades estatales, tanto en sus actividades internas como en sus relaciones con otras entidades públicas y privadas, con los ciudadanos y con el sector productivo. El propósito último es facilitar las relaciones del ciudadano con la administración, e incrementar la eficiencia, la transparencia y el desarrollo territorialmente equilibrado del Estado”*<sup>116</sup>.

*“La administración electrónica hace posible una administración mejor y más eficaz, ya que mejora el desarrollo y la aplicación de políticas públicas y ayuda al sector público a enfrentarse a las contradictorias exigencias de ofrecer más y mejores servicios con menos recursos”*<sup>117</sup>.

Un ejemplo de cómo se desarrolla este principio se encuentra en el Decreto 2482 de 2012 que se refiere a la eficiencia administrativa, orientada a racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizando el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. Incluye, entre otros, los temas relacionados con gestión de calidad, eficiencia administrativa y cero papel, racionalización de trámites, modernización institucional, gestión de tecnologías de información y gestión documental<sup>118</sup>.

---

<sup>116</sup> Ibídem, p. 41.

<sup>117</sup> LIIKANEN, Erkki. *La administración electrónica para los servicios públicos europeos del futuro*. Lección inaugural del curso académico 2003-2004, 2003, p.6.

<sup>118</sup> Decreto 2482 de 2012 Artículo 3 sección c Ibídem.

Una problemática que se presenta frente a la notificación electrónica de los actos administrativos, encuentra cabida en que según la norma, se encuentra surtida una vez haya sido abierto dicho correo en la bandeja de entrada<sup>119</sup>. Frente a esta situación, la norma debió ser un tanto más ambiciosa en el sentido de establecer un máximo de días conforme a tal como si se hace en España. Pues no se trata de decir que el acto administrativo pasado de esta fecha se tome como notificado, sino que la notificación por el medio electrónico no ha sido posible de realizar, lo que conllevaría a adoptar otros medios de notificar esta voluntad de la administración. De esta situación se extrae, que si bien es cierto, los medios electrónicos plasmados en la Ley 1437 de 2011 son instrumentos que están destinados a mejorar la eficiencia de la administración, esta omisión normativa puede terminar produciendo efectos contrarios a los fines de la misma, produciendo dilaciones innecesarias en los procedimientos administrativos.

**Economía.** Para el ex consejero de Estado Diego Younes, este principio se basa en que las autoridades deben proceder con austeridad<sup>120</sup>, lo cual permite eficiencia tomando decisiones con la mayor agilidad. *Procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección del derecho de las personas*<sup>121</sup>. Conforme al Expediente Electrónico contemplado en el artículo 59 del CPACA<sup>122</sup>, El profesor Christian Hess citando a doctor Daniel Ferrère, expresa: “*A los efectos normativos, el expediente electrónico pasa a ser indistinguible del expediente en papel, sin que subsista ninguna razón para preferir una forma sobre la otra. Las oficinas públicas podrán optar por una forma u otra en base a sus propias circunstancias, y sin más limitación que su*

---

<sup>119</sup> Ley 1437 de 2011, artículo 56.

<sup>120</sup> YOUNES MORENO, Diego, Curso de Derecho Administrativo, 9 Edición, Temis, Bogotá, 2014, p. 9.

<sup>121</sup> *Ibíd.*

<sup>122</sup> Artículo 59. expediente electrónico. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.

El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado digitalmente por la autoridad, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación cuando se requiera.

La autoridad respectiva conservará copias de seguridad periódicas que cumplan con los requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos, de conformidad con la ley.

*conveniencia*”<sup>123</sup>. Significativo lo afirmado, por razones de la economía procesal. Sea lo uno o lo otro, el servicio debe prestarse, sin detrimento de preferencias o desestimaciones.

**Celeridad.** Este principio según el art. 3 de la Ley 1437 de 2011, habla específicamente del uso de las TIC por parte de las autoridades, las cuales incentivarán el uso de las mismas para que “*los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas*”<sup>124</sup>. Este principio ya se encontraba consagrado en el Decreto 01 de 1984, pero se basaba principalmente en la supresión de trámites innecesarios. Este principio pasó a rango Constitucional de Nuestra Constitución de 1991.

Dicho esto, los medios electrónicos, como elemento novedoso que en su tratamiento busca, como lo señala la profesora Pardo Schlesinger, una modernización del funcionamiento de la administración pública además del procedimiento judicial contencioso administrativo para mejorar la relación con los administrados. Idealizando una aproximación entre las autoridades y los ciudadanos en respuesta al principio de participación democrática<sup>125</sup>.

De la misma manera, esas TIC ofrecen una oportunidad esencial para que con el manejo de internet podamos conseguir los beneficios en el aumento de la eficacia, la transparencia, claridad y el cumplimiento de los fines a los que apunta el Estado. En igual forma, para el acometimiento de estos fines, es el uso del internet el componente que determina el resultado para tales beneficios<sup>126</sup>.

Los medios electrónicos son herramientas tecnológicas, que se brindan específicamente en el proceso contencioso administrativo, que brindarán la oportunidad a los ciudadanos de relacionarse con esta jurisdicción de una manera más cómoda, eficiente y sobre todo acorde a los retos que representan las relaciones entre los usuarios de la Justicia en la época actual.

---

<sup>123</sup> HESS ARAYA, Christian. Hacia el Procedimiento Electrónico Administrativo y Judicial. Ponencia al VII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Lima, Perú; enero del 2000.

<sup>124</sup> LEY 1437 de 2011, artículo 3, numeral 13.

<sup>125</sup> PARDO SCHLESINGER Cristina. Los medios electrónicos en la ley 1437 de 2011, *Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011*, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p. 245.

<sup>126</sup> LAGUADO GIRALDO, Roberto, Actos administrativos por medios electrónicos, en Revista Universitas No. 105, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2003, p. 92.

Recordemos que la Ley 489 hace mención en este asunto cuando reza textualmente: *“La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia”*<sup>127</sup>.

En lo que tienen que ver con el acceso a la información, para nuestra Honorable Corte Constitucional, el acceso a la información como derecho constitucional, se ha convertido en un instrumento para combatir la corrupción y hacer efectivo el principio de legalidad, que se traduce en el acatamiento que hacen los servidores públicos en lo que respecta a las finalidades y procedimiento que en derecho se les impone<sup>128</sup>.

Según la Estrategia de Gobierno en Línea planteada en el Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional de la República de Colombia, el acceso a la información impulsa la transparencia en la gestión pública. De una manera tal, que genera seguridad en la perspectiva que tienen los administrados con su concerniente administración pública<sup>129</sup>.

Para el profesor Isaac Martín Delgado, frente a los desafíos de aplicar las nuevas tecnologías en el derecho administrativo se plantea tanto el reto tecnológico como el jurídico, el primero: *“consiste en crear programas y sistemas que se adecuen a las exigencias constitucionales, legales y, en general, normativas que caracterizan al Derecho administrativo, ámbito en el que van a ser aplicados; el reto jurídico consiste en establecer tales exigencias (adaptar en algunos casos, crear en otros) en el marco de las nuevas tecnologías y en determinar el régimen jurídico de su aplicación.”*<sup>130</sup>.

---

<sup>127</sup> Ley 489 de 1998, artículo 3.

<sup>128</sup> CORTE CONSTITUCIONAL T-511/10 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 18 de junio de 2010.

<sup>129</sup> Estrategia Gobierno en Línea 2012 - 2015. Ver: <http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/e5203d1f18ecfc98d25cb0816b455615/minticmanual3.0.pdf>

<sup>130</sup> DELGADO, Isaac Martín. La gestión electrónica del procedimiento administrativo. *Cuadernos de derecho local*, 2009, no 21, p. 84-101. P.84

Un gran ejemplo del manejo eficiente de las tecnologías de la información en la administración, está en España, en relación con los trámites de las obligaciones fiscales, por medio de la internet, donde se ha facilitado la reciprocidad entre el ciudadano y la administración Tributaria como una forma de reducir la brecha digital<sup>131</sup> que se muestra en la sociedad<sup>132</sup>.

Es pertinente resaltar que La exposición de motivos de la Ley Española 11/2007, de 22 de junio, la cual establece el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, brillantemente hace una verdadera directriz del compromiso de las administraciones para contribuir a una sociedad de la información que este a la altura de la época actual, así: “(...) *Los técnicos y los científicos han puesto en pie los instrumentos de esta sociedad, pero su generalización depende, en buena medida, del impulso que reciba de las Administraciones Públicas. Depende de la confianza y seguridad que genere en los ciudadanos y depende también de los servicios que ofrezca*”<sup>133</sup>.

Los avances en las nuevas tecnologías e implementación de las mismas, son uno de los elementos que los redactores que impulsaron el código de procedimiento y de lo contencioso administrativo, tuvieron en cuenta para ligarlas a la creación de una ley, que este acorde con el tiempo en que vivimos. Hecho significativo, si observamos que el derecho ya no es ni debe seguir siendo una disciplina de conocimiento aislado, pero si intercomunicado con otros saberes.

Tener por equipo todo un menú de servicios informáticos genera ventajas, en torno al mundo de hoy y sus exigencias, al respecto, el profesor Pastor y la profesora Pardo

---

<sup>131</sup> La brecha digital se define como la condición en la que solo un bajo porcentaje de la población ha sido beneficiado de las bondades de la tecnología y solo unos cuantos son los que tienen acceso a toda la gama de servicios que esta ofrece. Ver. SERRANO SANTOYO, Arturo y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Evelio. La brecha digital: mitos y realidades, Universidad Autónoma de Baja California, 2003.

<sup>132</sup> MONTAÑA MERCHÁN Y FÉLIX SERRANO *El impacto de las tecnologías de la información en el servicio público*, 2013. Disponible en: [https://vozyvoto.files.wordpress.com/2013/03/2013\\_09\\_10-el-impacto-de-las-tecnologias-en-el-servicio-publico.pdf](https://vozyvoto.files.wordpress.com/2013/03/2013_09_10-el-impacto-de-las-tecnologias-en-el-servicio-publico.pdf)

<sup>133</sup> Ordenamiento Jurídico Español, Ley 11 de 2007 Boletín oficial del Estado.

Schlesinger<sup>134</sup> coinciden en lo siguiente: *“es un hecho notorio la progresiva incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación a las diferentes actividades sociales y económicas.”*<sup>135</sup>.

El capítulo IV del CPACA, que establece la utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo, es un avance de mucha trascendencia. Por tanto se está regulando y autorizando el empleo de las TIC en esta clase de procedimiento<sup>136</sup>. Dicho de otra manera, los alcances y ventajas de estos instrumentos tecnológicos, resultan de inusitado valor.

Con respecto al uso de estos medios, en la misma ley, la profesora Pardo ha señalado que: *“se enmarca dentro de una serie de principios constitucionales y legales, así como de antecedentes legislativos y de prácticas ya adoptadas dentro de las entidades administrativas, relativos a los usos de los mismos.”*<sup>137</sup>. El significado trascendental de esta afirmación, contribuye a la visión con que se discurre en este trabajo. Pues, la realidad en torno a las ayudas que nos dan los medios electrónicos, están dogmáticamente, sentadas en la Constitución.

En armonía a lo expuesto, el Consejero de Estado William Zambrano Cetina, indica que la Ley 1437 de 2011 contribuye a la modernidad del procedimiento administrativo, facilitando el uso de las nuevas tecnologías como medios electrónicos que usan la administración y los administrados<sup>138</sup>.

---

<sup>134</sup> PARDO SCHLESINGER Cristina. Los medios electrónicos en la ley 1437 de 2011, *Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011*, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p. 245.

<sup>135</sup> PASTOR, José Martín. Bases para el desarrollo del proceso telemático en el proceso civil español. En *Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente: [Coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, 2008]*. Universitat de València, 2008. p. 115-128. P. 1.

<sup>136</sup> VEGA DE HERRERA, Mariela; SUÁREZ BOHÓRQUEZ, Julián. Derecho procesal Administrativo, cuarta edición, Leyer, Bogotá, 2014, p. 91.

<sup>137</sup> PARDO SCHLESINGER, Ibídem.

<sup>138</sup> ZAMBRANO CETINA, William. Fundamentos y objetivos de la reforma del libro primero del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, *Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011*, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p. 68.



## **2.5 De las generalidades del concepto de la Administración electrónica como componente universal y determinante de la conformación de una sede electrónica.**

Como primer medida es importante tener en cuenta que la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico aclara los conceptos de administración electrónica y el de gobierno electrónico, los cuales son asumidos como sinónimos: *“se entienden las expresiones de “Gobierno Electrónico” y de “Administración Electrónica” como sinónimas, ambas consideradas como el uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de las denominaciones establecidas en las legislaciones nacionales.”*<sup>139</sup>.

Para el académico, Martínez Gutiérrez, la administración electrónica está definida como un modelo administrativo que se basa en la aplicación de las TIC en desarrollo de sus actividades dividida en dos dimensiones: la interna, que abarca la aplicación de las TIC en el trabajo administrativo interno y en lo atinente a relaciones interadministrativas. Así mismo, la externa, se refiere a la aplicación de las TIC con el ideal de brindar servicios *“públicos y procedimientos administrativos en sede electrónica a los administrados.”*<sup>140</sup>.

La administración Electrónica se basa en el manejo que se da de manera intensiva a las nuevas TIC, más el conocimiento en favor de mejorar la eficiencia interna, las relaciones interadministrativas y las de la Administración con los ciudadanos<sup>141</sup>. Pone en contexto entonces, una fórmula dual acerca de los usos y fines de lo que denomina el código, medios electrónicos, en el caso de marras, por parte de la administración electrónica o gobierno electrónico en línea.

---

<sup>139</sup> Carta Iberoamérica de Gobierno Electrónico.

<sup>140</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, *Administración electrónica: origen, definición institucional y contexto actual*, en Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, Número 14. 2007.

<sup>141</sup> CERRILLO MARTÍNEZ, Agustí. E-información: hacia una nueva regulación del acceso a la información. disponible en: <http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/cerrillo.pdf>

Del mismo modo, para el comisario Europeo Erkki Liikanen, la definición de administración electrónica se basa en que no hay que centrarse en las TIC, sino en la utilización de estas tecnologías junto con los cambios organizativos, los más novedosos métodos para optimizar los servicios públicos, sumado a los procesos democráticos y las políticas públicas<sup>142</sup>. Déjese ver, entonces, los diferentes alcances de éstos en las instituciones de gobierno.

Según el profesor Rincón Cárdenas, este tipo de administración está sustentado en la seguridad, la cual es suministrada por infraestructuras técnicas y la validez jurídica, que es impulsada por un desarrollo normativo paralelo. Habida cuenta que los principales beneficios son un recorte de gastos, agilidad en la tramitación, ahorro de espacio y un procedimiento seguro<sup>143</sup>.

En el ámbito local, según estadísticas del DANE, muestra a Colombia, en un ascenso en materia de tecnología y sus usos en el sector público: *“En el año 2010 Colombia ocupó el primer puesto en Latinoamérica registrando el mejor índice de gobierno electrónico y a nivel mundial obtuvo el puesto 31, para el año 2012 bajo al segundo puesto en Latinoamérica y al 43 en el mundo. Con respecto al índice de participación electrónica Colombia se mantuvo en el primer puesto del 2010 al 2012 a nivel Latinoamérica y paso del puesto 26 en el 2010 al puesto 6 en el mundo en el 2012. De igual forma Colombia se destaca en el primer puesto entre el 2010 y 2012 en el subíndice de servicios en línea a nivel Latinoamérica y el puesto 10 en el 2012 a nivel mundial”*<sup>144</sup>.

En relación al valor de la administración electrónica, el Registrador Nacional y académico Carlos Ariel Sánchez Torres establece que: *“no reside en el traslado de los servicios que presta la administración electrónica, sino que debe responder a la optimización y*

---

<sup>142</sup> LIIKANEN, Erkki. *La administración electrónica para los servicios públicos europeos del futuro*. Lección inaugural del curso académico 2003-2004, 2003, p.1.

<sup>143</sup> RINCÓN CÁRDENAS, Erick. *Marco regulatorio de la administración pública electrónica* en Administración pública electrónica y certificación digital al interior de trámites notariales, p. 12, disponible en: [http://colombiadigital.net/publicaciones\\_ccd/publicaciones/administracion\\_publica\\_electronica.pdf](http://colombiadigital.net/publicaciones_ccd/publicaciones/administracion_publica_electronica.pdf)

<sup>144</sup> Comportamiento del Sector TIC en Colombia, basada en la Encuesta Anual de Servicios del DANE disponible en: <http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-8917.html>

*reorganización de los esquemas del servicio público, de tal forma que permitan una mayor eficiencia y eficacia en las relaciones con los ciudadanos y empresas, así como propiciar el cambio cultural que exige la implantación de la sociedad de la información.*”<sup>145</sup>. La visión del citado registrador, está orientada a la organización y, por ende, a la optimización de procesos, la eficiencia y eficacia. Es decir, anota mejoras al quehacer de la administración estatal, con la implementación de los medios electrónicos.

Para el Consejero de Estado Enrique José Arboleda, el capítulo que hace referencia a los medios electrónicos en la Ley 1437 de 2011 está contenido por normas: *“que ordenan a las autoridades la utilización de los mecanismos electrónicos e informáticos en las actuaciones administrativas, pues está a la vista la eficiencia, el ahorro de tiempo y en veces una mayor seguridad de estos medios en comparación con el documento escrito*”<sup>146</sup>.

En palabras del exministro de las TIC del Estado Colombiano, Diego Molano, el Estado colombiano ha ocupado en los últimos años posiciones de liderazgo en materia de gobernabilidad electrónica en Latino América y se encuentra en el ranking mundial de participación electrónica dentro de los 20 primeros<sup>147</sup>.

## **2.6 La sede electrónica como puerta de entrada a la administración pública y de justicia administrativa, conforme a la adaptación de las autoridades a las tecnologías de la información.**

Al revisar el artículo concerniente a esta novedosa figura, en nuestro ordenamiento no se encuentra estrictamente definida, Sin embargo nos entrega algunas características para construir una definición, como la que podemos encontrar en el portal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual define la sede electrónica como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de TIC, cuya titularidad, gestión y

---

<sup>145</sup> SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel *Acto Administrativo Teoría general*, Bogotá, Legis, 2004, p. 278.

<sup>146</sup> ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José. *Comentarios al nuevo Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo*, segunda edición, Bogotá, Legis, 2012 p. 98.

<sup>147</sup> III Reunión Ministerial y VIII Reunión de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe - Red GEALC Cartagena de Indias 3 de diciembre de 2014.

administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias<sup>148</sup>.

Es de interés señalar, que la sede electrónica está definida por el ordenamiento español, de donde viene esta figura, como: *“La dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, responsabilidad, gestión y administración, corresponde a la Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias”*<sup>149</sup>. Definición que nos orienta a entender el concepto de gestión al que se someten las entidades que cuentan con una sede electrónica. Ahora bien, es bueno tener en cuenta la importancia de interpretar esta institución de una manera más dinámica en las relaciones con los administrados, pues más que ser un dirección electrónica, es una plataforma, que ofrece servicios y se entablan procedimientos administrativos<sup>150</sup>.

Asimismo, la academia española define esta sede de la siguiente manera, en voz del profesor Guillén Caramés: *“no es más que una prolongación de naturaleza virtual de las tradicionales oficinas administrativas de atención a los ciudadanos, servida por personal administrativo y a las cuales pueden dirigirse presencialmente, o a través de otros medios, los ciudadanos para solicitar cualquier tipo de información o realizar cualquier gestión administrativa”*<sup>151</sup>. La afirmación anterior, no es otra cosa más, que el aprovechamiento de los medios electrónicos en el espacio público. Pues, la optimización de procesos, mediante la implementación de herramientas poderosas, ha de redundar en mejores resultados y con la celeridad respectiva que demanda la ley. Por ello se hace inaceptable, que cierto renglón de profesionales del derecho como de servidores públicos, se opongan a esta realidad venida de la modernidad.

---

<sup>148</sup> Definición sede electrónica en portal de preguntas frecuentes del portal del Ministerio de Hacienda Ver: [https://sedeelectronica.minhacienda.gov.co/SedeElectronica/download/files/PortalCiudadania\\_FAQ.pdf](https://sedeelectronica.minhacienda.gov.co/SedeElectronica/download/files/PortalCiudadania_FAQ.pdf)

<sup>149</sup> Reino de España Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en el título segundo, Régimen jurídico de la administración electrónica capítulo I artículo 10.

<sup>150</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén. Instrumentos para el acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica. *Derecho, Gobernanza y Tecnologías de la Información en la Sociedad del Conocimiento*, *Prensas Universitarias de Zaragoza–LEFIS, Zaragoza*, 2009, p. 193- 220

<sup>151</sup> GUILLÉN CARAMÉS, Javier, La administración electrónica ¿Mito o realidad para los ciudadanos del siglo XXI? p. 60.

Esta figura novedosa se destaca: en la correlación entre ciudadanos y las Administraciones públicas utilizando medios electrónicos, conformada como puerta de entrada a las Administraciones públicas, lo cual lo convierte en un portal web que sirve de plataforma<sup>152</sup> en el ofrecimiento de información que divulgan y ponen a disposición sumado a los servicios que se proporcionan a través de estos medios<sup>153</sup>. Además se debe caracterizar por ser permanente y continuamente accesible para los administrados en cabeza de la entidad que ejerza su gestión y administración<sup>154</sup>.

En esa misma línea, para el profesor Martínez Gutiérrez, en cuanto a la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos en España, considera, la “sede electrónica” como: *“aquella dirección electrónica” que procede a equiparar incorrectamente la puerta de acceso a la sede con la propia sede. Es más, en la práctica, una “sede electrónica” suele tener más de una “dirección electrónica” o puerta de acceso, es decir, que varias direcciones “distintas fijadas en la barra de búsqueda del navegador de Internet nos pueden dar acceso a una única “sede electrónica”*<sup>155</sup>

Visto lo anterior, la sede electrónica puede, erróneamente, ser entendida como un lugar físico, en el sentido tradicional, por lo cual se ha equiparado a un lugar que tiene una dirección única. Y, en el mundo de las tecnologías informáticas, la forma de acceder a un punto sea *x* o *y*, puede darse por diferentes vías o direcciones. Es un punto que debe ser más bien, definido por los expertos en sistemas e informática que por juristas.

---

<sup>152</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén. Instrumentos para el acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica. *Derecho, Gobernanza y Tecnologías de la Información en la Sociedad del Conocimiento*, Prensas Universitarias de Zaragoza–LEFIS, Zaragoza, 2009, p. 193- 220

<sup>153</sup> CERRILLO MARTÍNEZ, Agustí. La difusión de información pública a través de medios electrónicos: claroscuros de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En: *Administración electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en España*, 2010.

<sup>154</sup> JINESTA, Ernesto. Administraciones Públicas electrónicas: Retos y desafíos para su regulación en Iberoamérica. *Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo*. Venezuela, Universidad Andrés Bello. *Recuperado el*, 2009, vol. 12.

<sup>155</sup> *Ibidem*.

Desde la perspectiva del autor y conforme a lo expresado previamente, la sede electrónica no es diferente de la sede administrativa tradicional, en cuanto a su razón de ser. Es decir, cumple con los fines del concepto. Pues, la primera es una evolución de la segunda, por los cambios que demanda una sociedad de constantes transformaciones, dado el desarrollo en diferentes disciplinas. Y más que una dirección electrónica única, se define como una oficina virtual o portal web que las autoridades ponen al servicio del ciudadano, a las que se puede acceder desde cualquier parte sin perjuicio que se pueda acceder a la misma con dos direcciones diferentes.

En el ámbito local, con la sede electrónica se busca garantizar el acceso de los ciudadanos a la información con los parámetros de Calidad, seguridad, disponibilidad y accesibilidad.<sup>156</sup> En busca de espacios de interacción, datos abiertos y gestión en observancia en las reservas constitucionales y de ley<sup>157</sup>.

De conformidad con lo previsto en la Ley 1437 de 2011 las entidades destinatarias de la Directiva presidencial No. 04 denominada Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública se debe permitir la garantía de los usuarios el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, para ello se busca: *“Optimizar y asegurar la existencia de sus respectivas sedes electrónicas en las que se mantenga a disposición de toda persona información completa y actualizada sobre, entre*

---

<sup>156</sup> Ley 1437 de 2011 Artículo 60. *Sede electrónica. Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica.*

*La autoridad respectiva garantizará condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno Nacional.*

*Podrá establecerse una sede electrónica común o compartida por varias autoridades, siempre y cuando se identifique claramente quién es el responsable de garantizar las condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Así mismo, cada autoridad usuaria de la sede compartida será responsable de la integridad, autenticidad y actualización de la información y de los servicios ofrecidos por este medio.*

<sup>157</sup> En la estrategia de Gobierno en línea 2012 - 2015 para el orden nacional disponible en: <http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/e5203d1f18ecfc98d25cb0816b455615/minticmanual3.0.pdf>, p. 21.

*otras, normas relacionadas con sus competencias, funciones de las dependencias, regulaciones, procedimientos, trámites y procedimientos a su cargo, horarios”*<sup>158</sup>.

Para el Consejero de Estado Enrique José Arboleda, la puesta en marcha de las sedes electrónicas tiene dificultades materiales y económicas de muchos lugares del país donde no existan las facilidades de comunicación que logren instaurar de forma inmediata la sede electrónica que exige la Ley<sup>159</sup>. Nótese en esto, las variables que al inicio del trabajo se han mencionado y constituyen esas implicaciones surgidas en la utilización de los medios electrónicos.

De la implementación de la sede electrónica en Colombia, según la catedrática Cristina Pardo, existen prácticas que se habían llevado a cabo, anteriores a la Ley 1437 de 2011, para ilustrar su idea explica: *“Ciertamente, algunas de estas prácticas ya están en uso, como por ejemplo la relativa a las páginas web de todas las entidades, y a los sistemas de comunicación de información en ellas recogidos hoy en día”*<sup>160</sup>. Lo dicho por la profesora Pardo es cierto, pero la gran diferencia existente entre “las prácticas”, que ella llama y la ley en comento, es que el CPACA, regula, en lo referido al derecho administrativo, el uso de los medios electrónicos.

Así, pues, la Ley 1474 de 2011, hace mención al plan de acción de las entidades públicas, las cuales a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión publicando también, el presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.

---

<sup>158</sup>Directiva presidencial No. 04 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública del 3 de abril del 2012

<sup>159</sup> ARBOLEDA PERDOMO Enrique José. Comentarios al nuevo Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. Legis, 2012 p. 107.

<sup>160</sup> PARDO SCHLESINGER Cristina. Los medios electrónicos en la ley 1437 de 2011, *Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011*, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p. 245.

La sede electrónica, entonces, se convierte en una figura que representa aspectos positivos en la relación que se genera y se mejora entre administración y administrados, pues se convierte en un ahorro de tiempo, en tanto, deriva, en evitar esperas y desplazamientos innecesarios, realizando así los trámites pertinentes desde la comodidad de la casa, el trabajo, evitando incómodos desplazamientos, e imprevistos que se presentan generalmente a última hora.

En ese orden de ideas, según el CPACA se hace necesario hablar sobre las garantías que deben suministrar las autoridades así:

**Seguridad:** Es una cualidad de algo seguro, el cual debe tener características de firmeza, constancia y sin peligro de faltar o fallar, es de gran importancia, pues, su correcto manejo se ve reflejado en la generación de certeza y confianza en los usuarios de la sede electrónica. Adicionalmente, es un punto sobre el cual gira el éxito o no de la implementación de los medios electrónicos.

**Disponibilidad:** Es la característica que se define en el contexto de una información que tiene que estar lista para usarse o utilizarse. Según el programa de Gobierno en Línea, se conoce como la: *“Propiedad de que la información y sus recursos relacionados deben estar disponibles y utilizables cuando se los requiera.”*<sup>161</sup>. De la misma manera podemos decir, que la disponibilidad de una página web, independientemente del buen diseño, tiene que ver con el servidor donde se encuentre la misma ubicada. Para ello resulta ser necesarios, una infraestructura que se conecte a internet y un servidor que se encuentre trabajando en forma permanente.

**Accesibilidad:** Se debe tener un acceso por todos los usuarios de la sede electrónica, pues se convierte en objetivo, conseguir que estos portales web lleguen a un mayor

---

<sup>161</sup> Definición de disponibilidad en el glosario de términos del programa Gobierno en línea disponible en: <http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7742.html>



conglomerado<sup>162</sup>, sin perjuicio de las características del dispositivo con el que se busca acceder a estas páginas web, ni de los conocimientos informáticos que tengan los mismos.

Para el programa de Gobierno en línea el termino de accesibilidad se define como el *“Acceso universal a la Web, independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios (W3C World Wide Web Consortium). En el contexto colombiano, ha venido asumiéndose como las condiciones que se incorporan en sitios y herramientas web que favorecen el que usuarios en condiciones de deficiencia tecnológica, física o sensorial o en condiciones particulares de entornos difíciles o no apropiados, puedan hacer uso de estos recursos de la Web”*<sup>163</sup>.

Para el profesor Jinesta, la accesibilidad es un principio que *“se logra a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos los soporte, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran”*<sup>164</sup>.

**Neutralidad:** Este principio, según el Consejero de Estado Zambrano Cetina, es el establecimiento de la regulación para evitar que sus preceptos terminen siendo superados muy rápidamente con los incesantes avances tecnológicos que en este campo se producen.<sup>165</sup> Para Oscar Ibáñez Parra y Erick Rincón Cárdenas el principio de neutralidad

---

<sup>162</sup> Para el maestro Erick Rincón Cárdenas, a pesar de que las entidades públicas quieren conseguir una administración electrónica, preocupa la ausencia de sedes electrónicas en buena parte de las mismas, donde su implementación ha sido una excepción. Ver: <http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Memoriales/la-simplificacion-y-racionalizacion-de-tramites-a-traves-de-medios-electronicos.asp?Miga=1>

<sup>163</sup> Definición de accesibilidad en el glosario de términos del programa Gobierno en línea disponible en: <http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7742.html>

<sup>164</sup> JINESTA, Ernesto, Administraciones Públicas electrónicas: Retos y desafíos para su regulación en Iberoamérica. *Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo*. Venezuela, Universidad Andrés Bello. Recuperado el, 2009, vol. 12. p. 14.

<sup>165</sup> ZAMBRANO CETINA, William, Fundamentos y objetivos de la reforma del libro primero del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, *Memorias, Seminario Internacional de*

se desarrolla para que la legislación sea coherente conforme al desarrollo constante de las nuevas tecnologías.<sup>166</sup>. Teniendo en cuenta una interpretación realista que permita que se desarrolle acorde a los hechos y las situaciones en concreto, de modo que la legislación esté acorde con el constante desarrollo de las nuevas tecnologías.

**Interoperabilidad:** Según Guillen Caramés, la interoperabilidad se define como “*la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos*”<sup>167</sup>

Para el programa de Gobierno en línea el termino de accesibilidad se define como la: “*Habilidad de transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y sistemas de información. (Gobierno de Australia). Habilidad de dos o más sistemas (computadoras, medios de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la información) de interactuar y de intercambiar datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener los resultados esperados. (ISO). El ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades. (Marco de Interoperabilidad para el Gobierno en línea, Versión 2010)*”<sup>168</sup>.

En relación a implementación de la interoperabilidad de la información, de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno Nacional, se abre la posibilidad de beneficiar a los ciudadanos para que cuando existan datos e información que esté almacenados en alguna entidad pública, no sea necesario por otra entidad estatal pedir los mismos datos, pues en este evento la misma Administración Pública ya cuenta con dichos datos. Todo esto

---

*Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p. 73.*

<sup>166</sup> IBAÑEZ PARRA, Oscar; RINCÓN CARDENAS, Erick. El acto administrativo electrónico y las nuevas tecnologías de la información, p.5.

<sup>167</sup> CARAMÉS, Javier Guillén. *La administración electrónica: ¿mito o realidad para los ciudadanos del siglo XXI?* Centro PwC & IE del Sector Público, 2010. P 69

<sup>168</sup> Definición de interoperabilidad en el glosario de términos del programa Gobierno en línea disponible en: <http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7742.html>

fundamentado en la interoperabilidad de la que habla el art. 60 de la ley 1437 de 2011, que también darán cabida a nuevos servicios informáticos a través de la web para la coordinación entre entidades de la Administración.

Para generar mayor fiabilidad y confianza en la utilización de la sede electrónica como uno de las innovaciones introducidas en el capítulo IV del CPACA, es pertinente que se establezcan unos estándares únicos para que las sedes electrónicas tengan los mismos elementos, organización, la misma forma de identificarse, ficheros, etc. Pues, la idea es atraer a la ciudadanía a utilizar los medios electrónicos que brinda la administración, de la misma manera que lo hacen con su buscador de confianza o visitando sus redes sociales favoritas.

Para esto, sería adecuado que las empresas contratadas para crear y montar las sedes electrónicas que contempla la Ley 1437 de 2011, sigan patrones uniformes en la programación de las mismas, para que no sea de importancia cual sistema operativo se utiliza en el caso de computadores de escritorio o dispositivos móviles<sup>169</sup> o cual tipo de navegador se emplea<sup>170</sup>.

Si realmente, queremos aprovechar haciendo fructuoso o sacándole el máximo rendimiento a la tecnología en la administración pública, con una sede electrónica que sea ágil y de acceso masivo, el Gobierno Nacional debe encauzar esfuerzos en la creación de aplicaciones compatibles con los dispositivos móviles como smartphones y tablets. Pues, la utilización de los dispositivos móviles ha crecido y evolucionado tecnológicamente en estos últimos 5 años tan rápidamente, que de nada sirve idealizar normas con carácter tecnológico, si en la práctica se convierten en herramientas obsoletas de poco uso y gran inversión monetaria, que a la larga se alejará del principio de eficiencia a que toda administración pública está sujeta.

---

<sup>169</sup> Los más comunes en computadores de escritorio son el Windows de Microsoft, el de iOS de Apple, o Linux.

<sup>170</sup> Algunos ejemplos de ellos son: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer (o Edge en su remplazo), Safari, etc.

Entonces, surge la necesidad de utilizar herramientas<sup>171</sup> que desarrollen los principios de las sedes electrónicas. Por ejemplo, crear aplicaciones en los principales sistemas operativos móviles<sup>172</sup>, de fácil manejo que ofrezcan similares características contempladas en las sedes electrónicas. En nuestra posición, así no sea posible crear apps<sup>173</sup> como sedes electrónicas, por lo menos se podrían crear apps que enseñen el correcto manejo de las sedes electrónica brindando información clara sobre su correcto uso y su pleno aprovechamiento, ya sea que operen individualmente como entidad, o varias entidades utilizando una misma sede electrónica, como lo contempla la norma sustancial y procedimental administrativa actual.

En ese orden de ideas, según el informe presentado por el Ministerio TIC, en el último semestre del año 2014, el total de líneas móviles fueron 53.583.664, superando así el número de habitantes de nuestro País, el cual está estimado en 48.000.000 de personas. Esto nos indica que es un valor a tener en cuenta, debido al creciente número de usuarios de la telefonía móvil con el servicio de datos, el cual es la puerta de entrada a aplicaciones de uso generalizado que hoy en día un gran porcentaje de campos del conocimiento.

## **2.7 Derecho de los ciudadanos a la utilización de los medios electrónicos determinados en la Ley 1437 de 2011 en virtud del principio de igualdad.**

El artículo 54 de CPACA<sup>174</sup>, consagra en lo referente al registro para el uso de los medios electrónicos, que los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través

---

<sup>171</sup> Sobre la sede judicial electrónica, en España se plantean herramientas por parte del Ministerio de Justicia como la denominada: "*la Justicia móvil*", la cual se utilizará para introducir el uso de mensajes de texto (SMS), en la que se puede avisar a las personas inmersas en un proceso judicial de la fecha en que se ha fijado su juicio o de su posible suspensión. Disponible en: <http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2015/03/18/5509c250ca474184188b4575.html>

<sup>172</sup> Los sistemas operativos para dispositivos móviles más conocidos en la actualidad son: Android, iOS y Windows.

<sup>173</sup> Son aplicaciones que se suelen utilizar para smartphones o tablets, que se descargan de tiendas virtuales y en algunos casos es necesario una conexión a internet para que funcionen.

<sup>174</sup> ARTÍCULO 53. Procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos. los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos. En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen.

de medios electrónicos. Desde nuestra posición estamos apuntando a que toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, es decir, más que examinar el derecho de relacionarse con las autoridades, desde un limitado uso de los medios electrónicos mediante un registro con las mismas, es, a nuestro modo de ver, conveniente darle relevancia al concepto del derecho a acceder al uso de medios electrónicos frente a las autoridades.

Pues, el legislador, está impulsando intrínsecamente la adopción de medidas que permitan a las autoridades satisfacer las necesidades de los usuarios, buscando cumplir con el mandamiento legal, lo cual deriva en la adopción de instrumentos y cobertura muy amplia en infraestructura, que permita que la administración a parte de dotarse *de los medios y sistemas electrónicos necesarios para que este derecho, pueda materializarse de forma efectiva*”<sup>175</sup>, como lo pide la norma.

Cabe anotar que la Constitución Nacional, en su artículo 13, contempla el principio de la igualdad, el cual goza de carácter fundamental<sup>176</sup>. De la misma forma, la Ley 1341 de 2009, en concordancia con la Norma de normas en sus artículos 20 y 67, se menciona que el Estado propiciará a todo Colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, garantizando programas para que la población de los franjas menos favorecidos y la población rural tengan acceso a esas mencionadas tecnologías.

Para el académico Jaime Orlando Santofimio Gamboa: *“este mandato en procura de respetar los derechos constitucionales de los usuarios puede resultar costoso para las*

---

<sup>175</sup> GUILLÉN CARAMÉS Javier La administración electrónica ¿Mito o realidad para los ciudadanos del siglo XXI? p. 36.

<sup>176</sup> Constitución Política de Colombia 1991, artículo 13: *“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.*

*El Estado promoverá las condiciones para que la desigualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.*

*El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.*

*entidades públicas*”<sup>177</sup>. Esta posición es muy cierta, sin embargo este tipo de actuaciones también está en armonía con los principios de economía y eficacia, lo cual implica de manera directa, en el ahorro por la disminución del uso del papel, tintas y tiempo en atención a usuarios personalmente.

Pero la Ley, nos permite una interpretación, en cuanto a las personas que no cuentan con los equipos necesarios para relacionarse con la administración, a través de mensajes de datos, quienes estarían en desventaja con las personas que poseen los insumos necesarios, con los que pueden actuar frente a la administración, haciendo uso del derecho a relacionarse con la misma: “*Lo que hace imposible que exista realmente la interacción que se espera a través de los procedimientos administrativos electrónicos*”<sup>178</sup>. En virtud del principio de igualdad, consagrado en la carta iberoamericana de gobierno electrónico, la utilización de los medios electrónicos no puede representar restricciones ni discriminaciones.<sup>179</sup>

En ese sentido, nos adherimos a los conceptos del doctor Arboleda Perdomo, quien argumenta la obligación por parte del Estado, del acceso igualitario para todas las personas, lo que significa, que personas analfabetas o personas deficientes en conocimientos de medios informáticos, tienen cabida en ese acceso a la administración por medios electrónicos, pues de no hacerlo sería discriminatorio<sup>180</sup>. Habida cuenta, que la discriminación en palabras de la Honorable Corte Constitucional, se define como arbitraria, no justificable, ni razonable<sup>181</sup>, Es decir, las autoridades deben impedir un tratamiento desigual frente a sus asociados<sup>182</sup>.

---

<sup>177</sup> SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, *Procedimientos administrativos y tecnología*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011, p.205- 206.

<sup>178</sup> *Ibíd*em, p. 206.

<sup>179</sup> Carta Iberoamericana de gobierno electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Pucón, Chile, 31 de mayo y 1° de junio de 2007.

<sup>180</sup> ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José, *Comentarios al nuevo Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo*, segunda edición, Bogotá, Legis, 2012, p. 99.

<sup>181</sup> Corte Constitucional Sentencia T-330 del 12 de agosto de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

<sup>182</sup> SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, *Tratado de derecho administrativo*, 4ta edición, Volumen II, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 83.

Esta igualdad la podemos dilucidar, respaldada en el compromiso de reducir la brecha digital y transformar en oportunidades para todos, el uso de las tecnologías de la información, lo que constituye la inclusión de aquellos que pueden eventualmente quedar rezagadas<sup>183</sup>. Téngase en cuenta, que el derecho de relacionarse con las administraciones públicas, a través de los medios electrónicos no debe ser perpetrar por los administrados, si las administraciones no han tenido el desarrollo ni el despliegue conforme a las necesidades que emanan de derechos que se han reconocido a los mismos ciudadanos<sup>184</sup> y en el no acatamiento de la norma. Éstas, deben hacer valer la ley.

Asegurar mecanismos suficientes de acceso gratuito a los medios electrónicos, representa para el conglomerado social, la instalación de establecimientos físicos para el exclusivo uso de los ciudadanos, a la hora de requerirlo. En este aspecto, se hace necesario, entender, que si bien es cierto no es posible una cobertura total, casa a casa, de manera inicial, se puede desde nuestra perspectiva, validar con la creación, de puntos o establecimientos, donde las personas accedan gratuitamente, y con la colaboración adecuada por parte de los trabajadores de esos establecimientos los cuales también tienen que estar capacitados en el manejo de medios electrónicos y las formas para interactuar mediante aquellos ante la administración.

Para el profesor José Martín Pastor, las Administraciones Públicas poseen una responsabilidad de trabajo y colaboración en procura de lograr: *“efectiva implantación del uso de las herramientas que proporciona la tecnología en la gestión pública, con el objetivo de conseguir que dicha gestión sea más eficaz, eficiente, objetiva y transparente”*<sup>185</sup>. ¿Acaso esto no es parte del cumplimiento de la Constitución y de los fines del estado social de derecho?

---

<sup>183</sup> Carta Iberoamericana de gobierno electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Pucón, Chile, 31 de mayo y 1° de junio de 2007, Preámbulo, p.3.

<sup>184</sup> GUILLÉN CARAMÉS Javier La administración electrónica ¿Mito o realidad para los ciudadanos del siglo XXI?, p. 34.

<sup>185</sup> PASTOR, José Martín. Bases para el desarrollo del proceso telemático en el proceso civil español. En *Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente: [Coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, 2008]*. Universitat de València, 2008. p. 115-128. p. 1.

La realidad muestra que frente a las diferentes problemáticas que asisten a la administración pública, existe la de no generar respuestas a tiempo a las diferentes solicitudes o servicios que requiere el ciudadano. Razones de sobra. La no planificación, por parte del Estado, el no proyecto de nación, la falta de criterios administrativos, la tramitología, entre otros.

Por ello, retomando a Pastor, quien afirma lo siguiente: *“El derecho de acceso electrónico a las Administraciones Públicas es el derecho esencial de esta regulación. Su configuración es ciertamente compleja ya que debe hacerse sin sustituir los medios tradicionales de relación basados, fundamentalmente, en el papel y configurando, por tanto, un sistema adicional que convive con aquél”*<sup>186</sup>. La finalidad de los medios electrónicos, es la de facilitar los procesos, habida cuenta, la efectividad de éstos, por encima de las limitantes humanas o procedimientos rupestres.

Al respecto, Guillén Caramés, alega: *“De este modo se consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para dichas Administraciones.(...) En este sentido, por ejemplo, este derecho se hace efectivo de modo real mediante la imposición, por lo menos dentro del ámbito de la Administración General del Estado, del deber de poner a disposición de los ciudadanos y empresas al menos de un punto de acceso general a través del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, poder acceder a la información y servicios de su competencia; presentar instancias y recursos; realizar el trámite de audiencia cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les envíen las Administraciones”*<sup>187</sup>. Se asume así, el presupuesto constitucional de la confianza en las instituciones del Estado. Relación mutua, que debe verse reflejada en el cuidado mutuo y preservación de las partes.

---

<sup>186</sup> PASTOR, José Martín. Bases para el desarrollo del proceso telemático en el proceso civil español. En *Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente: [Coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, 2008]*. Universitat de València, 2008. p. 115-128, p. 7

<sup>187</sup> GUILLÉN CARAMÉS Javier, La administración electrónica ¿Mito o realidad para los ciudadanos del siglo XXI?, p. 173.



Lo planteado, lleva a reflexionar en torno a la tesis histórica, amañada y acomodaticia, propia de los diferentes gobiernos neoliberales de turno, que lo público es decadente e inservible, que lo mejor para lograr efectividad de servicio, dicho así, es lo privado. Pero privatizando las instituciones y empresas del estado. Casos, por montones, nos asisten en esta argumentación. Téngase por ejemplo, los servicios públicos, el transporte público, la industria misma, etc.

De lo planteado anteriormente, es de interés señalar que sobre este artículo, el Consejero William Zambrano Cetina en las sesiones de debate acerca del CPACA declaró: *“aquí se establece como principio o como regla central que la utilización de los medios electrónicos no puede ser exigible universalmente en la medida en que los usuarios estén en posibilidad de utilizar esos medios electrónicos y acepten voluntariamente utilizarlos como su medio para relacionarse con la administración”*<sup>188</sup>. Frente a esta posición, es muy acertado el concepto de no universalidad, pues el tema se torna más como una actuación de carácter voluntario en el que todas las personas no tengan el interés de utilizar medios electrónicos para relacionarse con la administración, para seguirlo haciendo de la manera tradicional presencial.

Sin embargo, frente al acceso por parte de los que “estén en posibilidad de utilizar estos medios”, es una de las cuestiones que debe ser diferenciada, en virtud de la garantía que se propende por la igualdad a relacionarse a la administración a través de medios electrónicos. Verbigracia que exista la voluntad para hacerlo, en lugares donde no exista la infraestructura para poder acceder a este derecho. Pues como bien lo plantearon los consejeros de Estado en esas sesiones de debate acerca del CPACA: *“la utilización de medios electrónicos no puede significar discriminación o vulneración del principio de igualdad de acceso a la administración”*<sup>189</sup>

---

<sup>188</sup> Memorias de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo Volumen III, La Ley y los debates de la comisión de la reforma parte A artículos 1 a 142. Min Justicia y Consejo de Estado, Sala de Consulta y servicio Civil. P. 246-247

<sup>189</sup> Ibídem, 245.

En armonía con lo antes argumentado, es de capital importancia construir una relación de confianza por parte del Estado y sus asociados, a través del uso de los medios electrónicos y, esta toma cuerpo, cuando se generan las condiciones necesarias para ello. Para Javier Alberto Chaparro, Decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito de Bogotá, en relación a la implementación de una infraestructura de conectividad, señala “*cuando aquellas apartadas regiones tengan el acceso a todos los servicios y puedan recibir los beneficios que estos desarrollos tecnológicos nos permiten.*”<sup>190</sup>. Recordemos que la revolución del internet, proporciona el acceso masivo a la información, de una manera rápida y de bajo costo denominando a internet como el medio más democrático<sup>191</sup>.

Es interesante mencionar, que si bien es cierto, la labor del Ministerio de las TIC en conectar el mayor número de municipios del País ha sido un éxito, soportado en la contratación de una red de fibra óptica que atraviesa el país con el fin de conectar al mayor número de estos territorios, se han conectado casi el 100% de los mismos, tenemos que diferenciar entre: proporcionar un punto de acceso a internet en algún lugar del territorio por medio de fibra óptica como los puntos vive digital<sup>192</sup> a que la población de la mayor parte del territorio esté conectada, cosa que es muy diferente.

Según las cifras del Boletín trimestral que nos proporciona el mismo Ministerio de las Tic, en el año 2015, el número de conexiones totales a Internet en Colombia, al finalizar el primer trimestre de 2015 se llegó a 10.724.372 conexiones.<sup>193</sup> En un País con una población total de estimada para el año 2015 de 48.202.617 de personas<sup>194</sup>, de las cuales la mitad de

---

<sup>190</sup> CHAPARRO PRECIADO, Javier Alberto. *Las Tic, una prioridad para el Mintic Y Colombia* disponible en: <http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/las-tic-una-prioridad-para-el-mintic-y-colombia/>

<sup>191</sup> Derecho a la información, hábeas data e internet. Dirigido por Juan F. Armagnague, coordinado por María G. Ábalos y Olga P. Arrabal de Canals, Ediciones La Roca, 1° edición Buenos Aires, 2002, p. 31.

<sup>192</sup> Para el periodista y filósofo de la Universidad del Rosario José Luis Peñarredonda se conciben como una especie de café internet público y abierto a la población, en el que unos pocos equipos deben bastar para decenas o cientos de personas. Disponible: <http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/la-gran-deuda-que-dejo-diego-molano-vega/>

<sup>193</sup> Boletín trimestral de las TIC - Cifras primer trimestre de 2015, Ministerio de las TIC, disponible en: <http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-11128.html>

<sup>194</sup> Proyecciones de poblaciones DANE disponible en: [http://web.archive.org/web/20130505041736/http://www.dane.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=72](http://web.archive.org/web/20130505041736/http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72)

las casas tienen acceso a internet. Ahondado al bajo porcentaje de personas que tienen conexión a internet en las zonas rurales del País.

Sin embargo, resulta esperanzador el mensaje pronunciado por el Presidente de la Republica en una jornada de evaluación de los logros y metas en el sector de las TIC en el Departamento de Caldas, cuando aseveró que: “*el compromiso es llegar en 2018 a 27 millones de conexiones de internet para la gente, es decir, más de 13 veces lo que había en 2010*”<sup>195</sup>. Para la premisa anterior es de anotar el compromiso institucional en relación a los medios electrónicos y su implementación son coherentes con en el plan nacional de desarrollo 2014-2018.

Según el informe de la información global tecnológica del año 2013, mejorar la conectividad de América Latina y el Caribe continúa representando uno de los principales desafíos de la región, a pesar de los recientes esfuerzos de nuestro País para desarrollar y actualizar sus infraestructuras de las TIC. Se ha hecho un progreso significativo en desarrollar y garantizar más y mejor acceso a la infraestructura de las TIC<sup>196</sup>.

Finalmente, sin perjuicio de lo mentado en el artículo 64<sup>197</sup>, sobre los estándares y protocolos y su aplicación gradual por parte de las autoridades, cabe considerar, el evento cuando los administrados tengan la manera de relacionarse con la administración, mediante conexiones a la red, soportada en la infraestructura, que ha creciendo exponencialmente, en estos últimos años en el país, en virtud del derecho a la igualdad que se ha analizado y, teniendo toda la voluntad de realizar los procedimientos y trámites administrativos por medios electrónicos, precisamente, por esa demanda de utilizar las tecnologías de la información para acceder a toda clase de contenidos, incluido, claro está, el de Gobierno electrónico, se encuentren, que al intentar hacer este tipo de acciones, la autoridad con la

---

<sup>195</sup> Noticia tomada del portal: <http://www.portafolio.co/negocios/2018-toda-colombia-estara-conectada-internet>

<sup>196</sup> BILBAO-OSORIO, Beñat; DUTTA, Soumitra; LANVIN, Bruno. The global information technology report 2013, 2013.

<sup>197</sup> Artículo 64. estándares y protocolos. Sin perjuicio de la vigencia dispuesta en este Código en relación con las anteriores disposiciones, el Gobierno Nacional establecerá los estándares y protocolos que deberán cumplir las autoridades para incorporar en forma gradual la aplicación de medios electrónicos en los procedimientos administrativos.

que quieren ejercer su derecho, no cuenta aún con la infraestructura o tecnología necesaria para cumplir con la norma, hecho que representa una frustración manifiesta de una realidad que no se compagina con la norma y demás disposiciones de ley.

Así las cosas, si se logra reducir la brecha digital<sup>198</sup>, que a nuestro modo de ver es lo que representa más dificultad, y con la tecnología que existe hoy en día, la incorporación de estos protocolos y estándares deben tener prioridad por parte del Gobierno Nacional en coherencia con los demás objetivos que ha cumplido y piensa seguir desarrollando en concordancia con el Plan nacional de desarrollo, en su contenido tecnológico.

### **Conclusiones de capítulo.**

El uso de las TIC, por parte de las autoridades son una expresión concreta de la globalización, en virtud de su utilización en otras latitudes, que nace de la necesidad que surge en los ciudadanos de relacionarse con la Administración Pública a través de herramientas más eficientes. Esta tendencia global conduce a la adaptación de modelos que se han implementado con éxito en otros Estados, sin que dicha acción, se extraiga el fenómeno de mimetismo en estos medios electrónicos, que si bien es cierto no se enmarcan dentro de un marco de originalidad, si son necesarios para adecuarlos en la administración pública y de justicia para mejorar las funciones y fines del Estado.

Los medios electrónicos establecidos en el CPACA tienen que estar acorde a los principios determinados en el artículo 3 de la misma Ley y soportados en los principios de la Carta Iberoamericana de Gobierno electrónico.

La sede electrónica, más que una dirección a la que se puede acceder a través de Internet, se convierte en una oficina virtual de las autoridades, donde se puedan realizar los mismos trámites que se pueden llevar a cabo presencialmente dentro de las instalaciones físicas de

---

<sup>198</sup> Entendida y analizada también, como brecha tecnológica, ver RINCÓN CARDENAS, Erick, Manual de Derecho Electrónico y de Internet. Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, p.313.

la autoridad. Lo cual determina la necesidad de no confundir esta importante herramienta, con una página web, en la que se enuncie una mera información de la autoridad sin ningún tipo de interacción.

Del artículo que determina que los procedimientos y trámites administrativos se pueden llevar a cabo a través de medios electrónicos, subyace la necesidad en consonancia con el principio de igualdad, de mejorar la conectividad real por parte de la población colombiana sin discriminación alguna para acceder a los mismos, con tal fin el Estado debe propender por minimizar la desigualdad que se puede presentar. Esta igualdad no puede concebirse como universal, pues si bien es cierto, algunos sectores de la población, pueden tener acceso a la red para ejercer este derecho, no representa obligatoriedad el llevar a cabo procedimientos administrativos por medios electrónicos,

## **PARTE II VISIÓN CRÍTICA DE LAS EXPECTATIVAS Y RETOS DE LA UTILIZACION DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL ELECTRÓNICO.**

Como viene dicho, los medios electrónicos en Colombia son impostergables. Es decir, su perentoria implementación no da tregua. Se requiere, entonces, de examinar con visión crítica, los diferentes retos y expectativas que en torno a ellos existen, máxime, cuando del haber judicial se trata. Las dinámicas que son inherentes a este nuevo proceso, deben llevar a la nación a una era futurista en el entendido, que, sí es posible tener transformaciones que ponderen el buen hacer del Estado representado en sus distintas instituciones.

Así las cosas, el CPACA, como la brújula que orienta las acciones para el fin arriba indicado, entre otras, debe ser contrastado, en lo que respecta el uso de los medios electrónicos, con las realidades que la sociedad colombiana vive. Esto es, determinar hacia dónde se desea dirigir este país y cuál es el papel de la jurisdicción del contencioso administrativo, en relación con las nuevas tecnologías y las diferentes garantías que se deben prestarse a los asociados.

Pero ¿cuáles son los retos y expectativas que enfrenta la implementación de los medios electrónicos? La respuesta a esto se puede ver en dos grandes grupos, uno referidos a principios y derechos y el otro, a generar las condiciones necesarias para el ejercicio ponderable de ambos grupos. En este sentido tenemos: la confianza, la igualdad, la seguridad, el debido proceso, garantías constitucionales, entre otros. Igualmente, infraestructura, capacitación de los funcionarios, cambio de paradigma en los procesos de formación académica, el medio ambiente, por señalar, son elementos generales necesarios para valorar.

## **CAPITULO I. Componentes básicos para la implementación de los medios electrónicos en el marco de la Ley 1437 de 2011.**

Al inicio de este trabajo se establecieron dimensiones varias que debían ser tenidas en cuenta, en relación a la implementación de las nuevas tecnologías en el proceso administrativo electrónico. Sin embargo, éstas fueron puestas en la perspectiva integral de temáticas como la globalización y el mimetismo, los fundamentos generales de lo que trata el presente estudio. En este aparte del trabajo, se pretende mostrar, las diferentes circunstancias que se conjugan a la hora de dar paso a los nuevos modelos del hacer del Estado, para el caso, los medios electrónicos en el proceso judicial del contencioso administrativo.

### **1.1 De la Seguridad de la información como característica definitiva en el salto tecnológico a los que se enfrenta la administración pública y de justicia frente a sus administrados o usuarios.**

Uno de los principios base para el éxito de la implementación de los medios electrónicos es la seguridad. Entendida en sentido amplio y estricto. Fundamentalmente, en lo referido a este nuevo e ingente mundo de lo informático, la seguridad juega papel preponderante, tanto para el Estado como para sus asociados. En este sentido, la necesidad de seguridad se respalda en valores éticos e infraestructuras tecnológicas capaces de soportar ataques externos como internos.

Al respecto, la profesora, Mònica Vilasau Solana, de la Universitat Oberta de Catalunya, afirma: *Las nuevas tecnologías nos permiten transgredir fronteras nuevas, conocer información que antes era impensable y, sobre todo, relacionar, almacenar, buscar y transmitir esta información. Sin embargo, las señales de alerta se disparan ante los nuevos*

*peligros que dichas tecnologías representan*<sup>199</sup>. Empero, ante esta posición la Honorable Corte Constitucional señala: *los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley*<sup>200</sup>. Valga decir, que si de seguridad se trata, el ejercicio de la costumbre nubla la realidad acerca de éste. Pues, si algo ha sido sensiblemente vulnerado, ha sido el documento físico, en sus diferentes niveles y la administración de justicia, no es la excepción. Los riesgos están puestos en cada paso. Es por ello, que este aspecto es de relevante importancia y de urgente necesidad prever y disminuir el mismo.

Como ya lo hemos reseñado en este trabajo, acerca de los beneficios de la utilización de los medios electrónicos, no podemos dejar de lado el aspecto que preocupa tanto a Gobiernos, Instituciones y a cada ciudadano que las utiliza, el cual se ve representado en la seguridad de los mismos, repercutiendo así, en esos peligros a los que hace referencia la citada académica, como aspecto negativo que ha desencadenado la resistencia desde la parte social a la utilización de los mismos.

Verbo y gracia de lo planteado, algunos años atrás el gobierno de los Estados Unidos a través de su agencia federal FBI, y la CIA se concentraron en combatir el terrorismo que se manifestase mediante ataques físicos. Prueba de ello son los eventos acontecidos el 11 de septiembre de 2001, los cuales buscaron golpear el sector financiero (world trade center), y el sector gubernamental (pentágono). Estos acontecimientos, desencadenaron la reestructuración de estas organizaciones, que en cumplimiento de la Constitución Estadounidense fueron dotadas con mejor infraestructura tecnológica, para defender a los ciudadanos de ese país.

Casos como estos, son algunos ejemplos de la exposición a que están sujetas las páginas web, que destinan millones de dólares en mecanismos de seguridad, pues para el gobierno

---

<sup>199</sup> VILASAU SOLANA, Mònica, Derecho de intimidad y protección de datos personales, Editorial UOC, Barcelona, 2005, 93 -139, p. 93

<sup>200</sup> Sentencia C-662 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz. expediente D-2693



americano, por el mismo avance, de las tecnologías en la cual la sociedad está conectada, se dedican mayores esfuerzos tanto en inversión monetaria, como en capacitación en la defensa, en caso de ciberataques<sup>201</sup>.

Siguiendo situaciones de igual alcance, se conoció recientemente, el caso del ciberataque, realizado por un grupo de hackers, a la página web del Ministerio de Economía del Estado Peruano<sup>202</sup> y ciento de acciones más que no llegamos a saber. Asunto que no puede ser concluyente en cuanto a la implementación de los medios electrónicos. Pues, satanizar el objeto por su uso o abuso no es entender la dinámica en la que se cuecen las acciones humanas. Lo medios electrónicos no son a los que se les deba endilgue responsabilidad por los resultados o situaciones que se presentes, Es la condición humana, la que es responsable de sus usos debidos o no.

Así pues, estamos ante un problemática global que merece todos los esfuerzos, desde diferentes organizaciones, para proteger y garantizar el acceso a las sedes electrónicas, que plantean las administraciones electrónicas. Toda vez, que al no ser Colombia un país, en sentido estricto tecnológico, es decir, no generamos tecnología, se hace necesario, la pronta y urgente inversión y cambio de paradigma, de ser un país aún rupestre, propio del siglo decimonónico y dar ese gran salto al siglo XXI.

De igual forma, salen a la luz eventos como los de Edward Snowden, el exmpleado de la CIA, quien filtrara una serie de documentos sobre programas de espionaje masivo, donde se da cuenta de la utilización indebida de información por parte de Gobiernos en la vigilancia del mismo a sus propios ciudadanos. Paralelamente a lo mencionado, se conoce el caso de Julian Assange, el fundador del portal WikiLeaks, que publica informes clasificados anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público.

---

<sup>201</sup> Un ejemplo específico de esta capacitación, se lleva a cabo en *West Point*, una academia militar del Estado de Nueva York, donde se prepara a los cadetes a combatir tanto amenazas físicas como las originadas por cibercrimen.

<sup>202</sup> El 28 de mayo de 2015, el grupo Anonymous Perú atacó la página web del Ministerio de Economía de ese País, remplazando el contenido normal del sitio web, por material inapropiado para menores de edad. en protesta por una Ley de minería a que permite la explotación a cielo abierto de una mina de cobre en la región de Arequipa.

Con el paso del tiempo, los avances de las tecnologías, y el mayor acceso a las mismas, hacen que el terrorismo no solo se concentra en ataques tradicionales, sino en el cibercrimen, el cual permite atacar las estructuras políticas y económicas a un solo clic de distancia. Hoy en día, algunas organizaciones, reconocidas empresas y un número importante de entidades bancarias han sido blanco de ataques cibernéticos sin dejar huella de su accionar delictivo<sup>203</sup>.

En el ámbito local, la Ley 962 de 2005, la cual contiene unas disposiciones en la administración pública, expone que en la utilización de los medios electrónicos, para el mejor manejo de trámites y procedimientos, en cumplimiento de los principios de la función administrativa, los organismos y entidades de la Administración Pública, podrán implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes<sup>204</sup>.

En el año 2009, una mesa de diálogo nacional concluyó que para las instituciones del Estado, resulta trascendental que el Ministerio de Defensa Nacional asuma y pueda dar respuesta a los incidentes y delitos informáticos que puedan afectar a la nación<sup>205</sup>. En Colombia tenemos referencia del ataque cibernético, por parte del grupo de hackers anonymous<sup>206</sup>. Este grupo, en reproche al proyecto de ley, el cual regulaba infracciones por los derechos de autor en internet en nuestro país, atacó las páginas web de la Presidencia de la República, el Senado de la República, Gobierno en Línea y de los Ministerios del Interior y Justicia, Cultura y Defensa, con ocurrencia en el primer semestre de 2011, generando en consecuencia, una caída del servicio de estos portales por varias horas<sup>207</sup>.

---

<sup>203</sup> El profesor Valbuena Hernández pone de ejemplo ataques a organizaciones como el pentágono, la CIA, el Fondo Monetario Internacional, el Senado de Estados Unidos; así mismo empresas de renombre como Google, Sony, Diners, MasterCard, Visa, Hotmail, Gmail, Twitter y Facebook . Ver en: VALBUENA HERNANDEZ, Gabriel, Seguridad jurídica, seguridad informática y proceso judicial electrónico, en Derecho Procesal Administrativo modernización del Estado y territorio. Estudios en homenaje a Augusto Hernández Becerra, Ibáñez, Bogotá, 2014.

<sup>204</sup> LEY 962 de 2005, artículo 6 sobre medios electrónicos.

<sup>205</sup> Documento Conpes 3701 del 14 de julio de 2011 p. 13.

<sup>206</sup> Reconocido grupo de Hackers que a nivel mundial han atacado entidades públicas como es el caso de las páginas web del gobierno suizo.

<sup>207</sup> Documento Conpes 3701 del 14 de julio de 2011, p. 9.

La seguridad no solo está contemplada en la adulteración o manipulación por personas externas o hackers que sustraigan la información, sino también el uso que se le da a dicha información y acceso a estos sistemas expertos, por parte de funcionarios, que aprovechando su posición, pueden violar o manipular las bases de datos de las entidades.

Infortunado hecho, por ejemplo, el de Rafael García Torres como Jefe de la Oficina de Informática del Departamento de Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)<sup>208</sup>, quien fue responsable de las adulteraciones que sufrieron las bases de datos del sistema de información de la misma entidad -SIFDAS- que contenían las anotaciones de antecedentes y órdenes de captura con y sin fines de extradición, los cuales fueron objeto de borrados y alteraciones.

Igualmente, en relación al exdirector de dicha entidad, Jorge Aurelio Noguera Cotes, fue condenado penalmente como autor mediato del ilícito de destrucción, supresión y ocultamiento de documento público<sup>209</sup> pues según el Decreto 218 de 2000, *“estas bases de datos tienen la categoría de documento público en la medida que es el Departamento Administrativo de Seguridad la entidad encargada de llevar, organizar, actualizar y conservar los registros delictivos y de identificación nacionales con base en el canje interno y en los informes que rinden las autoridades judiciales”*<sup>210</sup>.

En la exposición de motivos del proyecto de Ley 198 de 2009, la comisión redactora del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, se muestran de acuerdo en las oportunidades de modernización y eficiencia que las tecnologías de la información ofrecen. Cosa que implica, las contingencias y demás factores que demandan riesgos en el uso de éstas herramientas informáticas.

---

<sup>208</sup> El 31 de octubre de 2011 el Gobierno Nacional expidió el decreto 4057 mediante el cual se suprime esa entidad.

<sup>209</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal M.P. Alfredo Gómez Quintero

<sup>210</sup> *Ibídem*.

Del mismo modo, la utilización de las mismas en su sentir se prestan, según la comentada ley: “*para actividades fraudulentas, razón por la cual se introducen las exigencias legales necesarias para que las actuaciones que se adelanten a través de estos medios se encuentren revestidas, siempre que la naturaleza del acto lo amerite, de las suficientes garantías de seguridad, sobre la autoría de los documentos electrónicos, su integridad y su conservación, remitiendo siempre a las normas que regulan la materia, es decir, la Ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico*”<sup>211</sup>.

Un aspecto de suma importancia y quizás el de mayor relevancia, es la ética del sujeto social, que funge ya como servidor público u operador de justicia. Pues, tiene en su haber, toda una caja de pandora. En este singular aparte, se hace necesario de-construir una tendencia social de este país, la corrupción. Aunque ésta no se puede predicar de todos, si hay algunos puntos oscuros que han hecho que lo público, de forma especial, sea sinónimo de corrupción.

Bien es cierto, que la seguridad es necesaria, en materia de infraestructura y sistemas de protección, “*(...) o bastará con tener montados los mejores sistemas de seguridad informática, pues es bien sabido que en no pocas ocasiones las fallas de seguridad no son técnicas sino humanas*”<sup>212</sup>. Lo indicado por Valbuena, afina el argumento ético, el cual, aunado a procesos de formación integral y los instrumentos de selección de personal, juegan papel preponderante, a la hora de asumir los individuos idóneos para la función de maras.

Desde el procedimiento judicial electrónico que se desprende del expediente judicial electrónico, se esboza que adelantar estos “*juicios electrónicos*” desde el ámbito de la justicia contencioso administrativa, repercute en el acogimiento de medidas orientadas en evitar acciones que generen desconfianza y rechazo hacia estas herramientas que se

---

<sup>211</sup> Exposición de motivos del proyecto de Ley 198 de 2009.

<sup>212</sup> VALBUENA HERNANDEZ, Gabriel, *Seguridad jurídica, seguridad informática y proceso judicial electrónico*, en Derecho Procesal Administrativo modernización del Estado territorio, Bogotá, Ibáñez, 2014, p.608.

enmarcan como soluciones de justicia”<sup>213</sup>. Este tipo de acciones que violan los esquemas de seguridad pueden ser controladas a través de regulaciones como las que se han llevado en España<sup>214</sup>.

Frente a la seguridad, llama la atención no encontrar en la Ley 1437 de 2011 componentes como la firma digital, u organismos de certificación. Sin embargo, cabe anotar que en concordancia con el principio de neutralidad tecnológica, es posible que este tipo de mecanismos que si bien son de utilidad hoy en día, puede que en 20 años ya no lo sean, lo que convertiría este tipo de disposiciones en obsoletas.

## **1.2 El manejo y protección de los datos a los que tenga acceso la administración pública y la administración de justicia contenciosa administrativa con la implementación de la sede electrónica y el expediente judicial electrónico.**

Parte del éxito que representa generar la confianza de los ciudadanos en los medios electrónicos, está en hacer frente al temor que sienten los ciudadanos en que se violen los mecanismos que protegen sus datos, los cuales han suministrado a la administración pública o a la administración de justicia, en ejercicio de sus derechos o acciones. Es aquí donde juega un papel importante el derecho fundamental a la intimidad<sup>215</sup>, el cual es reconocido en la mayoría de las cartas de derechos fundamentales y Constituciones<sup>216</sup>. También, entra en juego y, por así decirlo, la ética del sujeto informático.

---

<sup>213</sup> VALBUENA HERNANDEZ, Gabriel, *Seguridad jurídica, seguridad informática y proceso judicial electrónico*, en Derecho Procesal Administrativo modernización del Estado territorio. Estudios en homenaje a Augusto Hernández Becerra, Bogotá, Ibáñez, 2014, p.600.

<sup>214</sup> En el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

<sup>215</sup> La intimidad ha sido entendida por la Corte Constitucional como “*aquel ámbito que las personas reservan del conocimiento de los demás, y como el espacio exclusivo de cada uno; es aquella orbita reservada para cada persona y de que toda persona debe gozar, que busca el aislamiento o inmunidad del individuo frente a la necesaria injerencia de los demás, dada la sociabilidad natural del ser humano. Es el área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediante orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley*”. Ver Corte Constitucional Sentencia T-696 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.

<sup>216</sup> VILASAU SOLANA, Mònica, *Derecho de intimidad y protección de datos personales*, Editorial UOC, Barcelona, 2005, 93 -139, p. 93

Este derecho fundamental, consagrado en el artículo 15 de la Constitución, se ha definido en extensa jurisprudencia contemplando el: “*habeas data, las nuevas tecnologías, la honra y el buen nombre*”<sup>217</sup>. Este derecho está consagrado normativamente en la Declaración Universal de derechos humanos, el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales el pacto de San José de Costa Rica.

La violación al derecho a la intimidad, en correspondencia con los avances de las tecnologías de la información, genera inquietud por los riesgos que estos representan en la protección de los ciudadanos en lo atinente a datos personales. Así las cosas, resulta importante llamar la atención sobre el manejo de la información, pues no se debe limitar a poner a disposición una información en una sede electrónica, donde los visitantes realicen trámites de envío o la notificación de actuaciones. Pues, se debe estandarizar el uso de la información, donde las autoridades tengan el registro completo de las entradas, salidas, los intentos de enviar documentos para tener un control claro de las transacciones hechas por los usuarios.

Los principios para el tratamiento de datos personales, contenidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, nos hablan del principio de seguridad y el de confidencialidad, donde toma relevancia el manejo de la seguridad para evitar adulteración, pérdida consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Bajo este panorama, quizás no muy alentador, en materia de seguridad, no es conjeturable, entonces, considerar que los aportes de las nuevas tecnologías y de la informática no se deban implementar, por el contrario, son necesarias y los riesgos son múltiples, empero, nunca hubiésemos volado, si los hermanos Wright no se hubiesen arriesgado a dar el salto al vacío.

En observancia de la Ley 1437 de 2011, encontramos, que no se hace referencia expresa al manejo de las bases de datos<sup>218</sup>públicas. Pero entre los deberes de los encargados de la

---

<sup>217</sup> CHARRRIA SEGURA, Juan Manuel, Reflexiones Constitucionales II, 2da Edición, Ibáñez, Bogotá, 2012.

<sup>218</sup> Según la Ley Estatutaria 1581 de 2012, una base de datos se define como un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento.

información está el garantizar a los titulares y usuarios de sedes electrónicas y del expediente judicial electrónico el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data, además de la conservación de la información bajo los medios de seguridad que imposibiliten la adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento<sup>219</sup>.

En la revisión Constitucional de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en el análisis del artículo 95, el cual como hemos dicho hace mención a la Tecnología al servicio de la Administración de Justicia, frente a la incorporación de tecnología de avanzada por parte del Consejo Superior de la Judicatura a la rama Judicial se determinó: *“Naturalmente, el uso de los medios que se encuentran a disposición de juzgados, tribunales y corporaciones judiciales exige una utilización adecuada tanto de parte del funcionario como de los particulares que los requieran. Para ello, será indispensable entonces que el reglamento interno de cada corporación o el que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para los demás casos, regule el acceso y uso de los medios en mención y garantice, como lo impone la norma que se revisa, el ejercicio del derecho a la intimidad y a la reserva de los datos personales y confidenciales que por una u otra razón pudiesen ser de conocimiento público (Art. 15 C.P.)”*<sup>220</sup>. Una vez más, se hace necesario reflexionar sobre las motivaciones de las conductas de los seres humanos.

Recientemente se conoció el caso del hackeo a trabajadores del Gobierno de Estados Unidos, en el que se comprometieron datos como el número de seguridad social de 21.5 millones de personas. Los datos robados también incluyen información financiera, de salud, registros de antecedentes penales, y los nombres y direcciones de los empleados del gobierno y sus familiares<sup>221</sup>. El reto surge a cada paso, que el ser humano evoluciona y genera desarrollo.

---

<sup>219</sup> LEY Estatutaria 1581 de 2012, artículo 18 sobre los deberes de los encargados del tratamiento de datos.

<sup>220</sup> CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia No. C-037/96 M.P. VLADIMIRO NARANJO MESA Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara *“Estatutaria de la Administración de Justicia”*.

<sup>221</sup> Noticia tomada del portal: <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33472585>

### **1.3 El rol del Estado y la academia en la formación de profesionales en la relación de la utilización de los medios electrónicos.**

Desde el punto de mira del autor, se hace necesario que la relación entre el derecho y las nuevas tecnologías, tenga una verdadera integración desde las aulas universitarias no solo a nivel de posgrados, pues para los abogados el tema de las nuevas tecnologías, tiene menor relevancia que otras temáticas de profundización del derecho. Y, algunas veces, el estudio académico de estos temas es por asumir que son de mayor facilidad, sin tener en cuenta que las nuevas tecnologías son las herramientas de las que se dota al Estado para cumplir de una manera más eficaz las actuaciones tanto Constitucionales como legales.

En ese orden de ideas, una mejor formación desde la academia, exige una mayor asignación de recursos por parte de las Instituciones académicas que forman profesionales universitarios, así mismo, significa que los docentes que enseñan las diferentes áreas de derecho procesal, enfoquen a los estudiantes, en la instrucción del manejo de las tecnologías de la información, en su uso práctico y de real implementación.

Débase tener en cuenta, que las herramientas tecnológicas e informáticas no solo son simples instrumentos para la consecución de fines. También, fungen como expresión de las ciencias, las matemáticas e ingenierías de vanguardia. Éstas, en conjunto, conforman todo un caleidoscopio de opciones útiles para el mejor ejercicio del hacer jurídico como el de la administración estatal en general.

Por su parte, el Estado tiene a su cargo otra gran responsabilidad, en torno a la capacitación de fondo con sus funcionarios y operadores de justicia<sup>222</sup>. En este caso, no se trata solo de

---

<sup>222</sup> El proceso de formación del Programa Servidor Judicial Digital se inició el 1 de marzo de 2014 y terminó el 31 de julio del mismo año, en el que se contó con la participación de dieciocho mil doscientos dos (18.202) discentes durante los tres períodos académicos ofertados. De toda esta población, el 67% pertenece a la Jurisdicción Ordinaria, el 15,2% pertenece al Consejo Superior de la Judicatura y el 15,3% en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en tanto que el 2,5% son de las demás jurisdicciones especiales. Gracias a este programa hoy se puede decir que 14.092 servidores judiciales en Colombia tienen certificadas sus competencias en el uso y apropiación de las TIC para la Justicia Colombiana. Ver: [https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2307298/3021432/BOLETIN+7+PROGRAMA+SERVIDOR+JUDICIAL+DIGITAL+2+\(1\).pdf/4b74f476-441b-4a16-875a-44d17d982994](https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2307298/3021432/BOLETIN+7+PROGRAMA+SERVIDOR+JUDICIAL+DIGITAL+2+(1).pdf/4b74f476-441b-4a16-875a-44d17d982994)



saber el manejo técnico de estos utensilios de la informática, es toda una conciencia capaz de asumir nuevos retos y de adaptarse a este salto tecnológico, que de suyo reclama preparación y nuevos puntos de miras para entender que la realidad ya no es una desde el punto de mira de los sentidos. Se transpone al concepto de realidad virtual, también.

Al tenor de lo dicho, escuelas epistémicas que se han encargado de hacer observancias de la administración pública, la gerencia social, entre otras, ven dicho tema como fundamental, habida cuenta la necesidad de comprender y, teniendo, por ejemplo, que si el espacio es curvo, las líneas paralelas, en algún momento sí se pueden encontrar. Es decir, el mundo sensible, al que nuestros sentidos están acostumbrados a conocer y de la forma natural y tradicional, cede lugar a este nuevo espectro de la ciencia, las tecnologías y la informática.

En cuanto al uso de los medios electrónicos por parte de profesionales del derecho, encontramos posiciones que han señalado resistencia en la aplicación de aplicación de lógica, las matemáticas y la tecnología<sup>223</sup>. Posición que es respetable pero de la que distamos, nótese que en este texto hemos abogado por estar acorde a la era digital, toda vez que como ya se ha hecho énfasis en este trabajo, la no utilización de las nuevas tecnologías o estar acorde a la era digital, no puede señalarse a una profesión o a una edad, pues el contexto de la educación informática en la que vive la mayor parte de la población de nuestro País, es el punto de partida para entender este fenómeno. Además, no se puede olvidar que por el hecho que, en el País, se legislen normas de poca implementación. Los profesionales en el manejo de las mismas, seamos los estigmatizados a no querer usarlas. pues a nuestro modo de ver habría una discriminación de la cual, no existe hasta la fecha un estudio o cifras detalladas que puedan demostrar lo contrario. Pues una cosa muy distinta es el bajo conocimiento en algunas áreas, a la no voluntad de manejar sistemas expertos en los campos donde nos desempeñamos.

Valga señalar, que la cátedra, espacio determinante e influyente, juega un papel de magistral enseñanza no solo, en la temática de la disciplina del derecho, también, en la

---

<sup>223</sup> BARROS CANTILLO, Nelson, Las nuevas herramientas de la argumentación jurídica. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2005.

visión de los estudiantes para abordar los nuevos paradigmas que la sociedad del desarrollo tecnológico aporta.

#### **1.4 La confianza en los usuarios para el uso real de las nuevas tecnologías que proporciona el Estado a todas las autoridades.**

La sociedad ha podido aprovechar los avances de la tecnología en diferentes campos como las comunicaciones, la medicina, la educación, la ingeniería, el deporte, etc. en contraposición a lo dicho, en las relaciones que mantenemos los ciudadanos con nuestras autoridades todavía seguimos interactuando de una forma alejada del aprovechamiento de la tecnología, sin profundizar en la importancia de entender los beneficios que la misma nos puede brindar. Facilitando así, como lo expresa el DANE en su modelo de la medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que la comunidad tenga una participación activa y democrática<sup>224</sup>.

De manera singular, se ha considerado, que las leyes que tienen contenido tecnológico, no se pueden convertir en un “*saludo a la bandera*” o en “*letra muerta*”, pues si bien es cierto el legislador, y el Gobierno Nacional a través de sus Ministerios, han destinado una labor de determinar y fijar el acoplamiento y la implementación, de mecanismos e instrumentos para el desarrollo de las mismas. Cabe resaltar, que el profesor David Suarez Tamayo, ha sostenido que si la utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso administrativo no funcionan bien, no estamos ante un nuevo Código Administrativo, y como consecuencia estaremos ante una “*simple reforma inocua, costosa, desgastante e innecesaria*”<sup>225</sup>

Estas leyes, no se pueden quedar como enunciados normativos, que tengan que esperar muchos años para su real implementación, pues, precisamente, en esta época moderna, en que las autoridades han de propender por acercarse más a los ciudadanos, son los medios

---

<sup>224</sup> Departamento Administrativo Nacional De Estadística – DANE. Modelo de la medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC. Diciembre de 2003. p.13

<sup>225</sup> SUAREZ TAMAYO, David, *Derecho Administrativo y los veinte años de la Constitución. Ley 1437 de 2011* en El Derecho Público y los veinte años de la Constitución de 1991/ Miguel Malagón Pinzón (coordinador), Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes, 2013, p. 52-53.

electrónicos un buen puente para ello. De acuerdo a la normatividad, lo ideal es que todas las autoridades pongan en funcionamiento su sede electrónica, hagan uso del expediente electrónico, la notificación electrónica, se sustituyan el uso de medios escritos por medios electrónicos.

A propósito de la confianza, esta situación provocará un cambio de perspectiva, por parte de los ciudadanos, en relación con sus autoridades, circunstancia que debe redundar, en la verdadera eficacia de la que habla la Carta Magna, de manera tal, que ofrecer mecanismos que garanticen seguridad a los usuarios, en la utilización de los medios electrónicos, ha de afianzar la confianza en la institución.<sup>226</sup>.

### **1.5 Funcionarios Públicos al servicio de la Administración Pública y de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, capacitados tecnológicamente para los retos que exige la implementación de las TIC en la misma.**

La falta de capacitación de los funcionarios de las principales entidades del Estado, es uno de los desafíos importantes que exigen la implementación de este tipo de normas que llevan intrínseca una relación con las tecnologías de la información. Pues, si bien es cierto previamente mencionamos el programa que capacitan a 14,092 funcionarios, entre mayor sea la instrucción, manejo y utilización de la tecnología en servicio del Derecho, mayor será el beneficio que recibirán los administrados y los usuarios de la administración de justicia.

El CPACA en su artículo 206<sup>227</sup> hace mención al “*Deber de colaboración*”<sup>228</sup> que los funcionarios de los despachos deben brindar a los usuarios de la Justicia, del cual se

---

<sup>226</sup> DARNACULLETA I GARDELLA, Maria Merce, Autorregulación y Derecho público: La autorregulación regulada. *Marcial Pons, Madrid*, 2005, p. 267.

<sup>227</sup> Ley 1437 de 2011, el Artículo 206 plantea el Deber de Colaboración, dicho artículo reza: Los empleados de cada despacho judicial deberán asistir y auxiliar a los usuarios en la debida utilización de las herramientas tecnológicas que se dispongan en cada oficina para la consulta de información sobre las actuaciones judiciales.

<sup>228</sup> Para los Consejeros de Estado preocupaba utilizar la palabra “*asesoría*” dentro de este artículo, pues podría derivar en responsabilidad desde el punto de vista procesal, cuando los usuarios se sintieran mal asesorados y se prestaría para diversas interpretaciones. Ver: MEMORIAS de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo Volumen III, La Ley y los debates de la

desprende la importancia de educar acerca de tecnologías de la información a estos empleados, con miras a un mayor dinamismo, en pro de mejorar la relación de administración de justicia administrativa- usuario.

En el marco de la clausura del Congreso Internacional de TIC (Andicom), llevado a cabo, en septiembre de 2014, el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos y el exministro de las Tics, Diego Molano, presentaron el Plan Vive Digital 2014 - 2018. Con el cual se busca certificar como ciudadanos digitales a 2,5 millones de funcionarios públicos para que se apropien de la tecnología. La estrategia de Gobierno en línea en Colombia, está en pro de la consolidación de competencias TIC en servidores públicos a nivel nacional, además de las capacitaciones a 5 millones de colombianos para que todos aprendan a usar las TIC y se empoderen del uso de estas herramientas.

Para la Honorable Corte Constitucional, la modernización del Estado y la Administración Pública, en concordancia con los retos que impone el Estado Social de Derecho, encuentra satisfactorio y anhelado: *“que se prevean mecanismos institucionales aptos para alcanzar la modernización y eficiencia de los entes públicos, capacitando a sus trabajadores, estructurando adecuadamente el conjunto de funciones que les corresponde cumplir”*<sup>229</sup>. La misma corporación, hace mención a que el Estado en la consecución de los fines propuestos por el Estado Social de Derecho, necesita de una administración con suficiente apoyo logístico, infraestructura adecuada, más un personal preparado. Para estar enmarcados como un Estado administrativo de prestaciones que se sobreponga a un Estado predominantemente legislativo<sup>230</sup>.

Un ejemplo que podemos traer a colación, es el de “Soeasy”, en Singapur, el cual está definido como un sistema de interconexión que abarca a todas las entidades del Estado, creando un trabajo en conjunto, coordinado y alineado. Debido a que en relación a los funcionarios, se realizaron capacitaciones y programas de sensibilización en este proyecto

---

comisión de la reforma parte A artículos 1 a 142. Min Justicia y Consejo de Estado, Sala de Consulta y servicio Civil, p.304.

<sup>229</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-479/92 M. Ponentes, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. 13 de agosto de 1992.

<sup>230</sup> Corte Constitucional Sentencia T-068 M.P. Alejandro Martínez Caballero 1998.

en el conocimiento de las nuevas aplicaciones y herramientas. Permitiéndoles experimentar y apropiarse de las soluciones y mejoras que brinda el programa<sup>231</sup>.

Resulta de interés resaltar, que entre los deberes del juez, según el Código General del Proceso, en su artículo 42, se enmarca el deber de: *“usar el Plan de Justicia Digital cuando se encuentre implementado en su despacho judicial.”*. El 13 de agosto de 2014, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado estimuló a los jueces para certificarse como ciudadanos digitales, en favor de un Estado que puede poseer una justicia, instrumentalmente, moderna<sup>232</sup>.

Una realidad que asiste al ingente mundo del derecho, como en todas las demás ciencias, es la resistencia al uso de las tecnologías, al respecto, el profesor Barros Cantillo, hace una crítica a los profesionales de esta disciplina, en el manejo de técnicas informáticas con expresiones de *“ciberfobia”*, argumentando que: *“Se puede decir que el desgano de muchos juristas frente al menú de conceptos, métodos y técnicas de las ciencias formales e informáticas, va ganando terreno en el mundo del derecho y haciéndose parte, entre influyentes círculos de jurisprudentes y doctrinantes, del creciente repudio del abogado promedio a la idea de llegar a depender, para la ejecución de sus tareas profesionales, de los instrumentos cognoscitivos ideados por las matemáticas de la inteligencia artificial y surtidos por la tecnología de los programas expertos.”*<sup>233</sup>

En ese mismo sentido, se pronuncia, también, el profesor Hinestrosa: *“La resistencia a ultranza al cambio y su obstaculización traen consigo el efecto perverso de presentar al derecho como contrario al cambio social y factor de perturbación, con el consiguiente*

---

<sup>231</sup> Fortalecimiento de la gestión TI en el Estado, Experiencias Internacionales, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, disponible en: <http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-article-5875.html>

<sup>232</sup> Ante la presentación de XVII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, Montería 13 de agosto de 2014. En el que se contempló la realidad el proyecto de expediente judicial electrónico.

<sup>233</sup> BARROS CANTILLO, Nelson, Las nuevas herramientas de la argumentación jurídica. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2005.

*demérito de las instituciones*”<sup>234</sup>. En este punto volvemos a insistir en que si bien, resulta, inadecuado pretender no adentrarnos en el mundo de los desarrollos tecnológicos al servicio del derecho, por la apocada visión de quienes consideran aún, válidamente exclusivo, el uso del vetusto sistema tradicional para el quehacer judicial. También es cierto que estaríamos haciendo un juicio, pues si bien es cierto la falta de conocimiento es un fenómeno real, esta se encuentra en todas las áreas sin discriminar edades. Por consiguiente, la instrucción y enseñanza de manejo en los sistemas expertos, por parte de funcionarios públicos se vuelve un elemento primordial para el objetivo de utilizar e implementar de manera real los medios electrónicos conforme a la Ley 1437 de 2011.

#### **1.6 El rol del usuario informático como parte fundamental para la consecución de los fines del Estado, en la utilización de los medios electrónicos contemplados en el CPACA.**

Para el ex Presidente del Consejo de Estado, Álvarez Jaramillo, la Ley 1437 de 2011, le da un lugar central al ciudadano, como núcleo de la actuación administrativa<sup>235</sup>. Para Jacques Chevallier: *“El fundamento de toda autoridad, reside en el consentimiento de los individuos, el individuo se convierte de esta forma en la referencia suprema, tanto en la esfera privada, como en la esfera pública, mediante la figura del ciudadano”*<sup>236</sup>. Una nota particular suena, al retomar al ser humano como el centro y razón de ser de la democracia y del Estado Social y de Derecho. Esto, reivindica a la dogmática constitucional y sus principios, asimismo, los fines del Estado, hecho que debería ser bandera, en otros espacios de igual jerarquía en tema de derechos.

---

<sup>234</sup> HINESTROSA, Fernando, *Encrucijadas actuales del Derecho*, disponible en Instituciones Judiciales Y Democracia Reflexiones con ocasión del Bicentenario de la Independencia y del Centenario del Acto Legislativo 3 de 1910, p. 588.

<sup>235</sup> ÁLVAREZ JARAMILLO, Luis Fernando, *Antecedentes y presentación general de la Ley 1437 de 2011*, Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p. 31.

<sup>236</sup> CHEVALLIER, Jacques. *El Estado posmoderno*. Editorial de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2011, p. 18.

Al tenor de lo comentado, la profesora Rodríguez, indica que, el uso de la tecnología debe ser con sentido humano, es decir, sensibiliza su uso y ponen de relieve, el papel del usuario informático como sujeto de derechos, quien debe ser protegido en su razón antropológica: *“cada vez que las instituciones, sean gobierno o sector privado, ofrezcan nuevas tecnologías a los usuarios o a los empleados, tendrán que hacerla como parte componente de un todo, en el que está presente una respuesta humana; si no lo hacen, la gente tratará de crear una propia, o de rechazar la nueva tecnología, y esto se observa en la resistencia al cambio frente a la automatización”*<sup>237</sup>.

Preponderante es, que todos los ciudadanos puedan acceder a la administración pública y de justicia, en particular, mediante el uso de los medios electrónicos, dicho derecho ya antes debatido y afirmado en los principios constitucionales y de ley como la que emana del CPACA, es coherente con el análisis siguiente: *“Adquirir conocimientos y capacidades para moverse en la sociedad de la información no puede reducirse, por tanto, a la enseñanza que se obtiene en dichos institutos, sino que debe llegar a amplios sectores de la población, a todos los grupos de edad y a ciudadanos con diferentes niveles de preparación”*<sup>238</sup>.

Así las cosas, la humanidad ha librado batallas que se han ganado a sudor y sangre, pero las situaciones que se superan, parecen mutarse en nuevas formas en la modernidad. Una de ellas sería el aislamiento por analfabetismo informático, el cual se convierte, a la vez, en una forma de exclusión social desde las tecnologías. Asístale, pues, imperativa responsabilidad social al Estado, en lo que respecta a la posibilidad de capacitación a los usuarios, quienes son los asociados.

### **1.7 Presupuesto de la rama judicial como factor determinante en la consecución de un procedimiento judicial electrónico.**

---

<sup>237</sup> RODRÍGUEZ, Gladys Stella. Gobierno Electrónico: Hacia la modernización y transferencia de la gestión pública. 2011. Revista De Derecho. Universidad Del Norte, 2004. P.5

<sup>238</sup> Derecho a la información, hábeas data e internet. Dirigido por Juan F. Armagnague, coordinado por María G. Ábalos y Olga P. Arrabal de Canals, Ediciones La Roca, 1° edición Buenos Aires, 2002, p.30

Para lograr poner en marcha todos los mecanismos, como el envío de memoriales, hacer las respectivas notificaciones electrónicas, la plataforma cuenta con seguridad necesaria para protegerse del cibercrimen, se hace necesario como fue en el caso de la Contraloría General de la Nación, una inversión de más de 12.000 millones de pesos en modernización tecnológica<sup>239</sup>. Recordemos que el art. 307 del CPACA, menciona que la implementación y desarrollo de esta Ley se atenderá con los recursos que el Gobierno Nacional viene atendiendo a la rama Judicial<sup>240</sup>.

El ejemplo de la Contraloría General de la República en el uso de medios electrónicos para el mejoramiento de las relaciones administración- administrado, es de puntual importancia. Pues, asumió la resolución 0277 de 2014<sup>241</sup>, la cual tiene como objeto: *“adoptar el Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes -SAE-, como la herramienta tecnológica de uso exclusivo para la administración, conservación y trámite de información, documentación y expedientes electrónicos; y regular su funcionamiento, alimentación y demás aspectos relacionados”*<sup>242</sup>. De igual manera, la institución de justicia responsable de dilucidar las contiendas entre los ciudadanos y el Estado, está en la obligación de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la norma. Requiera, entonces, de invertir los recursos que logren el fin institucional y legal, que impone el CPACA.

Suele ser de corriente uso, en el ambiente judicial, que la escases de recurso imposibilitan la inversión económica para situaciones, quizás, previstas por algunos, más importantes como: la nivelación salarial, la creación de cargos de planta y de juzgados, de personal, etc., pero se desestima que al invertir en lo tecnológico, se puede ahorrar, en otros espacios, como el papel, la tinta y sin número de materiales, que por montones, se gastan en la rama judicial, destinándolos a las nuevas tecnologías y, sin duda, para aquellos justos requerimientos que los operadores de justicia hacen.

---

<sup>239</sup> Noticia tomada en: <http://www.portafolio.co/economia/contraloria-general-modernizacion-tecnologica>

<sup>240</sup> Según el artículo 307 del CPACA, Estos recursos para la implementación y desarrollo del código, están ligados a las disponibilidades presupuestales, el marco fiscal y de gastos de mediano plazo.

<sup>241</sup> Por la cual se adopta el Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes -SAE- y se regulan aspectos relacionados con su utilización y funcionamiento.

<sup>242</sup> RESOLUCIÓN 0277 de 2014, artículo 1.



En torno a lo dicho, el profesor Rincón Cárdenas ha puesto de manifiesto que en países como el nuestro, estamos enfrentados a grandes obstáculos, dentro de los cuales se encuentra la adquisición e implementación de las TIC, originado y soportado en la falta de recursos<sup>243</sup>. En ese hilo conductor, el mismo autor, en otra de sus obras de forma magistral y con palabras de hierro, en cuanto a lo relacionado a la falta de recursos infraestructurales, afirma: “, *que este punto debe ser desmitificado, pues si bien es cierto, desde un punto de vista histórico, el Estado no ha contado con los recursos suficientes para asumir todas las cargas que la Ley le impone, lo que ocurre en muchas ocasiones es que los recursos con que cuenta no son correctamente invertidos*”<sup>244</sup>.

Existen datos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía General de la Nación donde se demuestra que: “*el rezago presupuestal frente a las inversiones en infraestructura tecnológica se acercan al 50% respecto a lo solicitado*”<sup>245</sup>.

Ahondado a estos conceptos se pueden dar ejemplos inaceptables, considerados de mala administración de los recursos, como la devolución de \$56.000 millones de pesos destinados a tecnología por parte del Consejo Superior de la Judicatura al Ministerio de Hacienda, cuando este año, en palabras del Ministerio de Tecnología se han recibido quejas “*de problemas para implementar el Código General del Proceso porque no se acabaron de instalar los equipos técnicos que se requerían.(...)*”<sup>246</sup>

Ahora bien, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, el cual se ha comprometido con una política de gestión pública, eficaz, efectiva y eficiente, adopta la estrategia de cero papel, la cual remplace el manejo de los mismos, haciendo uso de los medios electrónicos utilizando las TIC. Es en buena medida, el papel que pueden cumplir las demás autoridades

---

<sup>243</sup> RINCÓN CARDENAS, Erick, Manual de Derecho electrónico y de Internet. Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, p. 313.

<sup>244</sup> RINCÓN CARDENAS Erick, CUBILLOS VELANDIA Ramiro, *Reforma a la administración pública a través del gobierno electrónico* en VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003 disponible en: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047116.pdf>

<sup>245</sup> Plan Nacional TIC 2010 – 2014 – EJE JUSTICIA Propuestas, recomendaciones y metas para el eje de justicia del plan TIC 2014 – 2019 Agosto de 2010.

<sup>246</sup> Información visible en el portal: <http://www.eltiempo.com/politica/justicia/comienzo-de-la-justicia-oral-en-colombia/16444744>

para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos físicos tecnológicos y adecuadas inversiones estatales. Nótese que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos hace referencia mediante estadísticas que un empleado promedio suele usar diez mil hojas de papel al año, cifra que se incrementa con los valores de papel, las impresión y trámites. Lo cual repercute en la acumulación de altos costos del presupuesto del lugar donde trabaje dicho empleado<sup>247</sup>.

Desde nuestra posición, este es uno de los puntos claves para que la implementación si sea real, lo cual llevara a involucrar a todos los actores usuarios de las tecnologías de la información. Pues recordemos, que una implementación deficiente en el uso de las tecnologías de la información, genera la tentación en algunos sectores, de estigmatizar a los profesionales del derecho, como obstáculo para el uso de las mismas en la consecución de los fines del Estado.

### **1.8 El compromiso ecológico que se desprende de la real implantación y funcionamiento de los medios electrónicos fijados en la Ley 1437 de 2011.**

El mal manejo de los recursos naturales que nos ofrece el planeta tierra, por parte de los seres humanos, ha derivado en el detrimento de la calidad de vida pues, hoy en día ya se sienten algunos efectos leves no moderados de fenómenos como el calentamiento global y los daños a la capa de ozono. Generado así, situaciones como el cambio climático, desaparición de páramos como fuentes hídricas, deforestación<sup>248</sup>, enfermedades asociadas a la exposición directa a los rayos solares en las personas, poner en vía de extinción algunas especies que habitan territorios específicos de cada continente, contaminación, lluvia acida más la explotación de los recursos naturales, por solo nombrar algunos ejemplos de las implicaciones del mal manejo del medio ambiente.

---

<sup>247</sup> <http://www.dinero.com/pais/articulo/en-empresas-papel-pasa-moda/181584>

<sup>248</sup> Recientemente se conocen los datos de la deforestación en el País en el año 2014, por parte del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual es generada por la tala ilegal, la minería ilegal, conversión a cultivos agrícolas, e incendios forestales entre otras. Ver [http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022695/Alertastempranasdedeforestacionsegundo boletin.pdf](http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022695/Alertastempranasdedeforestacionsegundo%20boletin.pdf)

Ahora bien, cada día que pasa, toma relevancia el tema ecológico. Más allá de que esto se relacione con el ahorro y permita una optimización de los recursos de variada índole, está el hecho que la vida está en peligro. El planeta está en constantes cambios que afectan al ser humano, quien es el responsable directo de ello. Por lo cual, es momento de dar pasos gigantescos en contribuir a la solución y coadyuvar en mitigar los efectos presentes y futuros de estos fenómenos naturales. Para el profesor Jinesta, son los poderes públicos los que tienen el deber de garantizar, defender y preservar el medio ambiente<sup>249</sup>.

En el ámbito local, la Constitución de 1991 fue la que dio el salto para la protección del medio ambiente, compuesta por una serie de medidas, las cuales reglamentan una debida protección a la naturaleza y su relación con la sociedad. En este contexto que venimos señalando, nuestra Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-595/10 ha manifestado: *“la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta contiene una verdadera “Constitución ecológica”*<sup>250</sup>.

Es por esto, que mediante la Ley 162 de 1994, el Estado Colombiano incorporó a su ordenamiento jurídico el Convenio sobre la diversidad biológica, recreado el 5 de junio de 1992 en Río de Janeiro. Con dicha medida, se impulsó a nuestro Estado en adoptar y suscribir en la legislación la utilización, integración y adopción de medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para reducir efectos adversos.

En la revisión constitucional de la Leyes 162 y 165 de 1994, por medio de la cual se aprobó el Convenio sobre Diversidad Biológica anotado previamente se determinó, que: *“Colombia es uno de los países que mayor interés debe tener respecto de los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad. (...), basta con remitirnos a la exposición de motivos suscrita por los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, cuando presentaron ante el h. Congreso de la República el proyecto de ley correspondiente al*

---

<sup>249</sup> JINESTA, Ernesto, Modernización de la contratación pública en el entorno Iberoamericano: La Contratación Pública Ecológica (CPE), p 3 disponible en: [http://www.ernestojinesta.com/\\_REVISTAS/MODERNIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20CONTRATACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA%20EN%20EL%20ENTORNO%20IBEROAMERICANO.PDF](http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/MODERNIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20CONTRATACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA%20EN%20EL%20ENTORNO%20IBEROAMERICANO.PDF)

<sup>250</sup> CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-595/10 M.P. Jorge Iván Palacio. 27 de julio de 2010 Ref. D-7977

*Convenio de Diversidad ya referenciado*”<sup>251</sup>. La realidad, en torno a ello, es presente y latente. La maquinaria creciente de la explotación minera, el uso del fracking para la extracción de petróleo, la contaminación a cielo abierto de carbón, del mercurio en los ríos, las fumigaciones con glifosato, entre otras tantas, ponen en inminente peligro los ya no tan abundantes recursos naturales que tenemos.,

Más adelante en el texto de la referencia, nos encontramos con una descripción de la diversidad de nuestro país con los porcentajes de vida animal y vegetal, en relación al planeta tierra así: *"Países como Colombia, catalogados como 'mega-biodiversos' no pueden darse el lujo de anular una de las ventajas comparativas más críticas en las relaciones internacionales y la economía del siglo XXI: los recursos genéticos y la Diversidad biológica. En muchos casos esta ventaja es absoluta cuando se trata de especies endémicas, es decir únicas y no repetidas en lugar alguno del Planeta (...). Colombia es uno de los 13 países del Planeta que concentran el 60 por ciento de la riqueza biológica. Ellos incluyen además Brasil, México, Perú, Australia, China, Ecuador, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, Venezuela y Zaire. Nuestro país reúne aproximadamente el 10 por ciento de todas las especies animales y vegetales del globo, aunque representa menos del 1 por ciento de la superficie terráquea. Esta característica ubica al país en uno de los primeros lugares en diversidad de especies por unidad de área, y número total de especies. Un tercio de las 55.000 especies de plantas de Colombia son endémicas, lo que se considera una riqueza sin igual, equivalente al 10% del total identificado (Bundestag, 1990). El país cuenta, por ejemplo, con el 15% de las especies de orquídeas clasificadas mundialmente; con más de 2.000 plantas medicinales identificadas y con un número elevado de especies de frutos comerciales, silvestres o apenas localmente cultivados, que son comestibles o que pueden llegar a ser utilizados para el mejoramiento genético de especies cultivadas. En el país se han clasificado 338 especies de mamíferos, lo que representa un 8% del total de las conocidas en el Planeta; el 15% de las especies primates vivientes; 1.754 especies de aves (18%); y casi 3.000 vertebrados terrestres (...)"*<sup>252</sup>.

---

<sup>251</sup> CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-519/94 M.P. Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA 21 de noviembre de 1994.

<sup>252</sup> *Ibídem*.

Así las cosas, uno de los grandes beneficios que nos ofrecen las tecnologías de la información es la reducción en el uso del papel, lo cual deriva en la disminución de la tala de árboles, (En Colombia, para el 2014, se tumbaron 140.356 hectáreas de bosque)<sup>253</sup>. Pues la pulpa de la madera es la materia prima para la elaboración del papel en la mayoría de sus variedades ofrecidas a los consumidores. Asimismo, la tala de árboles conduce a la pérdida de los diferentes hábitat de especies de flora, fauna y de diversidad de animales Generando ello, el rompimiento de un equilibrio natural que se ha de ver reflejado, en nuestra carencia, en un futuro nada lejano.

Ante estas escandalosas cifras, la directora de la Cámara de Industria de pulpa, papel y cartón de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) afirma que la deforestación es causada en su mayoría por la frontera agrícola y los cultivos ilícitos<sup>254</sup>. Sin embargo la industria papelerera y de celulosa, utiliza más agua por cada tonelada producida que cualquier otra industria. Según el portal Waterfootprint.org para producir 80 gr. de papel A4 de celulosa de madera de bosque se usan de 7 a 10 litros de agua<sup>255</sup>. También, la industria pastero-papelerera se encuentra entre los mayores generadores de contaminantes del aire y del agua, así como gases que causan el cambio climático<sup>256</sup>.

Para el catedrático de la Universidad del Rosario, Carlos Ariel Sánchez, en cuanto al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y, con una visión ecológica, señala: *“es posible construir un mundo no contaminado, respetuoso de la belleza de la naturaleza, en el que se supriman los modelos destructivos de consumo”*<sup>257</sup>.

Para el caso en concreto, del sector de las entidades públicas y de justicia, es la reducción en el consumo a gran escala de papel y de los recursos que se gastan en la producción del

---

<sup>253</sup> Información tomada del portal: <http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/cop-21-camo-afecta-a-colombia-el-cambio-climatico/16443163>

<sup>254</sup> [http://www.larepublica.co/consumo-c%C3%A1pita-de-papel-es-de-28-toneladas\\_248171](http://www.larepublica.co/consumo-c%C3%A1pita-de-papel-es-de-28-toneladas_248171)

<sup>255</sup> VAN OEL, P. R.; HOEKSTRA, A. Y. Towards quantification of the water footprint of paper: a first estimate of its consumptive component. *Water resources management*, 2012, vol. 26, no 3, p. 733-749. P. 743.

<sup>256</sup> HALWEIL, Brian. *La situación del mundo 2004: Informe anual del Worldwatch Institute sobre progreso hacia una sociedad sostenible*. Icaria Editorial, 2004.

<sup>257</sup> SANCHEZ TORRES, Carlos Ariel *“Humanismo y estructuras jurídicas y sociedad tecnológica”* en *El Derecho administrativo en los albores del siglo XXI*, Editorial de la Universidad del Rosario, Bogotá, 2007, p.27

mismo. Resulta, entonces, uno de los grandes beneficios que nos presenta la inclusión de los medios electrónicos dentro de la Ley 1437 de 2011, siempre y cuando tengan una verdadera aplicación por las autoridades y de los usuarios de las mismas, con el fin de mitigar el impacto ambiental.

Un ejemplo de ello está en la Superintendencia de Sociedades, que entre los años 2011 y 2013 ha eliminado unas 39 toneladas de papel debido a la depuración de documentos más el uso de servicios electrónicos para el manejo documental<sup>258</sup>.

Y, es que las medidas que sustituyen el papel según el profesor Sánchez Torres, son: *“acorde con los tiempos, de sustituir la obligatoriedad del uso del papel como soporte documental, tanto internamente en la Administración como en las relaciones que los ciudadanos mantienen con esta. Por ello, es necesario adoptar medidas drásticas en “pro” de la supresión de dicha obligatoriedad, facilitando al ciudadano el inicio de los procedimientos administrativos mediante la disponibilidad electrónica de todos los modelos normalizados que actualmente se encuentran a su disposición en soporte papel en las dependencias de la Administración.*”<sup>259</sup>.

El Decreto 2693 de 2012, en relación a los temas prioritarios para avanzar en la masificación de Gobierno en línea, hace mención en cuanto a los asuntos concernientes en tecnología y ambiente así: *“Utilizar eficientemente las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de mitigar el impacto ambiental, para lo cual deberán adoptar medidas preventivas y precautelativas que permitan la incorporación progresiva en las nuevas soluciones, herramientas y equipos de cómputo con características de producto ecológico. (...) Implementar una política de reducción de uso de papel en el Estado utilizando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*”<sup>260</sup>.

---

<sup>258</sup> <http://www.dinero.com/pais/articulo/en-empresas-papel-pasa-moda/181584>

<sup>259</sup> SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. El acto administrativo. *Teoría general*, 2004, vol. 2, Bogotá, Legis, 2004, p. 278.

<sup>260</sup> DECRETO 2693 de 2012, artículo 6, numeral tercero.

Concomitantemente, resulta importante resaltar, que estos cambios derivan en la reducción de los recorridos que tienen que hacer los usuarios de las administraciones públicas para relacionarse con la administración misma. Es decir, cada recorrido en general se deriva en la utilización de medios de transporte, los cuales emiten CO<sub>2</sub> al ambiente, contribuyendo así al calentamiento global. Si bien es cierto, nuestro País está por debajo del promedio mundial y muy alejado de los valores que se han registrado en otros continentes, está generando el 0,37% de dióxido de carbono al planeta (180.008,18 Gigagramos) del total emitido en el mundo (49 gigatoneladas).<sup>261</sup>, esa cifra se puede reducir con el compromiso en muchos planos, en los que el Estado es el principal obligado a enfrentar estos retos con estrategias y compromiso.<sup>262</sup>.

Recordemos que La Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, en su artículo 3, en relación a los propósitos del Estado durante el cuatrienio 2010-2014, reza: *“Una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y el desarrollo cultural sean una prioridad y una práctica como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones”*. Como uno de los ejes transversales para la prosperidad general. Cabe resaltar que en la cumbre mundial sobre el calentamiento global XXI Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, también conocida como Conferencia de las Partes (COP21) que se celebró en París con mandatarios de 150 países, nuestro Jefe de Estado se comprometió a reducir las emisiones de nuestro Estado en un 20 por ciento para el 2030<sup>263</sup>.

De esta manera, debemos decir que esa sostenibilidad ambiental se debe lograr cambiando el manejo indiscriminado de papel. Un ejemplo comprobable, nace del hecho que las

---

<sup>261</sup> Estadísticas encontradas en: <http://www.cambioclimatico.gov.co/gases-de-efecto-invernadero>

<sup>262</sup> Para el Ministro de ambiente, Gabriel Vallejo López: aunque nuestro País no está entre los países que genera mayor emisión de gases efecto invernadero, mencionó que a finales del 2015, la meta de todos los países del mundo, es contribuir a frenar el cambio climático y evitar las consecuencias "catastróficas" que implicaría el sobrepaso de los 1.5 o dos grados centígrados de aumento de la temperatura global. Noticia tomada en: <http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/minambiente-explica-compromiso-reducir-2030-gases-efecto-invernadero>

<sup>263</sup> Noticia tomada del portal: <http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/cop-21-camo-afecta-a-colombia-el-cambio-climatico/16443163>

entidades públicas no solo usan el papel para uso externo, sino para el interno, debido a que se utiliza información impresa para poder archivar el denominado “recibido”, como mecanismo de respaldar las actuaciones de los mismos funcionarios de las dependencias, en los eventos en que sea necesario justificar alguna actuación.

El 14 de julio de 2011, el Documento Conpes 3700 esboza, la Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia, para ello, desarrolla acciones coordinadas frente a los retos del cambio climático, con lo cual, se plantea: *“la puesta en marcha conjunta de políticas, planes y programas para reducir la deforestación y que al mismo tiempo ayuden a mantener la integridad ecosistémica asegurando la provisión de servicios ambientales”*.<sup>264</sup>

Justamente, el Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional de la República de Colombia 2012- 2015 bosqueja que *“El planeta entero ha tornado su atención en los temas ambientales, buscando sostenibilidad en el manejo de los recursos y la tecnología no es ajena a esta situación, incluso puede ser un elemento que potencialice la obtención de resultados. Por esta razón la gestión de tecnología en la entidad, durante todo el proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, debe inclinarse por soluciones que impactan de forma positiva el ambiente”*<sup>265</sup>.

Ahora bien, en la estrategia de crecimiento verde, se reconoce como reto para el país, la adaptación al cambio climático, *“Artículo 157. Deforestación de bosques naturales. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaborará una política nacional de lucha contra la deforestación que contendrá un plan de acción dirigido a acabar la pérdida de bosques naturales para el año 2030. Esta política incluirá previsiones para vincular de manera sustantiva a los sectores que actúan como motores de deforestación, incluyendo las cadenas productivas que aprovechan el bosque y sus derivados (...) Artículo 161. Registro*

---

<sup>264</sup> Documento Conpes 3700, julio de 2011.

<sup>265</sup> Estrategia Gobierno en línea 2012 – 2015 para el orden nacional y 2012 – 2017 para el orden territorial disponible en: <http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-3.1.pdf>, p. 19



*Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Créase el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), del cual hará parte el Registro Nacional de Programas y Proyectos de acciones para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal de Colombia –REDD (...) el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a su vez reglamentará el sistema de contabilidad de reducción y remoción de emisiones y el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional y definirá los niveles de referencia de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal”*<sup>266</sup>. Artículos estos, del Plan nacional de desarrollo 2014-2018, que propenden por un mejor trato al planeta y la vida, la que todos tenemos y es solo una.

Es relevante señalar, que frente al ahorro del papel, es decir, suprimir su uso, el servidor público y el operador de justicia, tendrán beneficios en materia de salud pública, pues, menos afecciones a su organismo, al no seguir exponiéndose a hongos, bacterias, infecciones respiratorias, de piel, de visión, de columna, por los excesivos pesos a cargar, etc. Igualmente, la optimización del tiempo para la realización de las tareas propias al cargo que ostente, verbo y gracia de ellos son los servicios electrónicos para el manejo documental, los cuales han incrementado la productividad de forma significativa para la Superintendencia de Sociedades<sup>267</sup>.

En este orden de ideas, algunos autores dan cuenta de la situación actual de conformidad con la naturaleza escrita del proceso contencioso administrativo<sup>268</sup>.

---

<sup>266</sup> Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 art. 157 y 161.

<sup>267</sup> <http://www.dinero.com/pais/articulo/en-empresas-papel-pasa-moda/181584>

<sup>268</sup> Con relación a la implementación del llamado sistema oral en el contencioso administrativo, el profesor Juan Carlos Galindo Vácha asevera que: “*debió considerarse la naturaleza de los expedientes en lo contencioso administrativo, que están formados por documentos, papel, por kilos y kilos de papel; en efecto, los expedientes surgen de las actuaciones administrativas que conducen a los actos administrativos, de los contratos estatales, y de todos los soportes derivados de los hechos de la administración, son documentos, documentos y más documentos. Algunos expedientes son gigantescos, cuentan con muchos cuadernos y folios, y para estudiarlos y fallarlos se requiere leer cientos de páginas (...)*”, disponible en Derecho Procesal Administrativo, Tomo I, 3ra edición, Pontificia Universidad Javeriana, Temis, Bogotá, 2013, p. 81.

## 1.9 Garantías sujetas a la responsabilidad del Estado en la utilización de los medios electrónicos, o en el mal funcionamiento de los mismos.

Según el diccionario de la RAE, el concepto de garantía es: *“Efecto de afianzar lo estipulado; Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad; Seguridad o certeza que se tiene sobre algo.”* Así mismo, la garantía, por antonomasia, es fundamento del Estado social de Derecho, siendo el estamento público, el obligado a dar ejemplo de ello.

Una interesante percepción del asunto, es la que enuncia Kaufman, quien critica de forma clara, las faltas producto de las acciones u omisiones, por parte del Estado y si éstas no se corrigen, la proclive aptitud/actitud, por lo debido, aun en el mundo de las tecnologías al servicio de la sociedad, se reflejarán: *“Los gobiernos electrónicos son espejos de los gobiernos reales. No constituyen manifestaciones virtuales fantásticas desconectadas; aunque en ese sentido exista toda una creencia (sostenida por intereses empresariales). Lo que anda mal en la realidad de las organizaciones no tendrá un resultado feliz en el campo de lo virtual; lo que es igual; que decir que: un buen gobierno puede tener un buen o mal gobierno electrónico o no tenerlo en absoluto; y, al mismo tiempo, un mal gobierno jamás podrá tener un buen gobierno electrónico fuera de lo que es un portal diseñado a “todo lujo”: primer efecto de encandilamiento que luego, al ingresar, producirá frustración por sus incongruencias, inmensa dificultad para obtener información valiosa y fórmulas auto-referenciadas a sus gobernantes”*<sup>269</sup>. La crítica se apuntala en el escenario de lo político y confronta decididamente, los criterios de buen o mal gobierno sea en un plano o el otro.

Categoricamente y siguiendo a Kaufman, Chavarro, realiza su análisis sociológico, así: *“Tales prácticas, son muchas veces páginas web puestas al servicio de la ciudadanía, las cuales, están simplemente enmarcadas en un espacio virtual de poca utilidad con pobre*

---

<sup>269</sup> KAUFMAN, Esther. *“Panorama Latinoamericano de Gobiernos Electrónicos Modelos Existentes”* en Segundo Congreso Argentino de Administración Pública. Sociedad, Estado y Administración p. 3 disponible en <http://esterkaufman.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/panorama-latinoamericano-de-gobierno-electronico.pdf>

*información que termina por no ser de utilidad, publicando “información sin realizar el verdadero esfuerzo de interacción real con los ciudadanos”<sup>270</sup>.*

Por su parte, Zambrano Cetina, afirma: *“Por eso se limitan los textos a señalar sencillas reglas que orienten la utilización de dichos medios en las actuaciones administrativas haciendo énfasis en todo caso en la protección de los derechos de las personas y en la especial responsabilidad que tiene el Estado para garantizar las condiciones de seguridad, autenticidad, integridad y disponibilidad propios a esta temática”<sup>271</sup>.* El autor en comento, señala una problemática particular, la inutilidad y limitación de los medios electrónicos, por parte de las entidades, no solo públicas, también, pertenecientes al sector privado. Suelen ser éstos, los medios electrónicos, vistos como una pieza decorativa, de vistoso color e interesantes anuncios, pero no se muestran como el instrumento válido que coadyuva en la resolución de inquietudes y servicios, por parte del usuario o contribuyente.

El uso de los medios electrónicos, en el espacio judicial, generan expectativas que confrontan el principio de la buena fe y el de la confianza, de la cual es depositario el Estado, por parte del usuario. Por tal, el uso de las tecnologías, han de conducir a la tranquilidad de los asociados. Pues, de lo contrario, se tendría como resultado una defraudación de la confianza legítima.

Al respecto, La Honorable Corte Constitucional, en el caso de la utilización de medios electrónicos en la administración de Justicia hace mención al principio de la buena fe, pues: *“atendiendo al principio constitucional de buena fe, los ciudadanos han de poder depositar en la información suministrada por las autoridades judiciales a través de los diversos medios que éstas utilicen para dar a conocer sus actuaciones y decisiones, máxime cuando dichas autoridades no realizaron ninguna advertencia previa en sentido contrario. Confianza sin la cual la implementación de estos nuevos medios informáticos, con la*

---

<sup>270</sup> CHÁVARRO, Luis Alfonso. *Tecnología, sociedad e información: una aproximación sociológica a las implicaciones sociales de las tecnologías de información y comunicación*. Universidad del Valle, Programa Editorial, 2008, p. 55.

<sup>271</sup> ZAMBRANO CETINA, WILLIAM, *Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011*, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p.73.

*considerable inversión de dinero y tiempo de trabajo de los funcionarios encargados de alimentarlos, pierde su razón de ser*”<sup>272</sup>. Lo que nos lleva a concluir que si existiría dicha defraudación a la confianza legítima, si hay lugar a afectación al patrimonio. En este caso el del usuario perjudicado.

## **Conclusiones de capítulo**

El derecho al acceso a la administración de justicia en procura de lograr lo que se denomina en el derecho contemporáneo, la tutela judicial efectiva debe, garantizarse tanto para procedimientos judiciales de naturaleza escrita, como para procesos de naturaleza electrónica. Así las cosas, el Estado debe seguir enfilando esfuerzos en garantizar la igualdad real en el acceso a la red, además de blindar estas herramientas de seguridad informática, para la protección de datos, y mala utilización de los mismos por parte de terceros para salvaguardar la seguridad jurídica.

Se torna muy importante mejorar el conocimiento de formación a nivel de funcionarios públicos y administradores de justicia, en procura de darle plena aplicación a los medios electrónicos en beneficio del cumplimiento de las funciones administrativas y de justicia. Para lograr estos cambios, resulta primordial la formación de profesionales desde la academia enfocando la aplicación de las tecnologías de la información a los procedimientos administrativos y de justicia.

El estado debe destinar esfuerzos en la asignación de recursos para el uso de medios electrónicos dentro del procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativo. De la misma forma, el compromiso ecológico, debe estar primeramente en cabeza del Estado respaldado en los mandatos que en la Carta Magna encontramos para la preservación del medio ambiente, políticas como la reducción del papel e implementación del proceso judicial electrónico.

---

<sup>272</sup> Sentencia T-686/07 31 de agosto de 2007 M. P. Jaime Córdoba Triviño.

## **CAPITULO II RETOS EN EL USO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN EL MARCO DE LA LEY 1437 DE 2011, CON MIRAS AL LITIGIO JUDICIAL EN LÍNEA: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.**

Para introducirnos en el debate, hay un elemento válido a señalar: el CPACA, en sus dos partes habla de implementar los medios electrónicos, tanto para la administración pública, como para la de justicia. En cuanto a la primera, hay significativos avances; en cuanto a la segunda, la situación toma un matiz diferente, toda vez, que existe un término perentorio para la implementación, en este caso, del expediente judicial electrónico.

Esta parte segunda denominada Organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de sus funciones jurisdiccionales y consultiva, en el código entrado en vigencia, el CPACA, no tiene principios delimitados especificados, pues para ello se recurre a los principios constitucionales como axiomas que resulten aplicables en garantía de los derechos fundamentales de las personas<sup>273</sup> y los del derecho procesal.

La realidad de los procesos que se surten en la jurisdicción contencioso administrativa, nos muestra, que muchos de éstos, se tardan de 10 a 15 años en ser resueltos. Tiempo suficiente para generar volúmenes de carpetas y archivos innecesarios, hoy día, si asumimos los medios electrónicos como la opción saludable, ecológica y económica, en concordancia con el plan nacional de desarrollo 2014-2018.

### **2.1 El expediente judicial electrónico planteado en la Ley 1437 de 2011 como cimiento del litigio en línea en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.**

Para el académico Gustavo Quintero Navas, el expediente judicial electrónico se define: *“como la recopilación de las actuaciones de los sujetos procesales y las providencias judiciales recogidas en medios electrónicos, junto con los documentos electrónicos que se*

---

<sup>273</sup> GALINDO VÁCHA, Juan Carlos, Derecho Procesal Administrativo, tomo I, 3ra edición, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Temis, Bogotá, 2013, p.16

*presentan ante la Administración de Justicia bajo el radicado de una misma causa.*”<sup>274</sup>. Bajo esa óptica, el expediente judicial electrónico<sup>275</sup>, es apenas uno de los elementos con los que se podría construir un proceso administrativo judicial electrónico, en el que las actuaciones no se limiten al uso de documentos electrónicos, sino que todas las actuaciones judiciales independientemente de su naturaleza, se enmarquen dentro del uso de medios electrónicos, en pro de la eficacia de la administración de justicia.

Justamente, en cuanto al principio de separación de poderes, cada una de las ramas del poder público, tienen sus formas propias, más los mecanismos de organización destinados a conseguir sus objetivos<sup>276</sup>. En la misma medida, según la Carta Fundamental, si bien es cierto, estos órganos tienen funciones separadas, deben contribuir a la realización de los fines del Estado unitario, el cual es regido, por una misma Constitución y leyes.

De conformidad con el art. 186 del CPACA, podemos hablar de un proceso judicial electrónico, el cual debe tener las mismas características del proceso judicial de naturaleza escrita u oral. Este proceso, debe continuar con los pasos propios de su naturaleza procesal, mediante una serie de actos, *“ejecutados por las partes y el juez que atienden al fin común que es la sentencia”*<sup>277</sup>, solo que de forma electrónica en consonancia con el uso de medios electrónicos. Recordemos que la ley de motivos planteó acerca de la utilización de medios electrónicos en el proceso judicial, lo siguiente: *“A su vez, para aprovechar estos recursos, desde la perspectiva de la información que envían los usuarios de la Jurisdicción*

---

<sup>274</sup> QUINTERO NAVAS, Gustavo. Contencioso Administrativo y medios electrónicos: un gran paso hacia la modernización del ejercicio de la justicia administrativa, Revista de Derecho, comunicaciones y Nuevas Tecnologías N° 6, Universidad de los Andes, Diciembre de 2011, p.9.

<sup>275</sup> Ley 1437 de 2011, Artículo 186. *Actuaciones a través de medios electrónicos*. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.

Parágrafo. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para que en un plazo no mayor de cinco (5) años, contados a partir de la vigencia del presente Código, sea implementado con todas las condiciones técnicas necesarias el expediente judicial electrónico, que consistirá en un conjunto de documentos electrónicos correspondientes a las actuaciones judiciales que puedan adelantarse en forma escrita dentro de un proceso.

<sup>276</sup> RODRÍGUEZ, Libardo. La estructura del poder político en Colombia. *Editorial Temis, Bogotá*, 2011. p. 1

<sup>277</sup> ALSINA, Hugo, Fundamentos del derecho procesal, volumen 4, México, editorial jurídica universitaria, 2003, p. 171.

*Contenciosa Administrativa, se dispuso en el artículo 181 que todas las actuaciones judiciales que puedan surtirse en forma escrita, se podrán realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando estén rodeadas de las necesarias seguridades para garantizar su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta y que las autoridades judiciales cuenten con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida por este medio. Esto obliga a que se lleven a cabo desarrollos tecnológicos que permitan utilizar adecuadamente estos avances con plena garantía para los usuarios sobre la seguridad jurídica de estas actuaciones”<sup>278</sup>.*

En perspectiva, resulta positivo que se estén dando avances para desmaterializar el contenido de los expedientes en los procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Pues, es importante entregar a los usuarios las herramientas que generen eficiencia, efectividad y rapidez, en sus actuaciones, el doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, considera: *“Durante los últimos años el país ha venido desarrollando drásticas modificaciones a leyes procesales existentes para mejorar la eficacia de la justicia, otorgándole prioridad a los principios de inmediación, celeridad y economía procesal”<sup>279</sup>*, lo cual deriva en la consolidación del Proceso judicial electrónico.

Su importancia radica, que la Administración de Justicia es diferente a la Administración pública. Así las cosas, se le debe dar un manejo que no solo este orientado a administrados, sino a profesionales del derecho, ejerciendo dentro de un plano virtual, el cual debe proporcionar los espacios y herramientas para desarrollar las competencias requeridas.

En el análisis del Expediente Judicial electrónico cobra relevancia que los parámetros de los que no hizo mención la Ley 1437 de 2011, como la utilización de firmas digitales, se soporta conforme al principio de equivalencia funcional, nos podemos remitir a la Ley 527 de 1999, y al C.G.P. Además, cuando entre a regir este último hay remisión a la Ley del 99.

---

<sup>278</sup> Proyecto de ley número 198 de 2009, Exposición de motivos.

<sup>279</sup> PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo, Octava Edición, Medellín, Librería Jurídica Sánchez, 2013. P. 5.

El Código General del Proceso, nos habla en su artículo 103 que aparte de formar y gestionar expedientes digitales, se permita el litigio en línea, haciendo el uso obligatorio de estas tecnologías por los despachos judiciales de manera gradual. Asimismo, para el Presidente de la República, durante la sanción en la Casa de Nariño de este código, el 12 de julio de 2012 menciono: *“Ya era hora de que llegara el siglo XXI a los despachos judiciales. A través del Plan de Justicia Digital vamos a tener, muy pronto, litigio en línea y expedientes digitales, que replacen ese arrume de papeles que son la pesadilla de todos los juzgados”*.

Nótese, que contrario a lo establecido por el acuerdo Acuerdo No. PSAA14-10215<sup>280</sup>, el software de Justicia XXI Web el cual fue adecuado para que los despachos puedan cumplir

---

<sup>280</sup> ARTÍCULO 2 Realizar la implementación del sistema de información de gestión de procesos y manejo documental (Justicia XXI) a una plataforma de ambiente WEB, así:

Tener Implementado en los distritos judiciales de Barranquilla y Manizales para febrero de 2015.

Tener Implementado en los distritos judiciales más apartados y de difícil acceso para el primer semestre de 2015 así:

- o Distrito judicial de San Andres – San Andres
- o Distrito judicial de Florencia – Caquetá
- o Distrito Judicial de Valledupar – Cesar
- o Distrito judicial de Sincelejo – Sucre
- o Distrito judicial de Mocoa – Putumayo
- o Distrito judicial de Pasto – Nariño
- o Distrito judicial de Montería – Córdoba
- o Distrito judicial de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal – Boyacá
- o Distrito judicial de Villavicencio – Meta

Tener Implementado en el segundo semestre de 2015 en los Distritos Judiciales:

- o Distrito judicial de Cundinamarca
- o Distrito judicial de Popayán – Cauca
- o Distrito judicial de Quibdó – Chocó
- o Distrito judicial de Riohacha – Guajira
- o Distrito judicial de Cúcuta y Pamplona – Norte de Santander
- o Distrito judicial de Arauca – Arauca
- o Distrito judicial de Santa Marta – Magdalena
- o Distrito judicial de Cartagena – Bolívar

Tener Implementado en el primer semestre de 2016 en los Distritos judiciales:

- o Distrito judicial de Antioquia
- o Distrito judicial de Neiva – Huila
- o Distrito judicial de Ibagué – Tolima
- o Distrito judicial de Cali y Buga – Valle
- o Distrito judicial de Armenia – Quindío
- o Distrito judicial de Pereira – Risaralda
- o Distrito judicial de Bucaramanga y San Gil – Santander



con uno de los lineamientos del Código General del Proceso como las creación de los expedientes electrónicos, la notificación electrónica y la consulta de procesos en internet, limitadamente “*está instalado en los computadores de los despachos en San Andrés, Sucre, Baranoa y Barranquilla, dos municipios del Valle, once de Caldas (sin incluir a Manizales) y cinco de Córdoba, pero no Montería. según ha reconocido la misma Judicatura*”<sup>281</sup>. Cifras<sup>282</sup> estas, que preocupan para el establecimiento del expediente judicial electrónico, lo cual estaría en contravía del uso masivo de medios electrónicos ante la justicia administrativa.

Un ejemplo de presentación de demanda por medios electrónicos como referente para el proceso judicial electrónico, la encontramos en el proceso que se lleva a cabo en la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual, en su facultad de ejercer función jurisdiccional en la resolución de controversias, pone a disposición de los usuarios el instrumento por medios electrónicos, para demandar la protección del consumidor jurisdiccional. Con el fin, que en ocho (8) pasos, se tenga fácil acceso e interacción con la plataforma. Presentándose la demanda, incluyendo datos de: demandante, demandado, reclamo directo, protección que se requiere, pretensiones, fundamentos en derecho, pruebas y notificaciones.

Resulta importante, entonces, establecer, que el éxito con que se lleve a cabo la real implementación del expediente judicial electrónico dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, será un paso decisivo para el ideal de llevar a cabo un verdadero litigio en línea en los términos que ha fijado el Código General del Proceso.

---

o Distrito judicial de Medellín – Antioquia

o Distrito judicial de Bogotá D.C.

<sup>281</sup> <http://www.eltiempo.com/politica/justicia/comienzo-de-la-justicia-oral-en-colombia/16444744>

<sup>282</sup> De los 4.661 despachos que hay en todo el país, esas regiones con expediente en línea abarcan solo 255 juzgados, donde ya se han colgado en la red 56.870. En cuanto a la cobertura a internet, el 45 por ciento de esos juzgados en Colombia (2.546) no están conectados, y de los 1.096 municipios, los juzgados del 75 por ciento (821 municipios) no tienen cobertura. Información suministrada en el portal: <http://www.eltiempo.com/politica/justicia/comienzo-de-la-justicia-oral-en-colombia/16444744>

## **2.2 De la desmaterialización de expedientes conforme a la utilización de los medios electrónicos contenidos en la Ley 1437 de 2011.**

El extravío o hurto de papeles de los expedientes ya no será problema, toda vez que, al estar digitalizados, no serán materia de sustracción por los usuarios. Pues, muchas veces se han presentado casos en los que ante la pérdida de un proceso, ya sea, por remisión entre distintos despachos judiciales u sustracción indebida de los procesos, se debe recurrir a la denominada reconstrucción del proceso, la cual solo contribuye a extender el tiempo para proferir un fallo judicial, desgastando el aparato jurisdiccional, sumada al aumento de desconfianza en los usuarios, en el ideal que se resuelvan sus conflictos para lo cual recurren a la Administración de Justicia .

El expediente judicial electrónico al ser el conjunto de documentos electrónicos coligados a un procedimiento judicial<sup>283</sup>, se conservará todo el tiempo, a diferencia del expediente físico, el cual, al ser manipulado por funcionarios de la administración de justicia, o los mismos usuarios de los procesos administrativos, se va desintegrando, hecho que desemboca en la pérdida de tiempo a los funcionarios de la administración de justicia, en el arreglo físico de los mismos.

Recordemos también que para el archivo de documentos se requiere destinar grandes volúmenes de espacio para su almacenamiento, limitando su consulta de manera a la forma física presencial por una persona. Con el uso eficiente del expediente judicial electrónico, la información o documentos electrónicos pasarían a ser almacenados en dispositivos electrónicos, cuya consultar no requerirá de una presencia física, y simultáneamente está disponible para los que quieran examinar el expediente.<sup>284</sup>

En desarrollo de este argumento, no menos cierto es, que la disminución de usuarios en las barandas de los despachos judiciales también contribuirá, a mejorar la distribución de las

---

<sup>283</sup> Cumbre Judicial Grupo Tecnologías de la información XVII edición [http://www.cumbrejudicial.org/c/document\\_library/get\\_file?p\\_l\\_id=151884&folderId=756940&name=DLFE-6159.pdf](http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=151884&folderId=756940&name=DLFE-6159.pdf)

<sup>284</sup> Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina, p. 39.

horas laboradas que implican una mayor productividad a la hora de realizar sus labores asignadas por la ley. La realidad cotidiana en los despachos judiciales a nivel nacional, constituye un reto a superar, con la llegada de los medios electrónicos en este espacio estatal de justicia.

De igual forma, el expediente judicial electrónico, aprovechando su función de estar disponible en la web para los usuarios, debe estarlo para los operarios de la misma. Pues podrá el juez acceder a dichos documentos electrónicos ya sea desde su despacho, o desde cualquier parte remota para su visualización, o por ejemplo, en el caso que el administrador de justicia este proyectando una sentencia desde su hogar, en otra ciudad o incluso en otro país, pueda acceder a la información con los respectivos procesos de identificación, e incluso poder manipular el expediente con la interposición de etiquetas que le permitan anotar información de relevancia, como ocurre actualmente con el expediente en físico, al cual se le cuelgan papeles pequeños externos indicando algún dato o hecho importante o escribiendo sobre esos papeles información relevante que le pueda servir al administrador de justicia, tanto para el manejo del expediente, o para su posterior sentencia.

Resulta importante, destacar la aplicación de los horarios para consultar y llevar un mejor control de los procesos judiciales ante el contencioso administrativo, pues la accesibilidad, pasa de ser limitada a poder ser revisada, los 7 días de la semana, las 24 horas. Desde nuestra perspectiva los usos de los medios electrónicos en la administración de justicia son importantes porque se convierten en una verdadera herramienta de consulta, mejorando así el interés e interacción en las etapas procesales.

En ese sentido, podemos decir que el artículo 206 del CPACA, pudo ser más ambicioso, y no solo ceñirse al apoyo que deben prestar los funcionarios judiciales a los usuarios en el manejo de herramientas tecnológicas de las que se dispongan en cada oficina<sup>285</sup>, Sino mencionar, que cada juzgado posea un número suficiente de herramientas al acceso del público.

---

<sup>285</sup> Ley 1437 de 2011, artículo 206. Deber de Colaboración. *Los empleados de cada despacho judicial deberán asistir y auxiliar a los usuarios en la debida utilización de las herramientas tecnológicas que se dispongan en cada oficina para la consulta de información sobre las actuaciones judiciales.*

Esto, direccionando al sistema judicial como finalidad, la de utilizar medios electrónicos y dejar atrás la inveterada costumbre de consulta, a través de los medios escritos tradicionales. Además, nos hubiese gustado establecer que el Estado garantizase el funcionamiento de estos equipos electrónicos, así como lo debe hacer para mantener las sedes electrónicas o el expediente judicial electrónico, pues de nada sirve poner a disposición la tecnología, y que la misma no esté en condiciones de ser manipulada por encontrarse sin funcionamiento.

Al ser reconocida personería judicial a los apoderados, estos tendrán acceso al sistema y al expediente judicial electrónico, ya sea para revisar, presentar escritos o recursos por medio de unas claves especiales que permitirán un acceso limitado al proceso. Pues, si bien es cierto, la publicidad es uno de los principios contemplados en el CPACA, en este punto solo incumbe a las partes el conocimiento de los trámites que tenga el proceso, eso en atención a la privacidad que se debe mantener. Pero que el resultado de las acciones que éstas tengan, se conocida por los demás intervinientes. Es decir, mediante códigos electrónicos, asignados a cada proceso, se pueda realizar tal actividad procesal.

### **2.3 Del Derecho de toda persona al acceso a la administración de justicia por medio del procedimiento judicial electrónico, que se desprende de la segunda parte de la Ley 1437 de 2011.**

La ley es *erga omnes*. Tanto en derechos como en deberes. La dinámica dual de esta fórmula ius-social, obliga a las partes a un compromiso que debe ser garantizado en su aspecto positivo, por la norma. En el caso en cita, la implementación del expediente judicial electrónico que se desprende del artículo 186 del CPACA<sup>286</sup>, está sujeto a la sentencia antes

---

<sup>286</sup> Ley 1437 de 2011, artículo 186: actuaciones a través de medios electrónicos. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.

PARÁGRAFO. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para que en un plazo no mayor de cinco (5) años, contados a partir de la vigencia del presente Código, sea

barruntada, por lo que resulta de interés, analizar, de qué manera el Estado ha de cumplir su parte, la de garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos, a través de esta novísima metodología.

Contemplado en el artículo 229 de la Constitución nacional,<sup>287</sup> el doctor Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta, en torno a este derecho fundamental, señala: *“implica desde un punto de vista institucional el establecimiento de una organización permanente que, de acuerdo con los componentes de la política judicial del Estado y las regulaciones que se expidan sobre el particular, coloque a disposición de los administrados opciones de dispensa de justicia según las diversas necesidades que surjan al respecto”*<sup>288</sup>.

Para el mismo catedrático, este derecho desde una visión de efectividad, *“supone la regulación de instrumentos o mecanismos que le permitan a los asociados acceder oportunamente a las autoridades judiciales para obtener la definición de los asuntos que puedan afectarlos, lo cual implica la expedición de regulaciones mediante las cuales se establezcan las previsiones y exigencias requeridas para hacer viable la puesta en funcionamiento del aparato judicial del Estado”*<sup>289</sup>.

En ese sentido, autores como el Exconsejero de Estado, Libardo Rodríguez<sup>290</sup> y la doctora Rocío Araujo Oñate<sup>291</sup>, hacen mención al derecho a la tutela judicial efectiva en busca de una protección más progresiva de derechos, la cual se concreta especialmente en el derecho al acceso a la administración de justicia para lograr una decisión judicial, que sea ejecutada

---

implementado con todas las condiciones técnicas necesarias el expediente judicial electrónico, que consistirá en un conjunto de documentos electrónicos correspondientes a las actuaciones judiciales que puedan adelantarse en forma escrita dentro de un proceso.

<sup>287</sup> Constitución Política de Colombia art. 229 Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia.

<sup>288</sup> OSTAU DE LAFONT PIANETA, Rafael Enrique Justicia Administrativa e implicaciones de la jurisdicción rogada y de la teoría de los motivos y finalidades. En XXVIII congreso colombiano de derecho procesal, Universidad libre, Bogotá, 2007, p.324.

<sup>289</sup> Ibídem.

<sup>290</sup> RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Libardo, Acciones, pretensiones y recursos contencioso-administrativos: precisiones conceptuales y su relación con la tutela judicial efectiva Derecho Procesal Administrativo modernización del Estado y territorio. Estudios en homenaje a Augusto Hernández Becerra, Ibáñez, Bogotá, 2014, p. 345 y ss.

<sup>291</sup> ARAUJO-OÑATE, Rocío Mercedes, “Acceso a la justicia efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado”, Revista Estudios Socio Jurídicos, 2011, 13,(1), p. 254 y ss.

y que tenga plena efectividad en derecho respaldada por el debido proceso en las actuaciones judiciales. Recordemos que La tutela judicial efectiva, se conocía tradicionalmente como derecho de acción<sup>292</sup>, En esa línea, la honorable Corte Constitucional Colombiana ha definido la tutela judicial efectiva en los siguientes términos: *“comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo”*<sup>293</sup>.

Así las cosas, es claro como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, la vinculación entre el derecho de toda persona para acceder a la administración de Justicia con el derecho fundamental al debido proceso. *“La determinación del objetivo de la modificación a la segunda parte del actual Código Contencioso Administrativo, conduce indefectiblemente a la búsqueda de la tutela judicial efectiva, derecho con rango constitucional fundamental conforme lo han reconocido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, entendido de una parte como el derecho de toda persona a acudir a la administración de justicia y obtener de ella una respuesta de fondo motivada y adecuada a las fuentes del derecho y a las pretensiones formuladas, de manera autónoma, independiente e imparcial y dentro de un plazo razonable y de otro lado, como el deber del Estado de prestar un servicio público continuo, eficiente y eficaz en este ámbito”*<sup>294</sup>.

La seguridad se convierte entonces, en una estructura consistente, que responde a la necesidad de garantizar las actuaciones a través de medios electrónicos, de los que habla el artículo 186 del CPACA. El éxito de conseguir la seguridad tecnológica de los medios

---

<sup>292</sup> DEVIS ECHANDIA, Hernando, Compendio de derecho procesal. Tomo I, Bogotá, ABC, 1972, p.155 define la acción como un, *“derecho público cívico, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto, mediante una sentencia, a través de un proceso”*.

<sup>293</sup> Corte Constitucional, sentencia C-180 DE 2014.

<sup>294</sup> CORREA PALACIO, Ruth Stella. “Fundamentos y Objetivos de la Reforma del Libro Primero del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en Memorias del Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ley 1437 de 2011, Contraloría General de la República, Consejo de Estado, Bogotá D.C., 2011, p. 79.

electrónicos planteado por la norma citada, se dirigen a lograr la consecución de la seguridad jurídica en los procesos litigiosos.

#### **2.4 La descongestión judicial en el proceso judicial administrativo como uno de los objetivos en la implementación de los medios electrónicos en el CPACA.**

La congestión judicial en el contencioso administrativo colombiano, es un tema del que se viene hablando hace ya varios años. Este fenómeno social-institucional de la rama judicial afecta la prestación eficiente del servicio y, la apreciación que tienen los ciudadanos de la misma, resulta ser la menos favorable. En este punto, ha habido unanimidad y consenso en las salidas o mecanismos que eviten la consecución de una parálisis institucional, la cual podría derivar en una violación del derecho fundamental del acceso a la administración de justicia<sup>295</sup>, pues el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, y se logra no solo con la presentación de unas pretensiones procesales, sino cuando el juez, analizadas las pruebas llega a un libre convencimiento aplicando la Constitución y la Ley<sup>296</sup>.

De esta manera, la administración de justicia en cabeza del Estado debe garantizarle a quienes esperan la resolución de un proceso de forma diligente y oportuna<sup>297</sup>, dentro de unos plazos razonables. Pues una decisión tardía estaría constituyendo en si una injusticia, que está en contra de unas de las funciones primordiales del Estado conforme al estatuto 270 de 1996: la celeridad<sup>298</sup>.

De estos análisis se extrae que la congestión se presenta, como lo ha manifestado el académico Restrepo Medina: *“porque los despachos judiciales producen una cantidad inferior de egresos a los ingresos que reciben en un periodo de tiempo, lo cual hace que*

---

<sup>295</sup> Estrategias para la descongestión en lo contencioso administrativo: Proceso modelo y Proceso testigo, Colección Reformas en la rama judicial, 2006, p. 15 y ss.

<sup>296</sup> Corte Constitucional Sentencia C-037 DE 1996.....

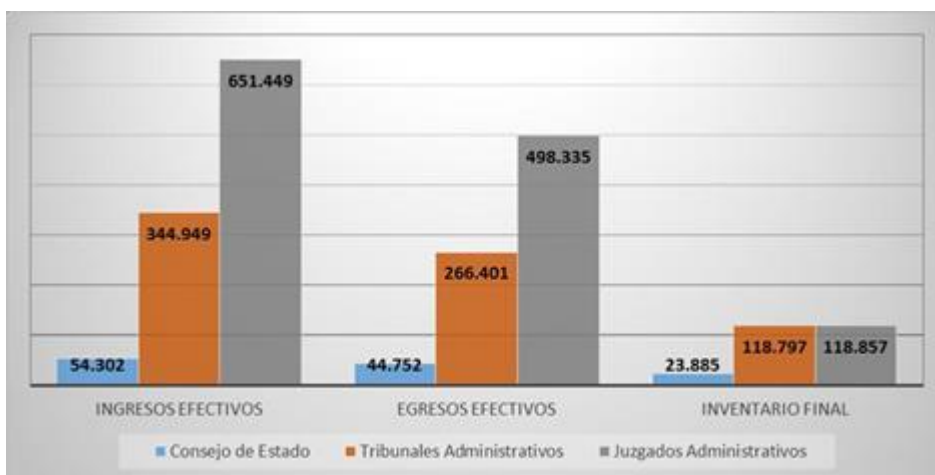
<sup>297</sup> La Corte Constitucional hace mención a la noción de plazo razonable surgida en los deberes del estado y los derechos de los ciudadanos que acceden a la justicia. Ver Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-297.

<sup>298</sup> Estrategias para la descongestión en lo contencioso administrativo: Proceso modelo y Proceso testigo, Colección Reformas en la rama judicial, 2006, p. 21.

*cada vez su carga sea mayor frente al inventario del inicio del respectivo periodo y que como consecuencia la duración de los procesos progresivamente se incremente.*”<sup>299</sup> En ese orden de ideas resulta de interés mencionar que según el CEJA, La tasa de litigiosidad, en materia contencioso administrativa, en primera instancia para el año 2010, era la más alta a nivel latinoamericano<sup>300</sup>.

A continuación, la gestión judicial de los años 2010 a 2013 en la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo Colombiana, está representada en una gráfica que contiene los valores de los ingresos y egresos efectivos para determinar el inventario final de los procesos tramitados. Para ello, se discriminan los valores de Consejo de Estado, de Tribunales Administrativos y de Juzgados Administrativos.

Gráfica No. 1: Gestión Judicial Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo<sup>301</sup>



Fuente: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (SIERJU)

De las cifras previamente citadas, se extrae que la acumulación del denominado inventario final año tras año, nos impulsa a darle relevancia a los mecanismos que permitan mejorar o

<sup>299</sup> RESTREPO MEDINA, Manuel Alberto, Estudio regional de la congestión en la jurisdicción administrativa, Bogotá, PNUD, 2011, 263-283, p. 265.

<sup>300</sup> En el informe: *Los sistemas de justicia no penal en américa latina: estructura e información de la justicia civil-mercantil, laboral, de familia y contencioso administrativa* del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) disponible en: <http://www.cejamericas.org/index.php/dialogo-nueva-justicia/generacion-de-informacion-estadistica-en-materias-no-penales.html>

<sup>301</sup> Gráfica número 13 del *Plan Sectorial de desarrollo Rama Judicial 2015 – 2018* disponible en: [https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1513685/5113559/Plan\\_Sectorial\\_de\\_Desarrollo\\_Rama\\_Judicial\\_2015-2018+\(3\).pdf/a7b785e1-fb02-4ff6-905b-c16ac93df312](https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1513685/5113559/Plan_Sectorial_de_Desarrollo_Rama_Judicial_2015-2018+(3).pdf/a7b785e1-fb02-4ff6-905b-c16ac93df312)



permitir un cambio representativo a esta problemática, Así las cosas, los medios electrónicos se muestran como el inmejorable vehículo para el mejoramiento de esta situación. Para nosotros, resulta importante destacar los elementos positivos de la implementación de los medios electrónicos tanto en la administración pública, tanto en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el sentido que, toma fuerza como una figura que permita descongestionar las actuaciones judiciales, pues la oralidad no es la única alternativa para lograrlo. Una combinación de medidas, resultarían más adecuadas, que considerar un solo camino milagroso al problema de marras. Además, a nuestro juicio, la oralidad no ha dado los resultados esperados en procesos como el sistema penal acusatorio ni en la oralidad en los procesos laborales.

Para el consejero de Estado Luis Fernando Álvarez Jaramillo, una de las principales causas de la congestión judicial es “*la falta de debida aplicación de las nuevas tecnologías informáticas*”<sup>302</sup>. Es decir, es urgente la implementación de éstos para coadyuvar en la rápida descongestión que se anhela y las respuestas que los ciudadanos esperan, sean a tiempo presente. En razón de la eficiencia por parte de la administración de justicia soportada en “*respuestas rápidas y oportunas*”<sup>303</sup>

En lo atinente a las actuaciones judiciales, para el jurisconsulto, Juan Ángel Palacio Hincapié, un procedimiento más dinámico y con la posibilidad de ayudar a la descongestión sería el proceso en línea, “*en el cual se pierda el temor a las actuaciones por medios electrónicos y donde los jueces no consideren que si una demanda o un simple memorial no se presenta personalmente, no puede adelantarse ninguna actuación*”<sup>304</sup>.

Asimismo, para Galindo Vácha, una de las reales causas de la congestión es: “*la falta de soporte administrativo y tecnológico de los despachos judiciales, para lo cual propone la incorporación de las facilidades tecnológicas en el procedimiento. Si se aplican bien estos*

---

<sup>302</sup> ÁLVAREZ JARAMILLO Luis Fernando en la presentación a la primera edición del *Comentarios al nuevo Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo*. Enrique José Arboleda. Legis, 2012. XXIX

<sup>303</sup> Estrategias para la descongestión en lo contencioso administrativo: Proceso modelo y Proceso testigo, Colección Reformas en la rama judicial, 2006, p. 21.

<sup>304</sup> PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo, Octava Edición, Medellín, Librería Jurídica Sánchez, 2013. p. 6.

*soportes informáticos en el sistema procesal, nos beneficiaremos en la impulsión y decisión de procesos*”<sup>305</sup>. En ese orden de ideas, resulta de interés citar la propuesta para mejorar la gestión de los despachos judiciales, que está acorde con los planteamientos que se han hecho anteriormente sobre el expediente judicial electrónico donde pasemos a establecer: *“una oficina judicial sin papeles y abierta a los ciudadanos, de modo que cualquier persona que tenga relación con los órganos judiciales pueda desarrollar labores como la presentación de escritos o la recepción de notificaciones*”<sup>306</sup>. El objetivo de esta propuesta estaría dirigida a que el uso del papel sea lo excepcional<sup>307</sup>. Puestas las cosas así, el uso de los medios electrónicos, como solución para descongestionar los procesos contencioso administrativos, es apremiante.

De esta manera y entendiendo que el Contencioso Administrativo, está en la necesidad de tomar medidas que funden, un verdadero cambio positivo en esta Jurisdicción en pro de administradores y funcionarios de Justicia, para generar un cambio de manera real y efectiva en los usuarios de la misma. Conforme a lo planteado previamente, Se hace indispensable el uso de las tecnologías de la información como solución para la congestión Judicial<sup>308</sup>, lo cual va a repercutir en el incremento de rendimiento y productividad en los despachos judiciales. Pues al no haber necesidad de presencia física, estaremos ante un ahorro de tiempo al usuario que al mismo tiempo libera los despachos de atención al público<sup>309</sup>. De esta manera la justicia se direccionará en agilidad y eficacia adecuada a el cambio que representa la Ley 1437 de 2011 frente al anterior código.

---

<sup>305</sup> GALINDO VÁCHA, Juan Carlos. Derecho Procesal Administrativo, Tomo I, 3ra edición, Pontificia Universidad Javeriana, Temis, Bogotá, 2013, p.80-81.

<sup>306</sup> RESTREPO MEDINA, Manuel, Alberto, Estudio regional de la congestión en la jurisdicción administrativa, Bogotá, PNUD, 2011, 263-283 p. 278.

<sup>307</sup> *Ibídem*, p. 276.

<sup>308</sup> El acuerdo no. PSAA12-9139 del 17 de enero de 2012 adopta el plan especial de descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro del cual se contempla la utilización de medios electrónicos para este fin.

<sup>309</sup> RESTREPO MEDINA, Manuel, Alberto, Estudio regional de la congestión en la jurisdicción administrativa, Bogotá, PNUD, 2011, 263-283 p. 278.

## **Conclusiones de capítulo.**

El estado colombiano a través del Código General del Proceso, ha trazado una ambiciosa meta, lograr la creación del litigio en línea. Este quehacer, hace parte del plan en línea de justicia digital, la cual en sus alcances ha de permitir un mejor desempeño del hacer judicial administrativo, si se tiene en cuenta las anotaciones referidas con anterioridad. Asimismo, la llamada congestión judicial, cedería espacios a la eficiencia administrativa de lo contencioso, en razón de los principios de celeridad, justicia pronta y eficaz, como producto o resultado del uso de los medios electrónicos.

## CONCLUSIONES

La realidad de la tecnología y su ingente crecimiento y desarrollo no es ajena al mundo jurídico, por lo cual se hace necesario construir puentes entre estos saberes para la optimización del segundo por mano del primero. En virtud de lo anterior, el presente trabajo realiza un análisis documental de la utilización de los medios electrónicos en la administración pública y en el proceso judicial administrativo, con el fin de conocer el alcance, retos y expectativas que alrededor de éstos se tiene y su incidencia en el quehacer de las instituciones del Estado.

La pregunta problema que se esbozó al inicio del texto de marras, se responde teniendo en cuenta el criterio de la incidencia de las implicaciones de dichos medios en relación a los principios constitucionales y propios de la ley que los regula. En ese sentido, se logra posicionar el concepto del uso de los medios electrónicos como respuesta a una creciente necesidad de mejorar, de forma global los procedimientos y relaciones de la entidad pública y judicial con sus asociados.

Del estudio de la utilización de los medios electrónicos por parte de las autoridades, se extrae que pertenecen a procesos de globalización, y no se enmarcan dentro del fenómeno del mimetismo como tal, pues estas adaptaciones normativas si bien es cierto no tienen un carácter de originalidad, si responden a las demandas de la sociedad Colombiana de utilizar estos medios en varios ámbitos conforme a la globalización de los mismos.

Así planteado, consideramos lo siguiente:

- I. La utilización de los medios electrónicos es necesaria para el mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones públicas y judiciales del Estado. Cuyo fin, es dinamizar los procesos, disminuir la congestión, preservar el medio ambiente con la supresión del papel, generar interconectividad y poner en vanguardia a la administración estatal mediante las tecnologías, sin perjuicio de la distancia, la

tramitología y demás barreras que puedan existir. Se busca, entonces, optimizar las relaciones y agilizar los procesos.

- II. El concepto del uso de los medios electrónicos, regulados por el CPACA, tanto en la administración pública como la de lo contencioso administrativo, ceden espacio, al denominado: procedimiento administrativo electrónico y proceso judicial electrónico. Esto, en perspectiva normativa y de un presente cercano. Téngase en cuenta que algunos procedimientos de este orden ya se están utilizando en los espacios referidos.
- III. La inclusión del uso de los medios electrónicos a la vida pública de instituciones y al servicio de los ciudadanos deben garantizar los derechos inherentes del ciudadano, consagrados por la constitución y apuntalados en los principios rectores del nuevo código y, a la vez, permitir su acceso. Esto es, que las tecnologías implementadas no cambian los aspectos sustantivos de las instituciones en sus diferentes procedimientos y, de especial manera, los propios del hacer judicial administrativo. Lo procesal y de fondo judicialmente dicho, permanecen bajo la égida de la normatividad existente.
- IV. La implementación la utilización de los medios electrónicos, sigue en buena medida, los ejemplos de otras naciones, que ya han hecho uso de éstos, en los ámbitos antes anunciados. Fenómenos como la globalización y el mimetismo, hacen que se realicen exámenes en torno a la forma como se ha concebido para esta nación dicho concepto de los medios electrónicos.
- V. El gobierno electrónico y la sede electrónica como parte de las nuevas estructuras tecnológicas, se enfrentan al desafío de solventar las necesidades surgidas de las tradicionales maneras que las instituciones públicas, han venido haciendo las cosas. Ello, debe estar respaldado en la garantía de derechos como el de igualdad para todos los asociados y el de acceso a estos nuevos instrumentos.

- VI. Uno de los asuntos que se convierte en reto al implementar el uso los medios electrónicos, es que se relaciona con la seguridad de dichas herramientas. Esto es, infraestructuras adecuadas, que no sean vulneradas, en lo posible, por el cibercrimen. También, lo que respecta al personal idóneo y ético, que de manera directa tiene acceso a la información ahí suministrada. Situación de fondo, si observamos que sinónimo de lo público es corrupción.
- VII. De lo anterior, se desprende un sentir como valor social, la confianza que el Estado logre generar en sus asociados. Puntal de las buenas relaciones entre estamento público general y los ciudadanos. Esta relación de confianza mutua, refrenda a una sociedad transformada y necesitada de nuevas expectativas de vida y desarrollo, libre de cortapisas de doble moral, que afecten esta nueva manera de comunicarse.
- VIII. Al tenor de lo dicho, por parte del Estado, debe proveer las herramientas necesarias para que el funcionario de marras, sin perjuicio alguno de marchar a sus funciones públicas, en el nuevo vehículo de interacción social administrativa-judicial, los medios electrónicos. El asunto, se relaciona con las capacitaciones y procesos de formación crecientes, capaces de generar nuevos fundamentos del servicio venido de las instituciones estatales, a partir de las nuevas tecnologías.
- IX. La implementación del uso de los medios electrónicos ha de vérselas con la academia. Pues, ésta juega un papel fundamental en el proceso de cambio de mentalidad y de instrumentos novísimos. Adicionalmente, de ir construyendo un nuevo modo de ver el hacer jurídico a luz de las tecnologías de la comunicación.
- X. Uno de los fines del Estado, en cuanto al uso de los medios electrónicos como el expediente judicial electrónico determinado en la Ley 1437 de 2011., es que éste sea pilar de lo que el Código General del Proceso ha denominado litigio en línea.

## BIBLIOGRAFÍA

### DOCTRINA, TRATADOS Y MANUALES

ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José. *Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*, Bogotá, Legis, 2012.

BARROS CANTILLO, Nelson, *Las nuevas herramientas de la argumentación jurídica*. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2005.

CARAMÉS, Javier Guillén. *La administración electrónica: ¿mito o realidad para los ciudadanos del siglo XXI?* Centro PwC & IE del Sector Público, 2010.

CARDENAS BORRERO, Tiberio; PÉREZ COLMENARES, Ramiro; MORALES RESTREPO, Didier, *Código de Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo comentado*, Vigésima cuarta edición, Leyer, 2015.

CEPEDA, Manuel José, *Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991*, Temis, Bogotá, 1992.

CHARRIA SEGURA, Juan Manuel, *Reflexiones Constitucionales II*, Ibáñez, Bogotá, 2012.

CHÁVARRO, Luis Alfonso. *Tecnología, sociedad e información: una aproximación sociológica a las implicaciones sociales de las tecnologías de información y comunicación*. Universidad del Valle, Programa Editorial, 2008.

CHEVALLIER, Jacques. *El Estado posmoderno*. Editorial de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2011.

*Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, Decreto 1736 de 2012, Paralelo con legislación anterior*, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, 2012

*Derecho a la información, hábeas data e internet*. Dirigido por Juan F. Armagnague, coordinado por María G. Ábalos y Olga P. Arrabal de Canals, Ediciones La Roca, 1º edición Buenos Aires, 2002.

DEVIS ECHANDIA, Hernando, *Compendio de derecho procesal*. Tomo I, Bogotá, ABC, 1972.

GALINDO VACHA, Juan Carlos. *Derecho Procesal Administrativo*, Tomo I, 3ra edición, Pontificia Universidad Javeriana, Temis, Bogotá, 2013.

GÜECHÁ MEDINA, Ciro Nolberto, *Derecho Procesal Administrativo*, Tercera edición, Ibáñez, Bogotá, 2014.

-----, *Acciones o pretensiones contencioso administrativas acorde con la Ley 1437 de 2011*, Ibáñez, 2013.

HENAO, Juan Carlos, El daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. *Universidad Externado de Colombia*, 2007.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar, Metodología de la Investigación, sexta edición, Mc Graw Hill, México, D.F., 2014

LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo, Teoría impura del derecho La transformación de la cultura jurídica latinoamericana, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Legis, Bogotá, 2009.

MEMORIAS de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo Volumen III, La Ley y los debates de la comisión de la reforma parte A artículos 1 a 142. Min Justicia y Consejo de Estado, Sala de Consulta y servicio Civil.

MEMORIAS de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo Volumen III, La Ley y los debates de la comisión de la reforma parte A artículos 143 a 309. Min Justicia y Consejo de Estado, Sala de Consulta y servicio Civil.

PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo, Octava Edición, Medellín, Librería Jurídica Sánchez, 2013

PEREZ VILLA, Jorge, Comentarios al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Edición 1ª, Leyer, 2012.

RESTREPO MEDINA, Estudio regional de la congestión en la jurisdicción administrativa, PNUD, Bogotá, 2011.

RINCÓN CÁRDENAS, Erick, *Manual de Derecho Electrónico y de Internet*. Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2006.

RIVERO, Jean, Paginas de derecho administrativo *Libro homenaje*, Universidad del Rosario, Temis, Bogotá, 2002.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo general y colombiano, Decimosexta edición, Temis, Bogotá, 2011.

-----, La estructura del poder político en Colombia. Editorial Temis, Bogotá, 2011.

SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. Acto Administrativo teoría general, T.3, Bogotá, Ed. Legis, 2004.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Procedimientos administrativos y tecnología. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011.

-----, Tratado de Derecho Administrativo. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008.



SERRANO SANTOYO, Arturo; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Evelio. La brecha digital: mitos y realidades, Universidad Autónoma de Baja California, 2003.

TAMAYO JARAMILLO, Javier. Manual de Hermenéutica Jurídica. Análisis constitucional, legal y jurisprudencial, editorial DIKE, 2013.

VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel. La defraudación de la confianza legítima, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, p.333.

VEGA DE HERRERA, Mariela; SUÁREZ BOHÓRQUEZ, Julián, Derecho Procesal Administrativo, Edición: 4ª, Leyer, Bogotá, 2014.

VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho administrativo, décima tercera edición, Legis 2008.

YOUNES MORENO, Diego, Curso de Derecho Administrativo, 9 Edición, Temis, Bogotá, 2014.

-----, Curso de Derecho Administrativo, 7 Edición, Temis, Bogotá, 2004.

#### *ARTÍCULOS, CONGRESOS Y REPORTES*

ÁLVAREZ JARAMILLO, Luis Fernando, *Antecedentes y presentación general de la Ley 1437 de 2011*, Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p. 31-36.

ARAÚJO-OÑATE, Rocío Mercedes, “Acceso a la justicia efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado”, *Revista Estudios Socio Jurídicos*, 2011, 13,(1), pp. 247-291.

BILBAO-OSORIO, Beñat; DUTTA, Soumitra; LANVIN, Bruno. The global information technology report 2013. 2013.

CANOA SUAREZ, Ulises, Justicia Administrativa e implicaciones de la jurisdicción rogada y de la teoría de los motivos y finalidades. En XXVIII congreso colombiano de derecho procesal, Universidad libre, Bogotá, 2007, 556-578.

CÁRDENAS POVEDA, Margarita. La globalización y el impacto de la integración económica en el derecho administrativo colombiano. *IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla AC*, 2014, vol. 8, no 33, p. 77-97.

CERRILLO MARTÍNEZ, Agustí. La difusión de información pública a través de medios electrónicos: claroscuros de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En: *Administración electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso*

*electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en España*, 2010.

CORREA PALACIO, Ruth Stella. “Fundamentos y Objetivos de la Reforma del Libro Primero del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en *Memorias del Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*, Ley 1437 de 2011, Contraloría General de la República, Consejo de Estado, Bogotá D.C., 2011,

DELGADO, Isaac Martín. La gestión electrónica del procedimiento administrativo. *Cuadernos de derecho local* no 21, p. 84-101. 2009

FAJARDO GÓMEZ, Mauricio, Intervención como Presidente del Consejo de Estado, *Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011*, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p.16.

FERRÈRE, Daniel M., "Reflexiones sobre el expediente electrónico", en Ponencias del VI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Publicación del Comité Organizador. Montevideo, Uruguay. 1998,

HALWEIL, Brian. *La situación del mundo 2004: Informe anual del Worldwatch Institute sobre progreso hacia una sociedad sostenible*. Icaria Editorial, 2004.

HESS ARAYA, Christian. Hacia el procedimiento electrónico administrativo y judicial. Ponencia al VII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Lima, Perú; enero del 2000.

HINESTROSA, Fernando, Encrucijadas actuales del Derecho, disponible en *Instituciones Judiciales Y Democracia Reflexiones con ocasión del Bicentenario de la Independencia y del Centenario del Acto Legislativo 3 de 1910*, p. 583-589.

JINESTA, Ernesto. Administraciones Públicas electrónicas: Retos y desafíos para su regulación en Iberoamérica. *Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo. Venezuela, Universidad Andrés Bello. Recuperado el vol. 12. P. 2, 2009*,

KAUFMAN, Ester. Panorama Latinoamericano de Gobiernos Electrónicos. En *Segundo Congreso de Administración Pública*. 2003.

LAGUADO GIRALDO, Roberto, Actos administrativos por medios electrónicos, en *Revista Universitas* No. 105, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2003.

LIIKANEN, Erkki. La administración electrónica para los servicios públicos europeos del futuro. *Lección inaugural del curso académico 2003-2004*, 2003.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén. Instrumentos para el acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica. *Derecho, Gobernanza y Tecnologías de la Información en la Sociedad del Conocimiento*, *Prensas Universitarias de Zaragoza–LEFIS*, Zaragoza, 2009, p. 193- 220.

-----, “Administración electrónica: origen, definición institucional y contexto actual”, en Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, Número 14. 2007.

OSTAU DE LAFONT PIANETA, Rafael Enrique, Justicia Administrativa e implicaciones de la jurisdicción rogada y de la teoría de los motivos y finalidades. En XXVIII congreso colombiano de derecho procesal, Universidad libre, Bogotá, 2007, 317-348

PARDO SCHLESINGER, Cristina “ *Los medios electrónicos en la Ley 1437 de 2011*” en *Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011*” Contraloría General de la República y Consejo de Estado, p. 245 – 257.

PASTOR, José Martín. Bases para el desarrollo del proceso telemático en el proceso civil español. En *Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente:[Coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, 2008]*. Universitat de València, 2008. p. 115-128.

PRATS CATALÁ, Joan. *Las transformaciones de las Administraciones Públicas de nuestro tiempo* en Sainz Moreno, Fernando y otros. Estudios para la Reforma de la Administración Pública. Madrid: INAP, 2004, p. 27-102.

QUINTERO NAVAS, Gustavo Arnulfo. Contencioso Administrativo y medios electrónicos: un gran paso hacia la modernización del ejercicio de la justicia administrativa. Revista de Derecho, comunicaciones y Nuevas Tecnologías N° 6, Diciembre de 2011. ISSN 1909-7786, Universidad de los Andes, p.1 – 27.

-----, Procedimiento administrativo electrónico: aportes de la Ley 1437 de 2011. Revista de Derecho, comunicaciones y Nuevas Tecnologías N° 5, Enero- Junio de 2011, Universidad de los Andes.

RINCÓN CÁRDENAS, Erick, *Estampado cronológico archivo y conservación de mensajes de datos como medidas de seguridad jurídica preventiva*. En Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías núm. 2, Bogotá agosto de 2002.

RODRÍGUEZ, Gladys S. Gobierno Electrónico: Hacia la Modernización y Transparencia de la Gestión Pública. Revista de Derecho. Universidad del Norte. 21:1-23,2004.

RODRÍGUEZ GUTIERREZ, Andrés, el Consejo de Estado Colombiano y el Consejo de Estado Francés, Aproximaciones Y Diferencias, Revista De Derecho Principia Iuris N° 15, Universidad Santo Tomás Seccional Tunja Facultad de Derecho, p.279 - 301.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo, Acciones, pretensiones y recursos contencioso-administrativos: precisiones conceptuales y su relación con la tutela judicial efectiva. en Derecho Procesal Administrativo modernización del Estado y territorio estudios en homenaje a Augusto Hernández Becerra, Bogotá, Ibáñez, 2014, p.341-364.

SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel “*Humanismo y estructuras jurídicas y sociedad tecnológica*” en El Derecho administrativo en los albores del siglo XXI Bogotá: Editorial de la Universidad del Rosario, Bogotá, 2007.

SUAREZ TAMAYO, David. *Derecho Administrativo y los veinte años de la Constitución. Ley 1437 de 2011* en El Derecho Público y los veinte años de la Constitución de 1991/ Miguel Malagón Pinzón (coordinador), Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes, 2013, p. 1-54.

VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel. *Seguridad jurídica, seguridad informática y proceso judicial electrónico en el marco de la Ley 1437 de 2011* en Derecho Procesal Administrativo modernización del Estado y territorio estudios en homenaje a Augusto Hernández Becerra, Bogotá, Ibáñez, 2014, p.583-609.

VALERO TORRIJOS, Julián, *Administración pública, ciudadanos y nuevas tecnologías*, En: El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI, Homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, Tomo III, Coordinador: Francisco Sosa Wagner, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, 2943-2966.

VAN OEL, P. R.; HOEKSTRA, A. Y. Towards quantification of the water footprint of paper: a first estimate of its consumptive component. *Water resources management*, 2012, vol. 26, no 3, p. 733-749. P. 743.

VILASAU SOLANA, Mònica, Derecho de intimidad y protección de datos personales, Editorial UOC, Barcelona, 2005, 93 -139.

ZAMBRANO CETINA, William, Fundamentos y objetivos de la reforma del libro primero del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, *Memorias, Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011*, Bogotá Contraloría General de la República y Consejo de Estado, 2011, p. 37 – 77.

## LEYES

Carta Iberoamericana de gobierno electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Pucón, Chile, 31 de mayo y 1º de junio de 2007 y adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Santiago de Chile, 10 de noviembre de 2007.

Ley Modelo Sobre Comercio Electrónico. Aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. *Nueva York, Publicación de las Naciones Unidas*, 1999.

República de Colombia, Constitución Política de 1991.

República de Colombia, Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

República de Colombia, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011)

República de Colombia, Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)

Reino de España, Ley de Administración electrónica: Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECS)

Reino de España, Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

### *JURISPRUDENCIA*

República de Colombia, Sentencia No. C-037/96 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa Revisión constitucional del proyecto de Ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.

República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-662 del 8 de junio del 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.

República de Colombia, Corte Constitucional Sentencia T-330 del 12 de agosto de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

República de Colombia, Corte Constitucional C-914/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis

República de Colombia, Corte Constitucional T-511/10 de 18 de junio de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

República de Colombia, Sentencia C-595/10, de 27 de julio de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio, Ref. D-7977

República de Colombia, Corte Constitucional Sentencia C-519/94 M.P. Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA 21 de noviembre de 1994.

República de Colombia, Sentencia T-686/07 31 de agosto de 2007 M. P. Jaime Córdoba Triviño.

República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-479/92 M .Ponentes, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. 13 de agosto de 1992.

República de Colombia, Corte Constitucional Sentencia T-068 M.P. Alejandro Martínez Caballero 1998

República de Colombia Consejo de Estado, veintiocho Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, 28 de julio de dos mil catorce 2014, C. P. Susana Buitrago Valencia Rad. 25000-23-36-000-2014-00328-01

República de Colombia Consejo de Estado, 25 de noviembre de 2014, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Radicación número: 68001-23-33-000-2014-00782-01(AC)

República de Colombia Consejo de Estado, 24 de abril de 2014 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Radicación número: 25000-23-41-000-2014-00044-01(AC).

República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-686/07, M. P.: Dr. Jaime Córdoba Triviño de 31 de agosto de 2007 Referencia: expediente T-1620094

## INTERNET

ALEGRIA, Héctor, *Globalización y derecho*, Revista Pensar en derecho, p. 267-284, p. 235 disponible en: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revista-0.php>

ARAYA, Rodrigo; ORREGO, Claudio. Internet en Chile: Oportunidad para la participación ciudadana. *Temas de desarrollo humano sustentable*, 2002, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no 7.

CHAPARRO PRECIADO, Javier Alberto. *Las Tic, una prioridad para el Mintic Y Colombia* disponible en: <http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/las-tic-una-prioridad-para-el-mintic-y-colombia/>

MONTAÑA MERCHÁN Y FÉLIX SERRANO *El impacto de las tecnologías de la información en el servicio público*, 2013. En: [https://vozyvoto.files.wordpress.com/2013/03/2013\\_09\\_10-el-impacto-de-las-tecnologias-en-el-servicio-publico.pdf](https://vozyvoto.files.wordpress.com/2013/03/2013_09_10-el-impacto-de-las-tecnologias-en-el-servicio-publico.pdf)

Estrategia Gobierno en Línea 2012 - 2015. Ver: <http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/e5203d1f18ecfc98d25cb0816b455615/minticmanual3.0.pdf>

Glosario de términos del programa Gobierno en línea disponible en: <http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7742.html>

<http://www.portafolio.co/economia/contraloria-general-modernizacion-tecnologica>

<http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-3.1.pdf>

[https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2307298/3021432/BOLETIN+7+PROGRAMA+SERVIDOR+JUDICIAL+DIGITAL+2+\(1\).pdf/4b74f476-441b-4a16-875a-44d17d982994](https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2307298/3021432/BOLETIN+7+PROGRAMA+SERVIDOR+JUDICIAL+DIGITAL+2+(1).pdf/4b74f476-441b-4a16-875a-44d17d982994)

PEÑARREDONDA, José Luis <http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/la-gran-deuda-que-dejo-diego-molano-vega/>

RINCÓN CÁRDENAS, Erick. *Marco regulatorio de la administración pública electrónica* en Administración pública electrónica y certificación digital al interior de trámites notariales, p. 12, disponible en:

[http://colombiadigital.net/publicaciones\\_ccd/publicaciones/administracion\\_publica\\_electronica.pdf](http://colombiadigital.net/publicaciones_ccd/publicaciones/administracion_publica_electronica.pdf)

VARELA, David Fernando, Mas allá del Expediente digital, Columnas Colombia Digital, disponible en: <http://colombiadigital.net/opinion/columnistas/certicamara/item/7632-mas-alla-del-expediente-digital.html>